mensual/mayo 1981
nueva serie/número 21
ESPAÑA - 100 ptas.

inprecor

correspondencia de prensa internacional / intercontinental press

dossier estado español



Sumario

¡Defendamos la revolución salvadoreña!



La Administración Reagan ha lanzado una nueva ofensiva en Centroamérica. Desde los intentos de intoxicar a la opinión pública norteamericana, reacia desde Vietnam a cualquier tipo de intervención militar en el extranjero, hasta el incremento de la ayuda económica y militar a la Junta Militar salvadoreña, pasando por las operaciones diplomáticas ante los gobiernos aliados de Europa Occidental, el imperialismo trata de aislar a los revolucionarios de Centroamérica. No sólo quiere aplastar al pueblo salvadoreño, también pretende organizar el cerco y el contraataque a Nicaragua y Cuba. La solidaridad con los pueblos de Centroamérica y del Caribe es una tarea primordial y permanente.

Argentina:

El General Viola, nuevo dictador impuesto por la dictadura

Caso curioso en la historia: la dictadura "elige" a un nuevo dictador para asegurar la continuidad de esa misma dictadura. La clave está en la pugna emprendida por sectores de la burguesía de cada a proceder a una institucionalización del régimen, que permita proceder a una reestructuración del aparato

Dossier: el golpe del

Un intento serio de pronunciamiento

Declaración del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional.

La situación en Euskadi

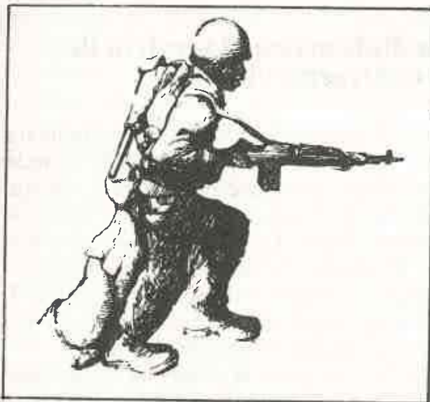
9 de febrero: huelga general contra ETA; 16 de febrero: huelga general en protesta por el asesinato de un militante de ETA. La incongruencia de estos dos acontecimientos —hay que tener en cuenta que las dos huelgas generales fueron las más amplias en la historia de Euskadi— refleja el grado de confusión que reina en amplios sectores del movimiento obrero y popular vasco.

Edita:
Liga Comunista Revolucionaria
(IV Internacional)

apdo. de Correos, 50.370
(Cibeles) Madrid
Imprime Ratlles. Mallorca, 206
Barcelona Dep. Leg. 40029/79

productivo en función de sus intereses. Por desgracia, no es la actividad, y ni siquiera la presión, del movimiento obrero lo que preocupa a las clases dominantes. Son más bien sus propias contradicciones internas.

• página 32



Polonia:

En el seno del POUP se concreta y organiza la oposición

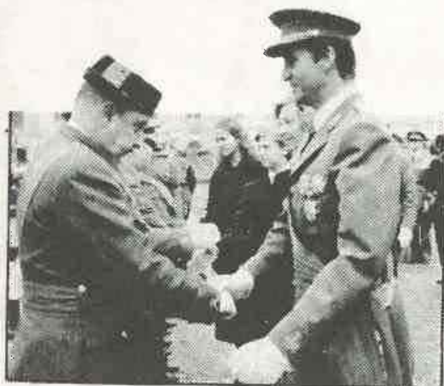
Cerca de un millón y medio de miembros del Partido Obrero Unificado de Polonia, el partido de la burocracia, son también miembros del sindicato independiente Solidarnosc. Este hecho no podía dejar de influir en el propio seno del POUP. En efecto, han empezado a circular proyectos de programas, se celebran reuniones informales, aparecen coordinaciones horizontales... Los propios dirigentes de Solidarnosc observan con mucha atención este proceso.

• página 39



23 de Febrero en el Estado español

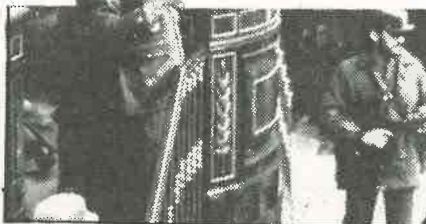
"El Rey ha empezado a desempeñar abirtamente un papel más activo"



Entrevista con Jaime Pastor, miembro del Comité Ejecutivo de la LCR, realizada tres días antes del intento de golpe militar.

• página 19

La amenaza



Las razones del golpe militar. El carácter particular del aparato de Estado en la democracia parlamentaria española. El "desencanto" de los trabajadores y las responsabilidades de las direcciones reformistas. Por qué el gran capital no apoyó el golpe. Por qué no hubo una respuesta inmediata, masiva y combativa, de los trabajadores. Todos estos elementos se analizan en este artículo.

• página 10

La "democracia vigilada" y las tareas de los revolucionarios



Resolución del Comité Central de la LCR sobre la situación actual, las perspectivas y las tareas.

• página 29

Defendamos la rev

LA vasta ofensiva lanzada por el imperialismo norteamericano para defender el poder amenazado de la dictadura y de las clases poseedoras en El Salvador, es la escalada contrarrevolucionaria más importante desde la derrota que sufrió Vietnam en 1975. Se desarrolla a varios niveles.

De entrada, la Administración Reagan acentúa la ayuda militar, económica y política a la Junta Militar y demócrata-cristiana. Además, trata de preparar a la opinión pública norteamericana para que acepte esta política. Quiere borrar de su memoria, en particular de la clase obrera y en las capas más oprimidas y más afectadas por la crisis, el recuerdo del "trauma vietnamita". Finalmente, a través de una gran ofensiva diplomática, trata de obtener la neutralidad, si no el apoyo, de los principales aliados regionales e internacionales de Washington.

Ante todo, Washington quiere el aplastamiento militar de los fundamental de las fuerzas de la guerrilla y de las organizaciones de las masas obreras y campesinas de la resistencia salvadoreña. Pero también persigue otros objetivos.

Para la Administración norteamericana, no sólo se trata de que El Salvador sea un "pequeño ejemplo", sino también de "contener" y hacer retroceder después toda la ola revolucionaria que empezó a surgir en América central desde el derrocamiento revolucionario de Somoza, en julio de 1979. Washington no piensa en impulsar la "contrarrevolución en un solo país". Más allá de los ataques, que desde el punto de vista militar se concretan hoy en las masas salvadoreñas y sus organizaciones, es la revolución nicaragüense y el Estado obrero cubano, acusados de ayudar directamente a la guerrilla de El Salvador, sobre quienes pesa la amenaza.

Intoxicar

En los Estados Unidos, un estudio realizado por la escuela de periodismo de la célebre Universidad de Columbia, ha demostrado que hacia el final del mandato de Carter se dieron consignas discretas, pero acatadas, por parte de los círculos oficiales de Washington, a los grandes medios de comunicación. Había que presentar sistemáticamente a las guerrillas salvadoreñas como "terroristas" frente a una Junta que desea llevar a cabo "reformas". El mismo estudio revela que de diez informaciones publicadas en los medios de comunicación más grandes de los Estados Unidos, en torno a El Salvador, y que se presentaron como objetivas, ocho tienen como fuente a los gobiernos de Wsahington y de El Salvador.

Una película de 25 minutos, titulada **Ataque contra las Américas**, financiada por un grupo de presión ultrarreaccionario, el Consejo de Seguridad Americano, ya ha sido difundida por las cadenas locales de la televisión de más de 31 ciudades. Ronald Reagan, Henry Kissinger y Jane Kirkpatrick, embajador de los EE.UU. en la ONU, son las vedettes y muestran los "peligros" que corren los Estados Unidos en Centroamérica.

Esta campaña de intoxicación tiene por objeto ocultar el hecho, que sin embargo es harto evidente, de que Washington apoya el poder de una oligarquía que ejerce el terror de masas, y que no admite que los pueblos puedan tomar en sus manos su destino. en el "coto privado" de los Estados Unidos que debería ser, según ellos, la América Central.

El nuevo secretario de Estado, el general Alexander Haig, ya ha explicado, por lo demás, que el principal objetivo de la misión norteamericana enviada a Europa consistía en combatir la campaña de propaganda que acusa a los Estados Unidos de preparar una "intervención directa en El Salvador".

La diplomacia al servicio de la contrarrevolución

En el plano diplomático, la Administración republicana ha emprendido grandes maniobras. Laurence Eagleburger, antiguo adjunto de Kissinger, ha visitado Bruselas, Londres, París, La Haya y Bonn, para buscar el apoyo de los gobiernos europeos, después de haber "demostrado" que a El Salvador llegan armas procedentes de Cuba, Nicaragua e incluso de Vietnam...

En Washington, el miércoles 18 de febrero, Alexander Haig reunió a los embajadores norteamericanos de Nueva Zelanda, Australia, Japón y España, para que se ocupen de "construir un apoyo internacional para las próximas iniciativas de la Administración Reagan". Finalmente, Vernon Waters, antiguo subdirector de la CIA, ha de recorrer las capitales sudamericanas para explicar los planes del imperialismo.

Todo este tráfago debe permitir evitar el aislamiento internacional de la Junta y que se reproduzca un fenómeno que había alcanzado toda su amplitud en los últimos días del régimen Somoza. En este intento de "dorar la píldora" del gobierno salvadoreño, los emisarios de Reagan utilizan tanto la





aportación como la "tarjeta de visita" que sigue siendo la participación de los demócratas cristianos en la Junta.

Esto no sólo es cierto en relación a determinados países latinoamericanos, como Venezuela, Colombia y Costa Rica, sino también a sectores importantes de la burguesía europea. Hay que recordar como el giscardiano Jean Lecanuet saludó la acción de su homólogo Napoleón Duarte. Además, la carta demócrata-cristiana alimenta la demagogia imperialista en torno a los "planes de reforma" que pondrían en práctica Napoleón Duarte y sus pares cuando se haya liquidado la guerrilla de extrema izquierda.

Una parte del argumento norteamericano se consagra a demostrar a los gobiernos, que por cierto no piden ser convencidos, los peligros de contagio y la caída sucesiva de los dominós en toda América Central. Insiste en la situación de extrema dificultad en que se encuentran el imperialismo y las burguesías nacionales, una vez que la insurrección popular ha hecho estallar, como sucedió en Nicaragua cuando la insurección del 19 de julio de 1979, los cuerpos represivos del Estado burgués.

Se trata también de que los aliados de los EE.UU. "endosen", en cierto modo, toda política de intervención norteamericana en El Salvador y en Centroamérica. Por ejemplo, hay que reconocer que la gira europea de Laurence Eagleburger no ha resultado estéril. Además del previsible apoyo del gobierno conservador británico de Margaret Thatcher, el ministro belga de Asuntos Exteriores, Charles-Ferdinand Nothomb, ha condenado los "envíos clandestinos de armas". El gobierno francés, que suministra armas (particularmente helicópteros) al gobierno salvadoreño, ha contribuido recientemente a reforzar el potencial militar del ejército hondureño, suministrándole una docena de aviones Mystère IV.

Según el *International Tribune*, que cita fuentes gubernamentales francesas, el gobierno Giscard-Barre *"no tendría nada que objetar a un incremento de la ayuda norteamericana a El Salvador, de acuerdo con el modelo de la ayuda que presta Francia a los países africanos amigos"*.

Cuando se recuerda el envío de tropas francesas a Chad, al Zaire, a Djibuti y a Africa Central, se ve hasta dónde llega el apoyo francés... Así, las burguesías europeas podrían responder positivamente a las peticiones de ayuda económica lanzadas por Napoleón Duarte.

Finalmente, estas "grandes maniobras" diplomáticas están destinadas a aislar a nivel internacional a las fuerzas revolucionarias salvadoreñas. En particular, la Administración republicana trata de contrarrestar las iniciativas internacionales lanzadas con cierto éxito por el FDR y el FMLN, particularmente ante sectores de la socialdemocracia.

Más allá de las denuncias que haya podido expresar contra la Junta y la política norteamericana, la socialdemocracia tiene sus propios objetivos. *La Frankfurter Allgemeine Zeitung* del 14 de febrero de 1981 escribía: *"Los responsables latinoamericanos influyentes en la Internacional Socialista se han reunido secretamente en París para convencer a la oposición salvadoreña de que acepte una solución negociada"*.

El diario madrileño *"El País"* del 18 de febrero explicaba que estaban estableciéndose contactos entre la Internacional socialista y la Unión Mundial Demócrata-Cristiana, para tratar de entablar dicho diálogo. Finalmente, el 23 de febrero, se señalaba de "fuentes bien informadas", en Bonn, que los dirigentes del SPD y del CDU se planteaban celebrar en territorio alemán, a comienzos de marzo, entrevistas que podrían implicar a Napoleón Duarte y al presidente titular del FDR, Guillermo Ungo, que es miembro de la Internacional Socialista.

Esta "solución negociada" sólo puede contar con los favores de sectores burgueses europeos y latinoamericanos, en primer lugar en México. Así, la burguesía mexicana quisiera evitar una extensión de la revolución socialista hasta sus fronteras, pero no por ello desea que su demagogia antiimperialista sea sometida a una dura prueba con la escalada de la intervención norteameri cana indirecta, o incluso directa, ante sus puertas.

Una "solución negociada" sólo tiene la posibilidad de imponerse en la práctica si se produjera un retroceso muy importante de las fuerzas políticas y militares de la revolución sobre el terreno. Los sectores más moderados del FDR, el socialdemócrata y el cristiano-social, tratarían entonces de poner en tela de juicio la hegemonía conquistada por las fuerzas revolucionarias, gracias a su acción, su implantación y su fuerza organizativa.

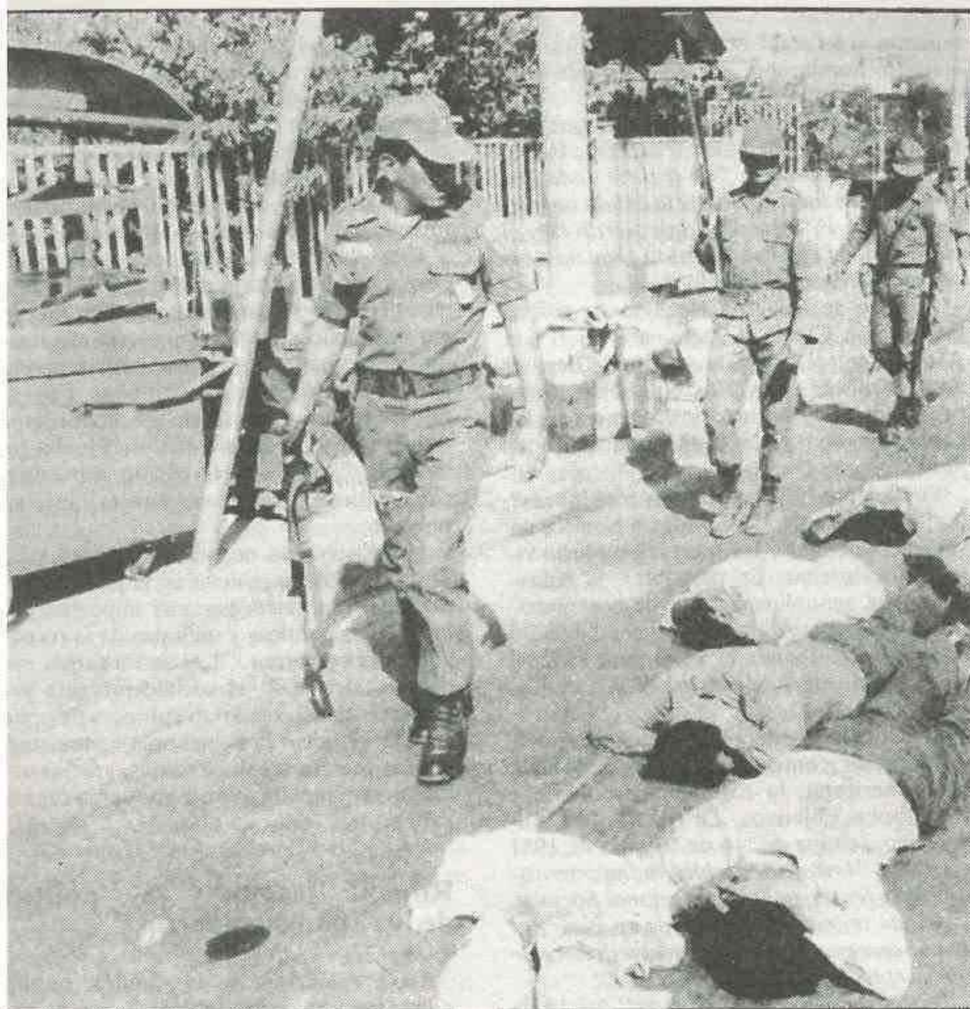
Ronald Reagan y la "política de los 100.000 muertos"

La preparación de la opinión pública norteamericana e internacional, y el activismo diplomático de Washington, sólo cumplen hoy por hoy una función: rebajar al máximo el precio político que deberá pagar el imperialismo norteamericano para





olución salvadoreña



cumplir el objetivo prioritario que se ha propuesto, el de aplastar la guerrilla y al movimiento popular. En el actual estado de polarización social y dada la relación de fuerzas políticas y militares de El Salvador, esto significa dar a la Junta luz verde y los medios para aplicar la "política de los 100.000 muertos" que implicaría el aplastamiento de la revolución en este país.

La auténtica escalada militar es a este respecto impresionante. Pocos días antes de la asunción de poderes por Reagan, el propio Carter relanzó la ayuda a la Junta, desbloqueando un crédito de 64 millones de dólares, congelado tras el salvaje asesinato de cuatro monjas norteamericanas, y aumentándolo en 10 millones más.

Desde hace meses, el ejército salvadoreño envía a sus oficiales para formarse en las bases de los Estados Unidos en la Zona del canal de Panamá, como es la famosa escuela de contrainsurgencia de *"Las Américas"*.

El ejército salvadoreño recibe entrenamiento de militares hondureños y gualtemaltecos (de la 3ª División), expertos de la "guerra especial". Ha recibido el refuerzo de mercenarios, en muchos casos antiguos guardias nacionales somocistas. De acuerdo con el FMLN, en El Salvador ya hay más de 800 consejeros norteamericanos, encargados de encuadrar a las fuerzas armadas, de asegurar las transmisiones y el mantenimiento de las armas más sofisticadas (helicópteros de combate antiguerrillero), y de organizar la información, con los métodos de tortura elaborados por la CIA. Decenas de aviones de carga *Hércules C 130* depositan su material de destrucción y de muerte en las bases de Ilopango y de Espíritu Santo.

La coordinación entre los ejércitos de Honduras, Guatemala y El Salvador es cada vez más estrecha. La escalada militar norteamericana también está dirigida contra la revolución nicaragüense. Washington acentúa el estrangulamiento económico de Nicaragua. Se ha suspendido la transferencia de los últimos 15 millones de préstamo de 75 millones de dólares, cuando las necesidades de divisas son enormes. Washington reclama además una investigación detallada para saber si los 60 millones ya transferidos, tal como se había convenido, se han destinado prioritariamente a reforzar el sector privado de la economía.

Paralelamente se desarrolla, con el concurso de todos los grandes medios de comunicación imperialistas, la campaña de calumnias montada por José Esteban González, presidente de la oficina privada llamada "Comisión permanente de derechos humanos" en Nicaragua. Este último ha afirmado que los presos políticos son torturados y que el número de desaparecidos ha alcanzado a 800. ¿Hay qué recordar que la tan oficial "Comisión Internacional de juristas", con sede en Washington, tuvo que reconocer que los derechos humanos son respetados ejemplarmente por parte del gobierno sandinista?

Los ataques militares conducidos desde la frontera hondureña por los comandos de antiguos guardias somocistas demuestran que Washington, además de querer aplastar a las fuerzas revolucionarias salvadoreñas, trata de explotar también todas las oportunidades para tratar de hacer que gire hacia atrás la rueda de la historia en Nicaragua.

Por boca de Alexander Haig, el gobierno y la prensa norteamericanos quieren descubrir, después de un año de guerra civil, que el ejército salvadoreño estaba "gravemente infraequipado". El senador republicano Percy, que se había desplazado a Moscú en nombre del equipo de transición de Reagan, para explicar el punto de vista de la nueva Administración a los soviéticos, multiplica las declaraciones en el mismo sentido. Su objetivo es evidente: preparar una mayor intervención de los Estados Unidos. Washington quiere descubrir de antemano los crímenes más monstruosos que prepara la dictadura salvadoreña, que ya ha asesinado a más de 3.000 personas desde comienzos del año 1981.

Más de 15.000 muertos desde que llegó al poder la Junta. En un país de 4,5 millones de habitantes, esto rebasa ya el terrible precio que tuvo que pagar el pueblo iraní para derrivar a la dictadura de Palhavi. Estas macabras cifras permiten comprender que el imperialismo y las clases poseedoras de América Central están dispuestos a aplastar torturar y masacrar a todo un pueblo para asegurar sus intereses.

Reforzar sin demora el movimiento internacional de solidaridad con la revolución de El Salvador, defender la revolución nicaragüenses, denunciar las amenazas de bloqueo contra el Estado obrero cubano, deben ser las tareas cotidianas del movimiento obrero y revolucionario a escala internacional. ■

Estado Español

Un intento serio de pronunciamiento



EL pasado 23 de febrero, en el Parlamento comenzaba la votación de investidura, de Leopoldo Calvo Sotelo, propuesto por su partido, la "Unión de Centro Democrático" (UCD), para formar el gobierno más reaccionario que haya conocido el Estado español desde la dimisión de Arias Navarro a mediados de 1976. Apenas iniciada, la sesión parlamentaria se vió interrumpida por el asalto de dos compañías de la Guardia Civil, mandadas por el teniente coronel Tejero.

Tejero no estaba solo

En aquel mismo momento, el capitán general de Valencia, Miláns del Bosch —un activista de extrema derecha, que es uno de los miembros más influyentes de la jerarquía militar española— decretaba el estado de excepción en la región bajo su mando, procedía a ocuparla militarmente, declaraba el toque de queda y prohibía la actividad de los partidos y sindicatos..., publicando un bando que reproducía gran parte del llamamiento lanzado por Franco para proclamar el "alzamiento" del 18 de julio de 1936.

Poco más tarde, una compañía de la principal división de intervención del Ejército español —la División Acorazada Brunete, que precisamente había estado durante varios años bajo las órdenes de Miláns del Bosch—, se apoderaba de la Radio-Televisión española, obligándola a difundir exclusivamente marchas militares. Es evidente que muchos otros sectores del ejército, y muy importantes, permanecían entonces a la expectativa.

El teniente coronel Tejero había sido uno de los principales instigadores de otro intento de golpe de Estado, llamado "Operación Galaxia", en el mes de noviembre de 1978, y pese a todo había conservado su cargo en el Ejército.

Durante las semanas que precedieron a estos hechos, varios jefes militares habían pronunciado públicamente a favor del "restablecimiento del orden" por el Ejército.

Finalmente, aquel mismo 23 de febrero, la policía realizaba una "huelga de silencio", que era la prolongación de las diversas manifestaciones de rebelión contra el gobierno, realizadas los días anteriores para protestar contra la campaña de denuncia de la práctica sistemática de la tortura, lanzada tras el asesinato, bajo la tortura, del militante nacionalista vasco Arregui.

Sólo pocas horas después del comienzo del golpe de Estado se podía pensar que los golpistas estaban perdiendo la partida. El discurso pronunciado por el Rey, a la una de la madrugada del 24 de febrero —más de seis horas después de la toma del Parlamento—, mostró que necesitó un tiempo considerable para lograr controlar la situación del Ejército. Así, sólo pasado el mediodía

del 24 de febrero se obtuvo la rendición de Tejero, quedando libre los parlamentarios y miembros del Gobierno.

No se trata de una aventura protagonizada por un grupo marginal de guardias civiles dirigidos por un trastornado, sino que se trata de una auténtica tentativa de pronunciamiento militar, de que existen numerosos ejemplos en la historia de España, una tentativa extremadamente grave, cuyo objetivo declarado consistía en presionar al Rey para formar un gobierno militar que acabaría con las libertades democráticas y ejercería la represión contra el movimiento obrero y las organizaciones nacionalistas.

Un aparato de Estado construido por la dictadura

¿Cómo pudo producirse un intento de golpe de Estado de tal envergadura? La respuesta a esta pregunta reside en la naturaleza misma del régimen político y de las instituciones surgidas de lo que ha venido en llamarse la "Reforma", iniciada a finales de 1976.

El Rey fue el principal impulsor de este proceso, que debía conducir a la instauración de un régimen parlamentario, *con la condición* de que fuera completamente preservado el aparato de Estado heredado del franquismo, y muy en particular la jerarquía militar, la policía y el sistema judicial.

Los partidos obreros mayoritarios, PSOE y PCE, aceptaron a su vez este chantaje y obligaron a los trabajadores a aceptarlo. Desde entonces, no sólo han rechazado toda acción de masas contra las múltiples agresiones y provocaciones lanzadas por este aparato de Estado. So pretexto de la "lucha contra ETA", prestaron en repetidas ocasiones su apoyo a esta represión, para terminar votando en el mes de octubre pasado, una "ley antiterrorista" ultrarreaccionaria.

El aparato represivo del franquismo está y permanecerá intacto, pese a las inevitables sanciones probablemente bastante suaves, que se producirán contra una parte de los militares más directamente implicados en el intento de golpe de Estado.

No se trata de un problema planteado por la existencia de "unos cuantos fascistas", que podría resolverse con algunas pequeñas reformas; se trata de la existencia de un aparato represivo construido a lo largo de 40 años de dictadura, y que debe ser radicalmente eliminado, para que desaparezcan las amenazas que conlleva.

El Rey gana

¿Por qué fracasó el golpe de Estado? Todo el mundo subraya el papel que desempeñó el Rey y todo el mundo parece felicitarse —empezando por las direcciones del PSOE y del PCE— por el refuerzo que esto ha significado para su autoridad.

La realidad es que con la ocupación del Parlamento, se puso en evidencia la extrema fragilidad de las instituciones políticas del régimen (Parlamento, Senado, Gobierno...). Sólo el Rey conservaba alguna autoridad, aunque los hechos hayan revelado los límites de su control sobre una parte significativa de la jerarquía militar.

Por lo demás, son sectores sociales minoritarios los que desean hoy un golpe de Estado. La inmensa mayoría de la burguesía pretende continuar ejerciendo su poder en el marco de las instituciones políticas actuales. Además, esta es la posición de los principales gobiernos imperialistas. Así, es normal que cuando llegó la noticia de la ocupación del Parlamento, hayamos asistido a manifestaciones de apoyo incondicional al Rey por parte de las organizaciones patronales, partidos burgueses, y gobiernos nacionales de Catalunya y Euskadi...

Lo que es verdaderamente dramático y grave para el porvenir del movimiento obrero y de las nacionalidades del Estado español, es que los sindicatos y los partidos mayoritarios hayan firmado inmediatamente un cheque en blanco al Rey, llamando expresamente —con algunas vacilaciones en el caso del PCE— a la desmovilización más absoluta.

En esas condiciones, el Rey no tuvo la menor dificultad para encarnar su papel como Jefe "constitucional" del Estado burgués y del ejército. Su función bonapartista ha aparecido con mayor claridad ante la crisis abierta de la política de la burguesía. El Rey presidió las reuniones de la única instancia política del Estado que haya permanecido realmente en funciones —incluso después de que los parlamentarios hubieran regresado a sus casas—, la Junta de Jefes de Estado Mayor. El Rey convocó, en la tarde del 24 de febrero, a los dirigentes de Alianza Popular (AP), Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Comunista de España (PCE), a una "reunión informativa" tras la cual Santiago Carrillo expresó que hubo "acuerdo total de todos los participantes" con el Rey.

Por tanto, es cierto que los poderes del Rey se han reforzado pero esto no significa en absoluto que se haya reforzado la democracia, como quieren dar a entender los dirigentes reformistas. Las amenazas que blande la reacción contra las masas trabajadoras no han disminuido, sino todo lo contrario, han aumentado.

En primer lugar, la capacidad de presión política del aparato represivo se ha incrementado. Es cierto que los militares más claramente implicados en la intentona de golpe de Estado han sido sancionados. En cambio, los que representan el peligro futuro, son los jefes del ejército "leales", y sobre todo los más reaccionarios de ellos, a los que el Rey expresó su agradecimiento por su "lealtad". El Rey empleará su autoridad para llegar a un compromiso con ellos, y sus efectos no tardarán en manifestarse en el Estado español.

En segundo lugar, se ha reforzado la ca-



pacidad del nuevo gobierno Calvo Sotelo para poner en práctica su programa, incluso en una forma aún más derechista que la prevista. Es sintomático, a este respecto, que los nacionalistas catalanes, que habían decidido abstenerse en el voto de confianza al gobierno Calvo Sotelo —en la víspera del golpe de Estado—, declara hoy que votarán a favor.

Finalmente, y lo más fundamental, la actitud de las direcciones obreras reformistas frente a la monarquía acentúa la desorientación política de los trabajadores.

Los reformistas desmovilizan

Nadie puede poner en duda la voluntad de la clase obrera y los pueblos del Estado español —que han sufrido el franquismo hasta no hace tanto tiempo— a oponerse a un golpe de Estado reaccionario. Conocen por su propia experiencia la eficacia y la necesidad de la movilización de masas para hacer frente a estas agresiones.

Es cierto que existe en el movimiento obrero español cierta desmoralización, o desconcierto, organizado desde hace tiempo por las direcciones del PSOE y del PCE, que acaban de mostrarse incapaces de responder a la intentona de golpe de Estado.

Sin embargo, a pesar de ello, sólo hace pocos días que decenas de millares de personas participaron en la manifestación más grande de la historia de Euskadi, contra los torturadores de la policía. Asimismo, durante las últimas semanas, decenas de miles de trabajadores habían protagonizado luchas, tanto en los sectores industriales en crisis como en los transportes públicos...

Los trabajadores españoles han conservado su capacidad de acción y de respuesta. Las propias vacilaciones de las organizaciones reformistas, tras un intento de golpe de Estado, lo revelan. Mientras que las direcciones de las Comisiones Obreras (CC.OO.) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) publicaban su primer comunicado, llamando exclusivamente a la calma y a tener confianza en el Rey, las CC.OO. de Catalunya llamaban a dos días de huelga general, el Partido Comunista de Euskadi llamaba también a la huelga general, e incluso un primer comunicado, rápidamente rectificado, emitido por la dirección central del PCE, incluía un llamamiento en el mismo sentido.

A petición de nuestros camaradas de la Liga Comunista revolucionaria (LCR) de Madrid, el PCE llamó con nosotros a una concentración, la misma noche del golpe de Estado, frente al Parlamento, pero retiró posteriormente el llamamiento. Asimismo, las direcciones de las Comisiones Obreras y de la UGT se vieron forzadas a rectificar un poco su actitud y llamaban a dos horas de huelga para la jornada del 24 de febrero, con la excepción de los servicios públicos, y manteniendo su negativa a las manifestaciones callejeras y reiterando "su confianza al Rey".

Lo que faltó no fue la voluntad de luchar. Lo que faltó fue la voluntad de hacerlo por parte de las direcciones mayoritarias del movimiento obrero. En cambio, lo que no les faltó fue la cobardía. Jamás aprenden nada de la experiencia, de las derrotas que provocaron en el pasado y que ellas mismas tuvieron que sufrir. No han aprendido que el único arma, y la más segura contra todo intento de golpe de Estado reaccionario, es la huelga general, la movilización inmediata de los trabajadores en la calle, el control de todos los servicios públicos por los huelguistas...

Incluso los sectores que en un primer momento habían ido un poco más lejos —como la dirección del PCE de Euskadi o de CC.OO. en Catalunya—, se echaron atrás muy pronto, y de hecho no hicieron nada por poner en práctica sus propias consignas, y se apresuraron en echarse a los pies del Rey, junto con sus dirigentes.

Ellos son los responsables de aquellas escenas dramáticas que se desarrollaron en tantas empresas, en que el Comité de Empresa, con los elementos más decisivos y los sindicalistas de vanguardia, estaban pendientes de la radio para saber qué había que hacer. Ellos son también, una vez más, los que se esforzarán por justificar su capitulación explicando que no había "relación de fuerzas", pero son ellos los que impiden que la relación de fuerzas real se exprese políticamente, que el movimiento obrero se ponga en posición de combate, en lugar de víctima de las agresiones de la reacción.

El posible la movilización unitaria

Era necesario y posible actuar de modo distinto. Como lo hizo la LCR cuando llegó la noticia del intento de golpe de Estado: movilizando a los trabajadores por la huelga general, llamando a la acción unitaria, por la disolución de los cuerpos represivos, por la depuración del aparato de Estado, por exigir que sean castigados todos los responsables implicados en el intento de golpe de Estado, por la defensa de las libertades democráticas. Los primeros llamamientos a la lucha que pudieron escuchar los trabajadores españoles estaban firmados por la sección de la IV Internacional en el Estado español.

Son los acontecimientos importantes los que ponen a prueba las orientaciones políticas y a los partidos. En el caso presente, las pruebas son evidentes y las lecciones también. Es vital aprender de ellas.

Por encima del clima artificial y temporal de "unidad nacional" que pueden prevalecer, sólo la movilización unitaria de todos los partidos y sindicatos obreros, de todas las organizaciones nacionales revolucionarias, puede defender las libertades democráticas y luchar por el desmantelamiento del aparato de Estado heredado del franquismo. Sólo combatiendo toda clase de pacto con la burguesía, toda confianza en las instituciones del Estado burgués —y muy particularmente en la monarquía—, el movimiento obrero podrá recuperar su confianza en sus propias fuerzas y su capacidad de dirigir a todos los explotados, y en particular a los pueblos de las nacionalidades oprimidas. Sólo así será posible hacer frente y derrotar a las próximas y probablemente más graves intentonas golpistas.

Vigilancia internacional permanente

Los acontecimientos ocurridos en España tomaron por sorpresa al movimiento obrero internacional. Parecía que después de la caída de las dictaduras de Portugal, Grecia y España, el peligro de los golpes de Estado militares ya no era actual en la Europa capitalista.

Pero aunque en España existe una situación específica, debida al mantenimiento del aparato represivo del franquismo, este intento de golpe de Estado debe recordar en todo caso —y particularmente al movimiento obrero europeo—, que existen sectores de la burguesía decididos a defender el orden burgués utilizando la fuerza del Ejército y la policía para reprimir masivamente a la clase obrera y a sus aliados. Es por ello que la solidaridad con la clase obrera y las nacionalidades oprimidas del Estado español, por parte de la clase obrera de la Europa capitalista, debe mostrar su determinación de derrotar toda intentona reaccionaria. Debe servir también para educar a la vanguardia obrera en torno a las batallas de clase del futuro.

Finalmente, es necesario difundir en el seno del movimiento obrero internacional la verdad sobre lo que sucedió en España y sobre todo las amenazas que continúan sufriendo los trabajadores. Hay que estar dispuestos a responder solidariamente a todo atentado contra las libertades democráticas. Hay que apoyar al movimiento obrero en su lucha por acabar con los restos del franquismo. Hay que permanecer en estado de alerta permanente para ayudar a los trabajadores y a los pueblos del Estado español en todos los momentos difíciles que tienen por delante.

24 de febrero de 1981

Declaración del Secretariado unificado de la IV Internacional



POR eso, en el movimiento obrero español ha renacido la necesidad y la voluntad de defender todas las conquistas democráticas frente a los golpistas. Y se ha fortalecido conforme pasaban los días y se llegaba a comprender la magnitud del golpe y las gravísimas amenazas que permanecen, incluso a corto plazo. En esta voluntad existe un potencial importante de movilización anticapitalista, **cualquiera que sea la forma en que actualmente se exprese.**

Pero es cierto que la movilización ha llegado tarde y en condiciones de confusión dramáticas: la imagen de miles de trabajadores madrileños gritando el día 27 "¡Viva el Rey!", con el puño en alto, es el mejor resumen de la confusión.

Es preciso comprender esa confusión. Hay que saber descubrir bajo ella la voluntad de respuesta. El golpe del 23 ha sido una carga de profundidad contra el "desencanto": ahora sólo salta a la vista la espuma de la superficie, pero lo importante está ocurriendo debajo, en la conciencia de los trabajadores y la vanguardia.

¿Cómo acabar con las amenazas golpistas? Esta es y va a ser la pregunta clave, cuya influencia va a determinar toda actividad de masas en el inmediato futuro.

Las batallas perdidas

Recordar ahora, cuando tantas y tan urgentes son las tareas hacia adelante, el balance desastroso para el movimiento obrero de los años anteriores, puede parecer una tarea arqueológica, sin interés.

Pero los golpistas estuvieron a punto de vencer el 23-F, porque antes se perdieron batallas fundamentales, que pudieron ser ganadas. Quienes las olvidan o las falsifican, cometerán nuevamente los mismos errores. Y, la próxima vez, es posible que haya que discutir los balances en la cárcel.

Después del 23-F se puede comprender en todo su significado qué queríamos denunciar los revolucionarios cuando afirmábamos que el régimen parlamentario tenía un **"aparato de estado heredado de la dictadura"**. Incluso Felipe González habla ahora de la existencia de "poderes ocultos de obediencia franquista" (1).

¿Ocultos? A la muerte del dictador nadie ignoraba la fidelidad al franquismo y a la fuerza de su aparato de estado, especialmente el aparato represivo. Aún más, se sabía que desde hacía largo tiempo, Carrero Blanco estaba preparando políticamente a este aparato para la "sucesión". El objetivo irrenunciable para la ruptura con el franquismo tenía que ser el desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura. La experiencia de Portugal estaba al alcance de la mano para demostrarlo.

Pero las direcciones del PSOE y del PCE renunciaron a ese objetivo. Dijeron que movilizar a los trabajadores por el desmantelamiento del aparato franquista provocaría "un baño de sangre". Dijeron también que la mayoría de este aparato podía ser "ganada para la democracia" y el resto simplemente sustituido por medio de los mecanismos normales de gobierno (reformas legislativas, traslados, ceses...). Se integraron en fin, plenamente, en la Reforma: la operación política, inspirada por el Rey y realizada por Suárez, destinada justamente a mantener ese aparato intacto, el nuevo régimen parlamentario.

Ahí están los resultados. "El baño de sangre", en primer lugar, las decenas de muertos de estos años. Una nueva confirmación de que siempre es más costoso, incluso en vidas humanas, derrocar un aparato de represión reaccionario, que dejarlo funcionar.

La "democratización" del aparato, en segundo lugar ha sido impulsada por el general Gutiérrez Mellado, responsable de la reforma militar y policiaca, era considerado "intocable" por los reformistas. No ha recibido una sola crítica, se le ha "dejado hacer" y se le ha apoyado sistemáticamente. La imagen de este general, obligado a golpes de guardias civiles a ocupar su asiento, durante la ocupación del Parlamento, es el resumen y el final de esa "reforma militar".

Desde sus distintas situaciones, las direcciones del PSOE y el PCE se han planteado

Resumen cronológico de la España postfranquista

1. Algunos hechos centrales, antes del golpe

1975

• **20 de noviembre:** Muere el dictador. Un gobierno continuista, presidido por Carlos Arias Navarro, va a hacer frente a un formidable movimiento de masas en todo el país, en lucha por la democracia.

1976

• **1 de julio:** Arias Navarro dimite. El Rey inicia una audaz operación política —"la Reforma"—, que va a conducir a la instauración de un régimen parlamentario que conserva lo fundamental del aparato de Estado franquista. Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno para llevarla a la la práctica.

• **16 de diciembre:** Referéndum sobre una serie de cambios de la legalidad franquista. Tras la aprobación de estas medidas, la oposición entra en negociaciones con el gobierno, por medio de una comisión compuesta mayoritariamente por políticos burgueses y de la que está incluido el PCE. Desaparece prácticamente el organismo "unitario" de la oposición, "Coordinación Democrática".

La amenaza

olpe estuvo al borde del triunfo. El 24 de febrero, la octava potencia industrial del mun-
mperiaista pudo amanecer gobernada por una "Junta Militar de Salvación Nacional". nas cinco años después de la muerte del dictador Franco, los militares españoles están uestos a seguir el camino de los militares turcos.

ste hecho ha conmovido profundísimamente a los trabajadores y los pueblos del Estado ñol. Ellos conocen bien la pobreza de las conquistas políticas y la miseria social en que quedado las esperanzas de hace cinco años. Pero no han olvidado el franquismo y ha si- uy fácil imaginarse qué iba a suponer esa "Junta Militar", en cuyo programa ocupaba ugar de honor, por ejemplo, la ilegalización de los sindicatos y el "control" de los dos políticos. Han imaginado también, naturalmente, el programa "no escrito": las las fascistas tomando su venganza, el intacto aparato de represión de la dictadura nueva- te en pleno funcionamiento, con los ficheros repletos de militantes políticos y sindicales, uevas técnicas de la guerra sucia (los "desaparecidos..."), en marcha por todo el país.

como objetivo central ser "aceptados" por el aparato especialmente por el Ejército. Es evidente que este objetivo es incompatible con la lucha por su depuración.

Un periodista le preguntó sobre el grado de aceptación del PSOE entre los militares. Gónzalez respondió: *"algo menor que entre los empresarios y no aumentará hasta que se abandone la tesis perfectamente estúpida del antimilitarismo militante"* (2). Con dirigentes así, fuertes frente al "antimilitarismo" y débiles frente al franquismo, el movimiento obrero se ha hundido en el "desencanto".

Esta política nefasta de las direcciones obreras mayoritarias consiguió que el aparato de represión, aún poderoso, pero desorientado y a la defensiva en los años 76 y 77 fuera cogiendo confianza, y convenciéndose de su impunidad, de su "misión" de "restablecer el orden" en el país.

Para pasar a la acción, les faltaba aún una condición.

¿Porqué las amenazas golpistas reales empezaron en el 78 y no antes? Porque hasta el 78 aún hubo ascenso del movimiento de masas. Como siempre, la reacción empezó a avanzar, cuando el movimiento obrero empezó a retroceder. Se ha hablado tanto del Pacto de la Moncloa, que no es necesario volverlo a hacer ahora. La desmoralización y la división obrera que se iniciaron entonces, la ruina y la miseria de capas populares que no encontraron una dirección en la clase obrera, fue la segunda batalla perdida contra las amenazas que sufrían las conquistas democráticas, apenas acabadas de nacer.

Y se perdió una tercera batalla: la batalla de Euskadi, que simboliza otra más general, la batalla por poner al movimiento obrero al frente de la lucha contra la opresión nacional. ETA volvía a actuar en el 78, y volvía a encontrar un amplio y creciente apoyo de masas, porque el aparato de represión franquista seguía intacto y activo en Euskadi; porque el primer partido de Euskadi que entonces era el PSOE, había aceptado la burla a los derechos del pueblo vasco que fue el régimen "preautonómico" aprobado por el gobierno en Diciembre del 77.

Uno de los componentes fundamentales de la ideología del franquismo, y por tanto de su aparato de represión, es el centralismo, la oposición feroz a las organizaciones independentistas de las nacionalidades oprimidas y especialmente, su odio a ETA.

El aparato de represión fue "antivasco" antes de ser "antiterrorista". Por desastrosos que sean los errores de ETA, nadie puede olvidar cual es el origen de la desesperación de un sector considerable del pueblo vasco. Buscando la aceptación del aparato de represión, las direcciones del PSOE y del PCE se hicieron sus cómplices en Euskadi.

Por medio de estos errores no sólo se fue creando un aparato de represión más fuerte, sino también hegemonizado por los sectores más reaccionarios. Y de este modo, un golpe pretoriano como el del 23-F, cuyos únicos apoyos sociales inmediatamente declarados están en los fascistas y en el "lumpen-capitalismo" enriquecido bajo la dictadura, tuvo la posibilidad de triunfar.

Así, en fin, cuando la dimisión de Suárez abrió la más grave crisis de dirección política burguesa, desde el principio de la Reforma, el movimiento obrero apareció desorientado, sin alternativa. El 18 de Febrero, Calvo Sotelo presentaba un programa de gobierno ultrarreaccionario ante el Parlamento y Felipe González le respondía con un discurso que la prensa caracterizaría como *"parecido a los que hacía UCD en 1977"* (3). Carrillo por su parte, ofrecía otra vez la mercancía averiada de la entrada del PSOE en el gobierno de la derecha, como la solución a todos los problemas del país. ¿Alguien cree seriamente que un gobierno UCD-PSOE hubiera servido, siquiera, para evitar el golpe? ¿Alguien cree que los tanques de Miláns del Bosch y de la División Brunete se paran con "reales mayorías parlamentarias"?

La realidad es que la burguesía se desplazaba hacia la derecha y la izquierda reformista salía corriendo detrás de ella. Corrieron más los tanques.

(continúa)



1977

• En la última semana de **enero**, un grupo fascista realiza la matanza de Atocha: cinco militantes del PCE son asesinados. El PCE realiza una impresionante demostración de su capacidad para controlar las grandes manifestaciones que tienen lugar.

• **9 de abril:** Se legaliza el PCE. Dimisiones y protestas militares, pero ninguna amenaza golpista: aún el movimiento de masas está en ascenso.

• **15 de junio:** Primeras eleccciones generales. UCD obtiene la mayoría relativa. El PSOE obtiene un resultado discreto, muy por debajo de sus esperanzas y de su influencia en el movimiento obrero. Los partidos de extrema izquierda no son aún legales; con la excepción de Euskadi, obtienen pobres resultados.

• **9 de octubre:** Se firma el Pacto de la Moncloa, la mayor victoria política de la burguesía en todo el proceso y el principio de retroceso del movimiento obrero.

1978

• En **enero** se relanza a amplia escala la actividad de ETA. A finales del año anterior, el gobierno había aprobado una "pre-autonomía" para Euskadi, que constituye una completa burla a las aspiraciones del pueblo vasco.

• **11 de noviembre:** Se descubre el intento golpista llamado "Operación Galaxia".

• **6 de diciembre:** Un proyecto de Constitu-

(continúa)

El plan de los golpistas

Resulta difícil desenredar la madeja de la enorme cantidad de proyectos golpistas de los que está hablando ahora la prensa española. Hay que tratar de distinguir entre los datos reales, la especulación y la intoxicación para mantener atemorizados a los trabajadores. En todo caso, está claro que el grado de autonomía alcanzado por la jerarquía militar es muy importante.

Pero hay que evitar que el análisis del golpe del 23-F quede difuminado entre otros proyectos más o menos organizados, o en preparación.

El plan militar consistía en la ocupación armada del Parlamento, los centros neurálgicos de la capital, y la Región Militar de Valencia y probablemente alguna otra entre las que permanecieron "dudosas" hasta la madrugada del 24. Se trataba de presentar al Rey esta situación como un hecho consumado y lograr su adhesión, o alguna forma de compromiso aceptable para los golpistas. A partir de ello, se contaba con la adhesión militar generalizada. Y sobre esta base se buscarían más adelante los apoyos políticos y sociales.

Saquémos algunas consecuencias del plan. Los golpistas contaban con que no iba a haber movilización inmediata de masas y, en particular con que los trabajadores de los servicios públicos básicos (comunicaciones, energía, transporte...) no iban a impedir el control militar. Los golpistas cuentan igualmente con la debilidad extrema de las instituciones políticas del régimen: ocupado el Parlamento (lo que se consiguió, dicho sea de paso, sin la menor dificultad), lo único que les preocupa es la actitud del Rey. Por otra parte, evitan toda movilización de los fascistas, que sería perjudicial para su control estricto de la situación y para la imagen de "dictadura blanda" que les interesa dar en un primer momento. En fin, los golpistas cuentan con que será suficiente la

El golpe del 18 de julio de 1936

Zonas donde el golpe triunfó inmediatamente (Canarias, Marruecos, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Galicia, León, Burgos, Navarra y parte de Aragón)

El golpe del 23 de febrero

Ocupada militarmente (Región militar- III: País Valencià)

I (Madrid y Extremadura): proyecto de ocupación por la Brunete VIII (Galicia): bajo el mando de Torres Rojas, ex jefe de la Brunete

II, VII, V: (Andalucía Occidental, Asturias, León, Aragón y Navarra): situación dudosa hasta la madrugada del día 24

IV, VI, IX, X (Catalunya, Euskadi, Andalucía Oriental, Baleares y Canarias): no participan en el golpe

Resumen cronológico de la España postfranquista

ción, elaborado por "consenso" entre la derecha y los partidos obreros reformistas, es aprobado ampliamente en referéndum. En Euskadi, el SI sólo obtiene aproximadamente el 40%. La Constitución sanciona la continuidad del aparato de Estado heredado del franquismo, al que da además como misión "garantizar el ordenamiento constitucional": este será uno de los argumentos centrales de que las organizaciones —como la LCR— lucharon por el rechazo de la Constitución.

1979

• **1 de marzo:** Nuevas elecciones legislativas. El "desencanto" del movimiento obrero es ya claro. La izquierda retrocede, la UCD avanza sin obtener la mayoría absoluta, pero sobre todo se registra un ascenso espectacular de las organizaciones nacionalistas, especialmente en Euskadi. El nacionalismo revolucionario aparece como la corriente que ha recogido el rechazo de amplios sectores populares a la política reformista.

• **3 de abril:** La izquierda obtiene un importante triunfo en las Elecciones Municipales. Reaparece una dinámica unitaria, que las direcciones del PSOE y el PCE se esforzarán por limitar al marco estricto del pacto de gobierno municipal.

1980

• **Enero:** Nuevo intento golpista, que el gobierno trata de ocultar. El jefe de la División Brunete, general Torres, es cesado. Se le nombra gobernador militar de la Coruña.

• **28 de febrero:** El Gobierno obtiene un fracaso espectacular en el referéndum autonómico de Andalucía. Se inicia el declive de Suárez y la crisis de UCD.

• **9 de marzo y 20 de marzo:** Elecciones nacionales de Euskadi y Catalunya. Triunfo de las organizaciones nacionalistas. En Euskadi, Herri Batasuna, organización que coincide políticamente con "ETA militar", queda en 2° lugar. Grave retroceso del

situación militar creada en la primera fase del plan para lograr la adhesión del Rey.

En orden cronológico, el primer fallo del plan es militar: la División Brunete no consigue la ocupación de los centros clave de Madrid. El segundo y decisivo fallo es político: el Rey se les enfrenta. No tiene mucho interés especular sobre la relación existente entre ambos fallos. Sí debe decirse que uno de los aspectos más incomprensibles de los hechos es cómo fue posible que un militar con la experiencia del general Armada, uno de los "cuadros políticos" del Ejército, que conoce al Rey desde hace muchísimos años puesto que fue uno de sus preceptores, pueda cometer un error de cálculo tan enorme sobre la actitud del Monarca.

Conseguido el apoyo real y bajo la forma de "golpe para salvar la democracia", con mantenimiento parcial de la constitución promesa de elecciones, etc., la nueva situación consolidada, los golpistas podían pensar razonablemente que podrían ganarse al final a los principales gobiernos imperialistas y sectores clave del capitalismo español. Los problemas del movimiento obrero para organizar la resistencia al golpe hubieran sido gravísimos. El golpe no fue la obra de unos locos.

Afirmar entonces que el papel del Rey fue decisivo es la pura verdad. **Paralizado el movimiento obrero, mucho dependía del Rey.** Y el Rey ha demostrado por segunda vez en cinco años (la primera fue cuando puso en marcha la Reforma) su capacidad notable para defender en situaciones difíciles la salida política que interesa a la burguesía en su conjunto y al imperialismo. En la situación actual, esa salida no es un gobierno militar, y, menos aún, un gobierno impuesto por medio de una rebelión armada.

El otro secuestro

Se ha hablado mucho del secuestro del Parlamento por los golpistas. Se ha hablado menos del secuestro del movimiento obrero, en las horas decisivas que siguieron al golpe por las direcciones reformistas. En cambio, este es el dato verdaderamente dramático del 23-F. Los golpistas acertaron en su pronóstico: no encontraron resistencia popular.

A la salida de su entrevista con el Rey, Santiago Carrillo declaraba satisfecho que había comunicado al Monarca que, en su asiento parlamentario, había pensado que *"¡lo único que nos separa del fascismo es Su Majestad!"*.

Pensando más o menos lo mismo a las nueve de la noche del 23, las direcciones de CC.OO. y UGT hacían público un documento infamante, un verdadero monumento de cobardía.

Se ha tratado de justificar luego diciendo "que había miedo" entre los trabajadores. Claro que había miedo: como no iba a haberlo después de cinco años de capitulaciones reformistas, de desmoralización y desorientación. Pero era posible vencer el miedo y, sobre todo era necesario hacerlo. Podía haberse creado un inmenso movimiento popular contra el golpe, decidido a pararlo, ocupando esos centros neurálgicos de la capital que quería tomar la División Brunete, extendiendo la resistencia por todo el país. Ni más ni menos se hubiera tratado de detener un golpe reaccionario con el único instrumento verdaderamente eficaz: la movilización de masas.

Es seguro que la movilización hubiera servido para frenar y no para "provocar" la extensión de la actividad golpista. Y sobre todo no cabe duda de que si se hubiera actuado así, ahora, días después del golpe, no estaríamos de nuevo bajo amenaza.

Hubo, afortunadamente, en Euskadi, Catalunya, Madrid..., sectores de militantes del PSOE, PCE, de CC.OO. y UGT e incluso de sus direcciones en algún caso, que fueron más allá. Pero en todo caso quedaron muy atrás de lo necesario. Es mejor que nada, llamar a la Huelga General (sin manifestaciones, sin afectar a los servicios públicos...) para el día 24, como hicieron sectores del PCE y de CC.OO. ¡Pero no se para un golpe militar con medidas tan débiles y con doce horas de retraso!

Es esta situación la que explica los gritos de "¡Viva el Rey!" con el puño en alto en las manifestaciones del viernes 27 de febrero. El grito lo dan trabajadores que empiezan, ellos también, a negarse a ser rehenes. Es vital que comprendan cuanto antes, sobre la base de la experiencia que ya se está viviendo en el Estado español, que son ellos mismos, no el Rey, quienes pueden acabar con las amenazas de la reacción.

Hay otro dato extremadamente negativo, en las reacciones frente al golpe: es la actitud de las organizaciones nacionalistas revolucionarias de Euskadi. En la noche del 23, muchas esperanzas estaban concentradas en Euskadi. Allí podía nacer la respuesta de masas; el papel en ella de esta corriente era decisivo.

Pero Euskadiko Ezkerra se convirtió en uno de los principales abanderados de la "prudencia" y en uno de los denunciadores sistemáticos de los "provocadores" que, como LKI, estábamos llamando a la movilización y a la Huelga General.

Por su parte, la posición de Herri Batasuna puede conocerse con declaraciones como estas: *"Sólo la degeneración ideológica, producto del servilismo, puede conducir a partidos de izquierda y/o nacionalistas a exigir la depuración, bien sea del Ejército bien sea de la policía, puesto que éstos, de un modo u otro, siempre cumplen la misión de reprimir"* (4). O bien esta otra: *"En definitiva, todo lo ocurrido no ha sido más que un golpe de Estado maestro, sin derramamiento de sangre, que deja totalmente consolidada una Constitución fascista y oligárquica"* (5). O, en fin, la increíble justificación de HB para no asistir junto con LKI y EMK, a la manifestación del 27:

(continúa)

PSOE y UCD.

• **4 de julio:** Sentencia en la operación Galaxia. Penas simbólicas para los inculpados.

• **9 de setiembre:** Ultimo gobierno Suárez, con representación de la práctica totalidad de los "barones" (jefes de las distintas camarillas del partido).

• **30 de octubre:** Se aprueba una ultrarreaccionaria Ley antiterrorista, con el apoyo del PSOE y PCE.

• **Noviembre:** Nuevos rumores golpistas, tras la publicación de un documento muy favorable al golpe de Turquía, enviado a jefes militares por el agregado de la Embajada en aquel país, coronel Quintero, uno de los expertos policiales de Carrero Blanco.

3. Los antecedentes del golpe

1980

• **Diciembre:** Una reunión de altos mandos militares decide iniciar la preparación de un golpe para el mes de marzo. El plan consiste en imponer al Rey en nombramiento de una Junta de Salvación Nacional que suspendería el proceso autonómico y establecería medidas de excepción contra los derechos de los trabajadores, en nombre de la "lucha contra el terrorismo". Como portavoz de los golpistas, se inicia la publicación en el periódico ultraderechista "El Alcázar", muy ampliamente difundido en las Fuerzas Armadas, de una serie de artículos bajo el seudónimo de "Almendros". Se compran los autobuses que se utilizarán para traslado de los golpistas al Parlamento.

• También a lo largo del mes de diciembre, estalla el conflicto interno de UCD entre los sectores llamados "oficial" y "crítico".

1981

• **6 de enero:** Con motivo de la Pascua Militar, los discursos oficiales, a la vez que insisten en la necesidad de acatamiento constitucional por parte del Ejército, tienen un tono más duro de lo habitual. El Rey afirma: *"Sabemos adónde vamos y los límites de los que no podemos pasar"*. El general Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, afirma: *"El Ejército no sueña con dictaduras, pero defenderá la unidad de*

(continúa)

"para preservar nuestra base social" (sic) (6).

No se sabe qué es más grave, si la capitulación de Euskadiko Ezkerra a las presiones reformistas o el ultraizquierdismo con sus consecuencias prácticas de pasividad en la movilización de masas de HB. Nunca ha estado tan comprometido como ahora el papel que el nacionalismo revolucionario vasco puede desempeñar en la construcción de una alternativa práctica de unidad e independencia de clase.

Quienes han representado durante estos días decisivos esa alternativa han sido la LCR-LKI y el MC-EMK, trabajando unitariamente en todo el país.

El pacto de la Zarzuela

Poco después de conocer la decisión del Rey de no secundar el golpe, el general Armada declaraba: *"el Rey se ha equivocado, ha comprometido a la Corona, divorciandose de las fuerzas armadas"*. Estas palabras no son el producto de la amargura de un fracasado; son las palabras de alguien que conoce muy bien el Ejército y espera tranquilamente su segunda oportunidad.

La verdad es que se ha roto la autoridad del Rey sobre un sector significativo de la jerarquía militar y todo el complejo mecanismo político de la Reforma se ha visto afectado por ello. Podemos decir esquemáticamente, que en el régimen existen a nivel institucional dos estructuras de poder —las instituciones parlamentarias, y el Ejército y el aparato de represión—, cuyas contradicciones eran resueltas mediante un compromiso que aseguraba el jefe reconocido de ambas: el Rey. Después del golpe, el Rey es más que nunca el jefe indiscutido de la "estructura parlamentaria", pero ya no lo es de las Fuerzas Armadas. Cuando Felipe González declara: *"las instituciones democráticas no estarán en condiciones de resistir a nuevos ataques eficazmente"* (7) está constatando en cierto modo esta realidad.

El propio Rey es tan consciente como el secretario general del PSOE, pero es incapaz de resolver este problema. Su única "solución" está contenida en el discurso que dirigió a los principales parlamentarios en lo que empieza a llamarse el "pacto de la Zarzuela" (Palacio donde reside el Rey y donde convocó a las principales figuras políticas del partido del gobierno y de la oposición de derecha e izquierda). Esta solución, digámoslo desde ahora, es el camino más seguro hacia un nuevo golpe militar.

Por desgracia, de una manera literalmente suicida, Carrillo y González afirman aceptar la propuesta real.

El fondo de esta propuesta consiste en tratar de reconstruir la autoridad y la legitimidad real en las Fuerzas Armadas, por medio de un compromiso con el conjunto de la jerarquía militar. La primera condición de este compromiso es reducir a medidas simbólicas las sanciones a los 27 sancionados por el golpe. El segundo es cortar cualquier ataque a las instituciones militares y policíacas (el "antimilitarismo estúpido", que diría Felipe González). El tercero, acuerdos políticos concretos que asumiría el gobierno para el "restablecimiento del orden".

El resumen sería convencer a la jerarquía militar que es innecesario dar un golpe, cuando se pueden conseguir los mismos objetivos por vías "constitucionales". El resultado, si esta orientación se pone en práctica y el movimiento obrero no se enfrenta a ella, será sin duda una variante, formalmente más "correcta", de golpe. Así lo que ha sido útil para parar el primer golpe, es decir, la intervención del Rey, sin movilización de masas puede hacer triunfar el segundo.

No es fácil decir cosas como éstas en la actual situación española. El clima de

ALTO AL GOLPE MILITAR FASCISTA
A LA HUELGA GENERAL

La irrupción de 200 Guardias Civiles armados al mando del Teniente Coronel Tejero, (amnistiado por el Gobierno del intento del golpe de estado conocido como "Operación Galaxia, es una guerra declarada a las libertades democráticas. Su objetivo no deja lugar a dudas. Ese puñado de Guardias Civiles no está solo. El asalto al Parlamento ha sido la señal para que el General Miláns del Bosch declarase el estado de sitio en el País Valenciá, y para que la Guardia Civil tomase por asalto el Ayuntamiento de Cartagena. En el momento de redactar este llamamiento, continuan sucediéndose las noticias sobre nuevos pronunciamientos militares. El Gobierno asegura que controla la situación, pero es mentira. El intento golpista de Tejero y Miláns del Bosch se inscribe en los sucesivos llamamientos realizados por altos jefes del Ejercito (de Santiago y Diaz de Mendivil, colectivo "Almendros", etc.), para que fuese este quien tomase directamente las riendas del poder político.

El momento no es para vacilaciones. ES LA HORA DE LA MOVILIZACION.

UCD ha demostrado suficientemente que, lejos de detener el golpe militar fascista, encubre a los conspiradores. Los enemigos de la democracia están arropados bajo el manto del ejercito y de la[...] se ha erigido el gobierno de la derecha. No habrá garantias democráticas mientras [...] ción, al procesamiento de los responsables, y a la disolución de todos los cuerp[...] tadura.

La LCR llama a todos los partidos obreros y sindicatos, a todas las organizac[...] en general a todas las organizaciones democráticas al FRENTE UNICO para orga[...] contra el golpe militar fascista.

DEFENDAMOS LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS AMENAZADAS POR EL[...]

TODOS A LA HUELGA GENERAL POR EL PROCESAMIENTO DE LOS RE[...] RACION DE LOS APARATOS DE ESTADO Y POR LA DISOLUCION DE LOS [...]

A LA HUELGA GENERAL

COMITE EJECUTIVO DE LA LIGA CO[...]

LCR-JCR LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA
JUVENTUDES COMUNISTAS REVOLUCIONARI[...]

comisiones obreras
UNION SINDICAL DE MADRID
Ancora 38 - Tlfs. 468 67 52 - 468 68 31 - 468 69 01 - Madrid 7

A TODOS LOS TRABAJADORES, AL PUEBLO DE MADRID

Reunida con caracter urgente la Comisión Ejecutiva de la Unión de Madrid de CC.OO. y en vista de los graves acontecimientos producidos por la toma del Parlamento por un pelotón de la Guardia Civil y el consiguiente secuestro de los representantes del pueblo, en un intento de terminar con las libertades e instituciones democráticas, hemos decidido llamar a toda la clase obrera y a todo el pueblo de Madrid a la defensa activa de la Constitución, del Parlamento y de las libertades, convocando a la Huelga General permaneciendo pacíficamente en los centros de trabajo.

Así mismo llamamos a todas las fuerzas sindicales, políticas y ciudadanas a que secunden este llamamiento en defensa de la democracia.

Madrid, 23 de Febrero 21,30 de la noche

Resumen cronológico de la España postfranquista

España". El general Pascual Galmes, jefe de la región militar de Catalunya, dice: *"Las fuerzas del mal serán destruidas"*.

• **29 de enero:** Se hace pública la dimisión de Suárez. Su detonante ha sido el conocimiento del plan del golpe militar, pero esto será ocultado al pueblo español. Rápidamente, y a propuesta del mismo Suárez, UCD designa candidato a la presidencia a Calvo Sotelo. El Congreso de la UCD, previsto para estos días, queda aplazado al 6 de febrero. El Rey decide que la crisis se resuelva por los mecanismos parlamentarios normales. Dada la situación de UCD, no encarga formar gobierno a Calvo Sotelo hasta que acabe el Congreso del partido. El Rey aplaza su viaje a USA, donde debía negociar con Reagan las contrapartidas a un rápido ingreso en la OTAN. Pero mantiene el viaje a Euskadi.

• **3 de febrero:** El Rey inicia su viaje a Euskadi. Su objetivo fundamental es afirmar su soberanía sobre Eusakadi y conseguir el acatamiento expreso hacia ella de las instituciones autonómicas vascas. Un enorme despliegue policiaco impide acciones de masas importantes que protesten por la visita. Tampoco hay manifestaciones populares importantes de adhesión, pese a los esfuerzos del PSOE en este sentido. El día 4, en el Parlamento vasco, los diputados de Herri Batasuna expresan simbólicamente su protesta interrumpiendo el discurso del Rey con el canto del himno nacional vasco "Eusko Gudariak". Son violentamente desalojados. El Rey prosigue su discurso, que constituye un apoyo al Estatuto de autonomía dentro del estricto respeto a la "unidad de la patria".

• **6 de febrero:** Comienza el Congreso de UCD, que será considerado como un espectáculo grotesco y una demostración de la profundidad de las divisiones en el partido gubernamental.

El mismo día, ETA militar comete uno de los más desastrosos errores de su historia, matando al ingeniero de la Central Nu-

"unidad nacional" ha adquirido tonos particularmente histéricos. Incluso un periódico tradicionalmente mesurado como "El País", que en sus propias páginas está informando de la magnitud del problema golpista, escribía en un editorial el pasado día 27, tras felicitarse de la presencia de todos los partidos del "arco constitucional" en las manifestaciones: *"Fuera de este campo, sólo permanecen en los extremos opuestos del espectro quienes aman la muerte antes que la vida, quienes prefieren las abstracciones totalitarias a las libertades y quienes odian la felicidad, quizás porque son incapaces de alcanzarla. Entre todos debemos impedir que esos fanáticos, que seguramente odian más a las instituciones democráticas que a sus enemigos del otro lado del espectro, conviertan a este hermoso y antiguo país en un campo de batalla, en un cementerio o en un campo de concentración".*

El entusiasmo lírico y la diarrea ideológica del editorialista de "El País" no va a impedir evidentemente a los revolucionarios decir la verdad a los trabajadores. Decirles, por ejemplo, que lean en "El País" de cuatro días después, que los golpistas son recibidos en triunfo en los cuarteles donde están teóricamente arrestados, que al llegar a su arresto se pretendía rendir "honores de ordenanza" al general Armada, que reciben adhesiones de todos los cuarteles del país, que Blas Piñar afirma tranquilamente que "las cárceles" se han convertido en "templos de honor", y, en fin, para no hacer interminable la lista, que uno de los primeros actos del nuevo gobierno ha sido reafirmar su oposición a la amnistía a los miembros de la UMD (Unión Militar Democrática).

Esta situación no se resuelve con demostraciones de buena voluntad, ni con ninguna clase de mecanismos parlamentarios. La dirección del PSUC acaba de demostrar los límites de su "ruptura" con el eurocomunismo, afirmando como "principal objetivo" de su acción política la *"unidad de todas las fuerzas del arco constitucional"* y defendiendo la necesidad de *"un trabajo de aproximación de la sociedad a las Fuerzas Armadas"*. Las direcciones del PSOE y del PCE buscan centrar las ilusiones de los trabajadores en la coalición con UCD-PSOE, o incluso ampliada a AP.

¿Qué va a hacer esa supuesta "coalición del arco constitucional" frente a los golpistas, y más allá, frente al paro, y a la OTAN, y a la ley de divorcio...? ¿Qué apoyo popular cree que va a encontrar un programa pactado con Fraga y Calvo Sotelo, cuando el objetivo actual de la derecha es hacer por medios civiles lo que Armada y Milans del Bosch quisieron hacer por medios militares?

La coalición sólo puede realizarse sobre la base de apoyo del PSOE a los proyectos fundamentales de la derecha. La defensa de la democracia, el combate contra las amenazas golpistas, exige, por el contrario, que el movimiento obrero recupere su unidad, su confianza, su fuerza luchando contra el gobierno de Calvo Sotelo. Nos llaman "doctrinarios". Que nos llamen como quieran: no estamos dispuestos a resignarnos a que los trabajadores pierdan sus sindicatos, sus partidos, sus precarios derechos y libertades,..., para tratar de salvar la corona.

Ante los revolucionarios se abre una etapa extraordinariamente difícil y arriesgada. Una etapa también de enorme responsabilidad. O la voluntad de combate que ha renacido en muchos millares de trabajadores de todo el Estado español, es fecundada por los revolucionarios, o será obortada por la "unidad del arco constitucional".

Hay que abrirse camino a través de los temores y de las ilusiones, hacia la indignación de las masas. Luchando con inteligencia contra los intentos de aislarnos.

En torno al objetivo de "acabar con el golpismo" puede construirse una voluntad

(continúa)

clear de Lémoniz, José María Ryan. El día 9 PNV, PSOE, PCE, Euskadiko Eskerra, CC.OO., UGT y ELA convocan la que será la mayor manifestación y huelga general conocida en Euskadi.

- **13 de febrero:** Se hace público que el militante de ETA, Joseba Arregui, ha muerto tras nueve días de interrogatorios por la policía. Se inicia una gran campaña de protestas. Su culminación será la nueva Huelga General en Euskadi el día 16, mayor aún que la anterior, en la cual las manifestaciones mayoritarias están dirigidas por Herri Batasuna.

Hay graves conflictos en la policía, amenazas de dimisión colectiva, etc... El gobierno acepta la dimisión de algunos de los jefes fundamentales del aparato policial. Se dice que el Ejército interviene para evitar la cadena de dimisiones.

- **20 de febrero:** En la primera votación, Calvo Sotelo no obtiene la confianza del Parlamento.

3. El golpe

- **día 23**

—5 de la tarde. En la División Acorazada Brunete, la principal fuerza operativa del Ejército español, se arenga a las tropas y se inicia la operación que es **presentada como apoyada por el Rey**. La misión de la División es tomar los centros neurálgicos de la **capital: Comunicaciones, Prensa, Radio y Televisión, Ayuntamiento, etc.**

—5 horas 15 minutos: Las tropas de la III Región Militar, mandadas por Miláns del Bosch, inician la marcha para la ocupación de Valencia.

—6 horas 23 minutos: Dos compañías de la Guardia Civil mandadas por el teniente coronel Tejero, entran en el Parlamento, tomando como rehenes al Gobierno y a los diputados. Se realiza así una reproducción ampliada de la "operación Galaxia".

—Poco después el Rey encargaba la construcción de un "gobierno provisional" integrado por los subsecretarios de los Ministerios, presidido por el Director General de Seguridad, Francisco Laina. Este "gobier-

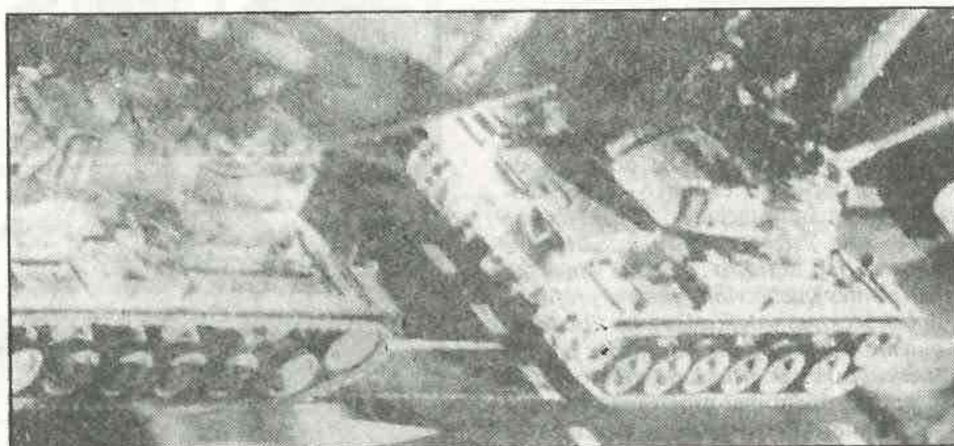
(continúa)

de luchar como no ha habido en España desde 1976. Hay que ayudar a los trabajadores a crearla.

Angel Muñoz

NOTAS:

(1) *"Le Matin"*, París, 3.3.1981
(2) *"El País"*, Madrid, 5.11.1980
(3) *"El País"*, Madrid, 21.2.1981
(4) *"Eguin"*, Bilbao, 25.2.1981
(5) *"Eguin"*, Bilbao, 25.2.1981
(6) *"Diario 16"*, Madrid, 27.2.1981
(7) *"Le Matin"*, París, 3.3.1981



Resumen cronológico de la España postfranquista

no" se encargará, como tarea casi exclusiva, del mantenimiento del "orden", es decir, de impedir toda movilización de masas. Para ello entrará en negociaciones con las direcciones reformistas y prohibirá formalmente toda manifestación en la calle.

El verdadero centro del poder será el Rey, apoyado por la Junta de Jefes de Estado Mayor. Los primeros intentos de controlar la situación demostrarán la amplitud del golpe. Al menos tres capitanías generales (Valladolid, Zaragoza y Sevilla), permanecen a la expectativa. Un comando intenta detener al gobernador militar de Madrid. La División Brunete tiene dificultades para alcanzar sus objetivos (aunque llega a tomar durante dos horas la Radio--Televisión), pero no se la controla. Importantes sectores de los servicios de inteligencia militares están al servicio de los golpistas o en posición neutra. Enfin, el 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, y uno de los militares de máxima confianza del Rey, el general Armada, se descure como jefe político del golpe. Hacia las 10 de la noche, en los servicios de inteligencia militar se consideraba que el golpe había triunfado.

—A partir de las 7 de la tarde se conocen las reacciones de las organizaciones obreras. Sólo la LCR llama a la Huelga General en todo el país, en un comunicado del Comité Ejecutivo. El PCE llama en Euskadi, las CC.OO. de Catalunya y Madrid, aunque indicando a los trabajadores madrileños que "deben permanecer pacíficamente en sus puestos de trabajo". Incluso hay un primer comunicado del Ejecutico del PCE en que incluía este llamamiento, el cual fue anulado poco tiempo después.

—A las 9 de la noche, las direcciones de CC.OO. y UGT difunden un comunicado manifestando su total apoyo al Rey y pidiendo a los trabajadores que *"conserven la calma y permanezcan en actitud vigilante hasta ver como se desarrollan los hechos"*. El "gobierno" solicita a Camacho que convenza a los dirigentes de Catalunya (la CONC) que desconvoquen la huelga; al principio, Camacho no lo consigue; a las tres de la mañana, la CONC reitera el llamamiento.

—Aproximadamente a las once de la noche, el general Armada presenta su plan ante el Rey. Se trata de un "golpe a la turca" que se basa en el apoyo del Monarca, e incluso pediría formalmente la "investidura del Parlamento" a una Junta Militar que prometería elecciones generales a corto plazo, tras realizar una operación de "restablecimiento del orden", en condiciones de estado de excepción. El Rey rechaza el plan y decide dirigirse al país por Televisión.

—A las 11 y media de la noche, CC.OO. y UGT, en un nuevo comunicado, llaman a dos horas de paro, excepto en los servicios públicos, sin manifestaciones y reiterando el apoyo al Rey. No hay prácticamente actividad de masas en ningún punto del país. Sólo en Madrid se han concentrado unas dos mil personas ante el Parlamento, llamadas por la LCR e inicialmente, por el PCE que desconvocará inmediatamente.

—la Asamblea Episcopal emite un comunicado en la mejor tradición vaticana: *"Ofrecemos el rezo de vísperas por España, los españoles y sus responsables"*. Sólo cuando todo ha terminado, un nuevo comunicado manifestará el apoyo de los obispos a la Constitución.

•Día 24

—A la 1 hora 15 minutos el Rey se dirige al país. El párrafo fundamental de su discurso es: *"la Corona, símbolo de la permanencia y la unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum"*.

—Tras el discurso, Miláns del Bosch retira sus tropas de Valencia, pero mantiene el estado de excepción. La situación empieza a cambiar en contra de los golpistas, pero sólo a las seis de la mañana se conseguirá el control definitivo de la División Brunete, pieza militar clave del golpe.

—Las direcciones reformistas que habían convocado huelgas empiezan a dar marcha atrás y no harán nada por que la huelga se produzca. La consigna de paro de dos horas es seguida desigualmente. La huelga sólo se consigue en contadas fábricas del país.

—A las 12 horas diez minutos, los diputados empiezan a abandonar el Parlamento. Inmediatamente un decreto de la Junta de Estado Mayor reitera la prohibición de manifestaciones.

—Por la tarde, el Rey se reúne con los principales dirigentes de los principales partidos parlamentarios. Les lee un escrito cuyos puntos fundamentales son: *"sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción, con carácter de generalidad a las Fuerzas Armadas y a las de Seguridad (..) Todos deben estar conscientes desde sus propias responsabilidades, de que el Rey no puede ni debe enfrentar reiteradamente, con su responsabilidad directa, circunstancias de tan considerable tensión y gravedad (...). Invito a todos a la reflexión y a la reconsideración de posiciones que conduzcan a la mayor unidad y concordia de España y los españoles"*. Todos los asistentes manifiestan su acuerdo con el rey. En esta primera reunión, Felipe González ofrece la entrada del PSOE en una coalición con UCD, prácticamente sin condiciones programáticas.

—A las 8, MC y LCR convocan manifestaciones en distintas ciudades (Madrid, Barcelona...), que sólo reúne a algunos centenares de personas.

Las direcciones sindicales, "serenas"

Las comisiones ejecutivas de CC.OO. y UGT, reunidas conjuntamente con carácter de urgencia en el momento en el que el Parlamento español ha sido tomado por las armas por un pelotón golpista de la Guardia Civil, llama a los trabajadores y a todos los ciudadanos de este país a la serenidad en estos momentos de confusión.

Este intento sedicioso, de acuerdo con las primeras informaciones, aparece aislado y sin apoyo del resto de las fuerzas armadas.

CC.OO. y UGT quieren dirigirse desde este comunicado a todos los ciudadanos para reafirmar su total apoyo al Rey, al Parlamento, al Gobierno y a las fuerzas y a todas las instituciones democráticas de nuestro país, en la defensa de la democracia, ante este gravísimo acto contra la democracia y la Constitución.

UGT y CC.OO. piden de todos los trabajadores y ciudadanos una actitud vigilante en defensa de la democracia que permitan una reacción rápida, si fuese necesaria, para defenderla. Las comisiones ejecutivas de ambas organizaciones permanecen reunidas siguiendo los acontecimientos y emitirán nuevos comunicados adoptando las decisiones oportunas a tenor de cómo avancen los hechos. ■



•Día 25

—AP, UCD, PCE, PSOE, CC.OO. y UGT convocan manifestaciones para el día 27. Las manifestaciones deberán ser silenciosas, sólo se admite una pancarta con el lema: *"por la libertad, la democracia y la Constitución"*.

—Calvo Sotelo obtiene la mayoria absoluta en el Parlamento; los nacionalistas catalanes y el grupo de Fraga votan a favor. El PSOE reitera la oferta de coalición, apoyada por el PCE. Calvo Sotelo no la acepta, aunque pide colaboración en los "temas de Estado". Su programa es idéntico al que había presentado el 20 de febrero.

•Día 26

Calvo Sotelo anuncia su nuevo Gobierno, al que la prensa llama "clónico". Es prácticamente idéntico al anterior y su objetivo más probable es organizar a medio plazo la negociación con el PSOE, AP y los nacionalistas, para una forma de coalición.

—Se dan a conocer los militares sancionados... 3 generales, 5 jefes y 19 oficiales. Se informa también que el mando militar **ha decidido** no imponer ninguna sanción más.

—Se plantean dificultades en la organización de la manifestación de Euskadi. UCD y AP no participan. Se acuerda sustituir en el lema la referencia a la Constitución, por otra "a las constituciones". Pese a ello el PNV se retira utilizando como excusa que no se incluyera entre los objetivos de la manifestación la liberación de los tres cónsules secuestrados por ETA-pm el día 19. Por otra parte, Herri Batasuna tampoco acepta convocar manifestación junto con LKI y EMK; éstos deciden mantener su convocatoria.

•Día 27

—En Madrid tiene lugar la mayor manifestación de su historia: cerca de millón y medio de personas, inicialmente silenciosas pero al final gritando: "Dictadura no, democracia sí", "El pueblo unido jamás será vencido", etc. Hay también manifestaciones importantes en el resto del país, con la excepción de Euskadi.

LCR y MC habían propuesto a otras organizaciones revolucionarias, formar cortejos unitarios, detrás de la manifestación general, que defendieran los objetivos centrales de la situación, excluídos de la convocatoria oficial, en especial la exigencia de depuraciones. Algunos datos significativos de la asistencia a uno y otro cortejo fueron: Barcelona 250.000 (10.000), Vigo 5.000 (1.000), Oviedo 40.000 (3.000), Valencia 200.000 (6.000), Bilbao 4.000 (4.000), Las Palmas 2.000 (6.000), Tenerife 6.000 (3.000)... en general, se consiguieron pues cortejos minoritarios pero significativos incluso en el caso de Las Palmas mayoritario respecto a la manifestación oficial. La excepción fue Madrid, donde el cortejo apenas llegó a formarse por intervención de la policia. La policia impidió también prácticamente las manifestaciones en Euskadi.

•Día 28

—ETA-pm libera a los tres cónsules y anuncia una tregua sin condiciones.

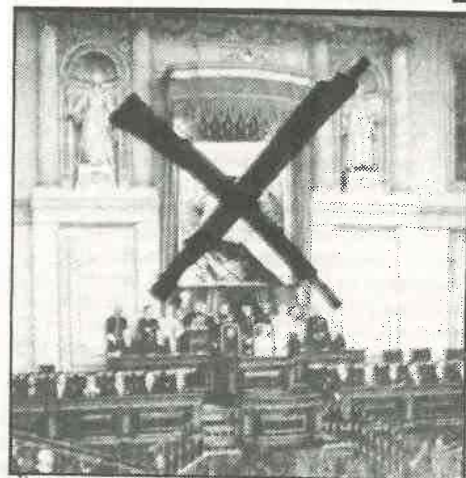
—Nuevo atentado de ETA-m. Tres policías heridos en Portugalete (Vizcaya).

—El Rey pronuncia un discurso en la Academia General Militar de Zaragoza. Los párrafos más significativos son: *"no se contribuye a la seguridad de la Patria con acciones irreflexivas que ponen al ejército y al Estado en general en situaciones críticas y sin salida digna en el mundo en que vivimos (...) Los recientes acontecimientos deben servir de lección al Ejército, por una parte y a todas las fuerzas políticas del gobierno y la oposición, por otra, para adaptar su conducta con el fin de obtener el orden, la seguridad y el bienestar de España (...) No es conveniente que las acciones políticas o las campañas de los medios de comunicación puedan crear un climà de malestar o de represión en el seno de las fuerzas armadas o de las fuerzas del orden, que tan a menudo han sufrido atentados en su carne y críticas e incomprensión en sus espíritus"*.

Los periódicos YA y ABC de Madrid, ligados a la derecha más conservadora amplian nuevamente la información del golpe con datos de extraordinaria gravedad para el futuro de los trabajadores españoles.

Según estas informaciones, el golpe del 23 es solamente la primera de las tres alternativas contempladas por los organizadores del plan. La segunda consiste en crear las condiciones para negociar con el Rey un gobierno de dirección militar, pero sin recurrir a medidas de fuerza del tipo de las vividas en estos días. La tercera sería una variante de la segunda, pero incorporando a la negociación a algunos partidos parlamentarios, en particular al PSOE. En ambos casos, por supuesto, el gobierno actuaría en condiciones de estado de excepción, particularmente en Euskadi.

Esta cronología termina aquí. Los hechos que se han narrado en ella, ciertamente no. ■



La herencia del franquismo

ALGUNOS datos pueden explicar qué significa en España ese "aparato de Estado heredado del franquismo".

• **El Ejército español**. Cuenta con 342.000 hombres, entre los cuales 112.000 son profesionales; el resto corresponde al reclutamiento del servicio militar obligatorio, cuya duración es de 15 meses.

El Ejército de Tierra cuenta con 255.000 hombres, el del Aire con 38.000 y la Armada con 49.000.

Existe una fuerte sobrecarga de mandos, 40.000 en total, hasta el punto de que en el Ejército de Tierra hay un mando por cada 5,17 soldados. Hay más de 23.000 oficiales, jefes y generales, que se distribuyen así: 14.716 oficiales, 7.971 jefes y 341 generales.

La media de edad de los mandos es muy alta; según datos de 1975, la edad media de un comandante es de 42 años, lo que corresponde a la de un coronel en otros Ejércitos de Tierra, lo que acentúa el espíritu de casta en la oficialidad.

La enseñanza en las Academias Militares es extremadamente reaccionaria en cuestiones políticas; desde los últimos años del franquismo, el almirante Carrero se preocupó personalmente de garantizar esto y la situación no se ha modificado sustancialmente desde entonces.

En la enseñanza militar superior, es significativo el boicot realizado recientemente por los profesores de la Escuela de Estado Mayor a su director (el general Cano Hevia, un "moderado"), en solidaridad con uno de los profesores más reaccionarios que había sido arrestado (*El País*, 11.12.80).

Una indicación aproximada sobre las opiniones políticas del conjunto del Ejército proviene de las elecciones de junio del 77, en que las Fuerzas Armadas votaron un día antes y "alguién" tuvo acceso a estas votaciones. Teniendo en cuenta que se considera también el voto de los soldados, el resultado fue: un 15% para la izquierda y entre un 25 y un 30%, para los fascistas, la coalición de Fraga Iribarne y la UCD, que obtienen resultados equivalentes. Es evidente que desde entonces se ha producido un profundo "giro a la derecha" en estas posiciones. Por ello no extraña que la prensa de estos días informe de reacciones favorables a los golpistas en medios militares, como por ejemplo en la Jefatura Superior de Apoyo Logístico (*Diario 16*, 26.2.81).

Tras la represión y desaparición de la "Unión Militar Democrática" (UMD), que agrupó a algunos oficiales jóvenes en los últimos años del franquismo, no se conoce, ni es probable que exista, ninguna organización de este tipo. Los miembros de la UMD no se han beneficiado de ninguna clase de amnistía que les permitiera la reincorporación al Ejército. Cada intento, el último de hace unos meses, ha sido vetado por la jerarquía militar y la izquierda ha capitulado una y otra vez, olvidando el tema.

También en los últimos años del franquismo surgieron organizaciones de soldados, en general no muy fuertes. La más importante de ellas fue la UDS (Unión Democrática de Soldados), dirigida por el PTE y en la que participaron, en uno u otro momento, la mayoría de las organizaciones de izquierda (con la excepción del PCE). Sufrió una dura represión y ha desaparecido, sin que nada le sustituya en la actualidad.

En fin, es de dominio público que en los cuarteles se difunden muy ampliamente las publicaciones de la extrema derecha, mientras que hay dificultades, en ocasiones, incluso para la circulación de periódicos como *El País*; también se conmemora más o menos solemnemente el aniversario del 18 de julio de 1936, la fecha de la muerte de Franco, etc.

En estas condiciones, no es extraño que los rumores de intentonas golpistas sean muy frecuentes, **a partir de la situación de retroceso** en que entra el movimiento obrero desde el 78. El más conocido es la "operación Galaxia" de noviembre del 78.

Sobre ella, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictaba sentencia definitiva el 4 de julio de 1980. Declaraba probado que los acusados —el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero,y el capitán de Infantería, Ricardo Saénz de Ynestrillas— *"mantuvieron diversos contactos en octubre-noviembre de 1978 con el fin de preparar un golpe de mano, destinado a ocupar el Palacio de la Moncloa en el momento en que estuviese reunido en él el Consejo de Ministros (...), aprehender como rehén al Presidente del Gobierno y forzar la formación de un Gabinete de Salvación Nacional, opuesto al proceso democratizador"*.

Por estos delitos se condenó a siete meses de prisión a Tejero y a seis meses y un día a Saénz. Ambos conservaron sus cargos militares e incluso Saénz fue ascendido a comandante pocos días después, de acuerdo con el escalafón militar normal. En fin, los conflictos entre jefes militares y el gobierno han sido como mucho simbólicos, incluso en los casos de insubordinación con el General Gutiérrez Mellado, maximo responsable gubernamental de Defensa.

• **La Guardia Civil** cuenta con 64.000 hombres; su fama de cuerpo represivo especialmente odiado, sobre todo en Euskadi, no necesita más comentarios. En el mes de abril se produjo un grave conflicto protagonizado por el entonces director del cuerpo, general Fontela (considerado "moderado"). Una fórmula ambigua de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, aprobada entonces en el Parlamento, sobre el carácter "militar" de la Guardia Civil, provocó una violenta reacción de Fontela contra el consenso de UCD con la izquierda, llegando a decir: *"Si mañana gobierna el PSOE, se nos cargarán como cuerpo militar"*.

El general fue cesado, el carácter militar de la Guardia Civil reafirmado por el gobierno. Le sustituyó el general Aramburu, una de cuyas primeras decisiones fue ordenar que en todas las dependencias de la Guardia Civil fuera colocado el retrato de Franco. Por supuesto, este gesto sólo recibió tímidas críticas de los partidos obreros reformistas.

• **La Policía** cuenta con unos 40.000 hombres, según cifras oficiales. El sector uniformado (los "grises", actualmente con uniforme color marrón) están al mando del general Saénz Santamaría, antiguo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil en los últimos años de la dictadura, considerado "moderado" y uno de los militares de confianza del gobierno.

En cuanto a la policía "secreta", es probablemente el sector del aparato de represión donde más escandalosa es la continuidad de los miembros de la "social" franquista, en los puestos fundamentales. Basta decir que el único policía político franquista al que se consiguió procesar por torturas y asesinatos, el inspector Matute, fue amnistiado (gracias a una escandalosa maniobra de la UCD que dejó pasar la izquierda parlamentaria) y actualmente es el responsable de la "Inspección Central de la Guardia", encargada de ¡¡velar por los derechos de los detenidos!!.

En fin, el Jefe de la Seguridad del Estado, Francisco Laina (que ejerció de "presidente" del "gobierno provisional" nombrado por el Rey mientras duró el secuestro del Parlamento y cuya "eficacia y lealtad" es ampliamente elogiada), fue gobernador civil de Zaragoza. Durante este periodo, las organizaciones de izquierda solicitaron su dimisión más de seis veces, porque su *"gestión no se corresponde con la gestión necesaria a su cargo en un régimen democrático"*.

• No disponemos de datos de conjunto sobre el **sistema judicial**. Téngase en cuenta, en todo caso, que tampoco ha sufrido depuración alguna, que bajo el franquismo estaba sometido a un estricto control político y que por ello son constantes los escándalos por el trato de favor que reciben los fascistas, incluso en los casos de asesinato, frente a la extrema severidad con que se siguen tratando, no ya los delitos de "terrorismo", sino incluso los llamados de "opinión". Sirva de índice, que durante los cuatro primeros meses de 1980 se instruyeron ¡¡400 procesos!! relacionados con la libertad de expresión, en los que prácticamente no aparecen implicados fascistas.

• El **Cuerpo de Prisiones** es también uno de los bastiones reaccionarios, con muy numerosos escándalos recientes por malos tratos a detenidos, sobre todo en la prisión modelo de Herrera de la Mancha, que llegaron al asesinato en varios casos, el más conocido el del militante anarquista Agustín Rueda.

• En fín, en la **Administración Pública**, los partidos y sindicatos de izquierda han conseguido una importante implantación. Los sectores fascistas constituyen un sector minoritario, pero significativo, procedentes sobre todo de los Sindicatos Verticales, del aparato del "Movimiento Nacional" franquista, etc. Tampoco en este caso ha habido la menor depuración, pese a la enorme corrupción e ineficacia que caracterizó a la burocracia de la dictadura. ■

El Rey ha empezado a desempeñar abiertamente un papel más activo



Entrevista con Jaime Pastor, miembro de la dirección de la LCR, realizada tres días antes del intento de golpe de Estado.

—Inprecor: ¿Qué significado tiene para la LCR la dimisión de Adolfo Suárez y el debate de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo?.

—Jaime Pastor: Cuando se formó el último gobierno Suárez, el pasado mes de octubre, ya lo calificamos como "última carta" de Adolfo Suárez. Tras las elecciones de Catalunya y Euskadi, y sobre todo tras el fracaso del referéndum en Andalucía, Suárez ha perdido cada vez más la confianza de ciertos sectores de la burguesía.

Este proceso se ha acelerado en los últimos meses. El gobierno ha sido incapaz de aplicar la política más derechista que quería la gran burguesía. El capital financiero quiere una política de austeridad más dura. Una parte del Ejército reclama una política represiva más acentuada. Finalmente, un sector de la jerarquía católica se niega a abandonar alguna de sus prerrogativas, cuando el ejército y la policía han podido conservar las suyas.

Pero lo que ha pesado en la balanza es la intervención del propio Rey, que ha empezado a desempeñar más abiertamente un papel activo, que forzó a Suárez a dimitir.

Un aspecto importante es que actualmente la mayoría de la gran burguesía centralista quiere acentuar resueltamente su política derechista. Pero le cuesta asegurarse una mayoría parlamentaria suficiente. Esto es lo que mostró la formación del nuevo gobierno, que ha tenido dificultades para asegurarse el consenso del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de Jordi Pujol en Catalunya.

La Unión de Centro Democrático (UCD) ha sido para la burguesía un partido de transición. Ahora surgen nuevos proyectos. Así, está el sector llamado "oficialista" de la UCD, que hasta el momento ha conservado el control sobre el aparato de Estado y ha mantenido el equilibrio en el seno de la burguesía, entre las fracciones más conservadoras y las que estaban más abiertas a una colaboración con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Está también el sector llamado "crítico", que es el más conservador y que tiende a una alianza hacia la derecha, con la "Coordinación Democrática" (CD) de Fraga Iribarne.

El gobierno Calvo Sotelo va a ser un gobierno débil, que no dispondrá sino de una mayoría parlamentaria relativa, reducida a la UCD exclusivamente, incapaz de asegurar la estabilidad política. El problema que se le plantea a la burguesía es por tanto el de la reconstrucción de su dirección.

Por mucho que Calvo Sotelo haya anunciado su pretensión de gobernar hasta 1983, la burguesía se inquieta ya ante la eventualidad —o la probabilidad— de unas elecciones legislativas anticipadas. Se preocupa también por superar sus divisiones actuales. Existe la posibilidad de que la UCD estalle para dar nacimiento a una "gran derecha".

Es el sector crítico —demócrata-cristiano— de la UCD el que sueña con un gran partido conservador que integraría, al menos, a una parte de Alianza Popular (AP). Estos sectores sueñan con una "Sacarneirización" de la vida política española. Pero la formación de esta gran derecha centralista desembocaría inevitablemente en fricciones adicionales con los partidos burgueses nacionalistas, catalán y vasco.

En efecto, será difícil reconciliar las concesiones hechas a los "poderes fácticos" heredados del franquismo, y del reforzamiento del Estado central, con las concesiones a los partidos burgueses nacionalistas.

Estos últimos están interesados en llegar a acuerdos con la UCD, siempre que puedan conservar el derecho de gestionar las competencias reconocidas a las instituciones de las diversas nacionalidades en el marco de las autonomías.

La burguesía de las nacionalidades no es autónoma. Pero el marco institucional de las autonomías le sirve para tratar de canalizar la influencia de las corrientes nacionalistas radicales y para conservar su influencia en la pequeña burguesía, que constituye una parte de su electorado.

Por ejemplo, estas burguesías no quieren un Estado federal —al menos esto es cierto en el caso catalán—. Pero para poder participar en la dirección colegiada del Estado español, tratan de obtener concesiones de la gran burguesía. En efecto, ha habido concesiones económicas en beneficio del Parlamento vasco. Pero ni el problema del mantenimiento del orden público, ni el de la integración de Navarra con las demás provincias vascas —del que el propio PNV piensa que puede desembocar en cualquier momento en una explosión—, no están resueltos.

Sin embargo, Calvo Sotelo rechaza más que nunca la posibilidad de integrar a Navarra a las otras tres provincias vascas; y hay que saber que en Navarra, actualmente, Herri Batasuna sigue siendo la primera fuerza de la izquierda.

—¿Cuáles son las líneas maestras de la

política del nuevo Gobierno Calvo Sotelo?

—El programa de Calvo Sotelo se inscribe en la continuidad de la política actual, que va hacia la profundización de su curso derechista.

En el plano económico, el gobierno va a defender un programa neoliberal, acelerando la reestructuración de los sectores en crisis, reduciendo la ayuda del Estado a las pequeñas empresas y ejerciendo una presión mayor por el bloqueo de los salarios. Además, la opción por la energía nuclear, en el terreno de la política energética, se ha confirmado con mayor firmeza. Al igual que el rechazo de las medidas proteccionistas viene acompañado de una solicitud de integración más rápida en el Mercado Común Europeo.

En el plano de la política exterior, hay que recordar que si Suárez podía permitirse enviar a Cuba a una delegación gubernamental, en 1979, con ocasión de la Conferencia de los países no alineados, desde el año anterior, y sobre todo después de la elección de Ronald Reagan, la alineación con el imperialismo norteamericano se opera claramente y sin ninguna ambiguedad, y esto se concreta en la perspectiva de entrada de España en la OTAN. Integrándose rápidamente en el Pacto Atlántico, la burguesía española trata de convencer a la burguesía europea de que abrevie los lazos previstos para su integración en el Mercado Común.

En torno a la cuestión de las nacionalidades, finalmente, el nuevo gobierno quiere mostrar que el período de transición ha terminado, que las transferencias de competencias previstas por las autonomías ya han tenido lugar, que se ha acabado, que ya no habrá renegociación con el PNV sobre el Estatuto de Navarra, y que, por el contrario, ha llegado la hora de reafirmar el Estado fuerte.

So pretexto de luchar contra el terrorismo, habrá nuevos atentados a las libertades democráticas (con una colaboración, por lo demás, más fuerte con el gobierno francés). Evidentemente, no se planteará la depuración del aparato de Estado. Basta ver cómo Calvo Sotelo ha tratado de presentar como "simple accidente" el asesinato del militante vasco José Arregui, muerto bajo la tortura.

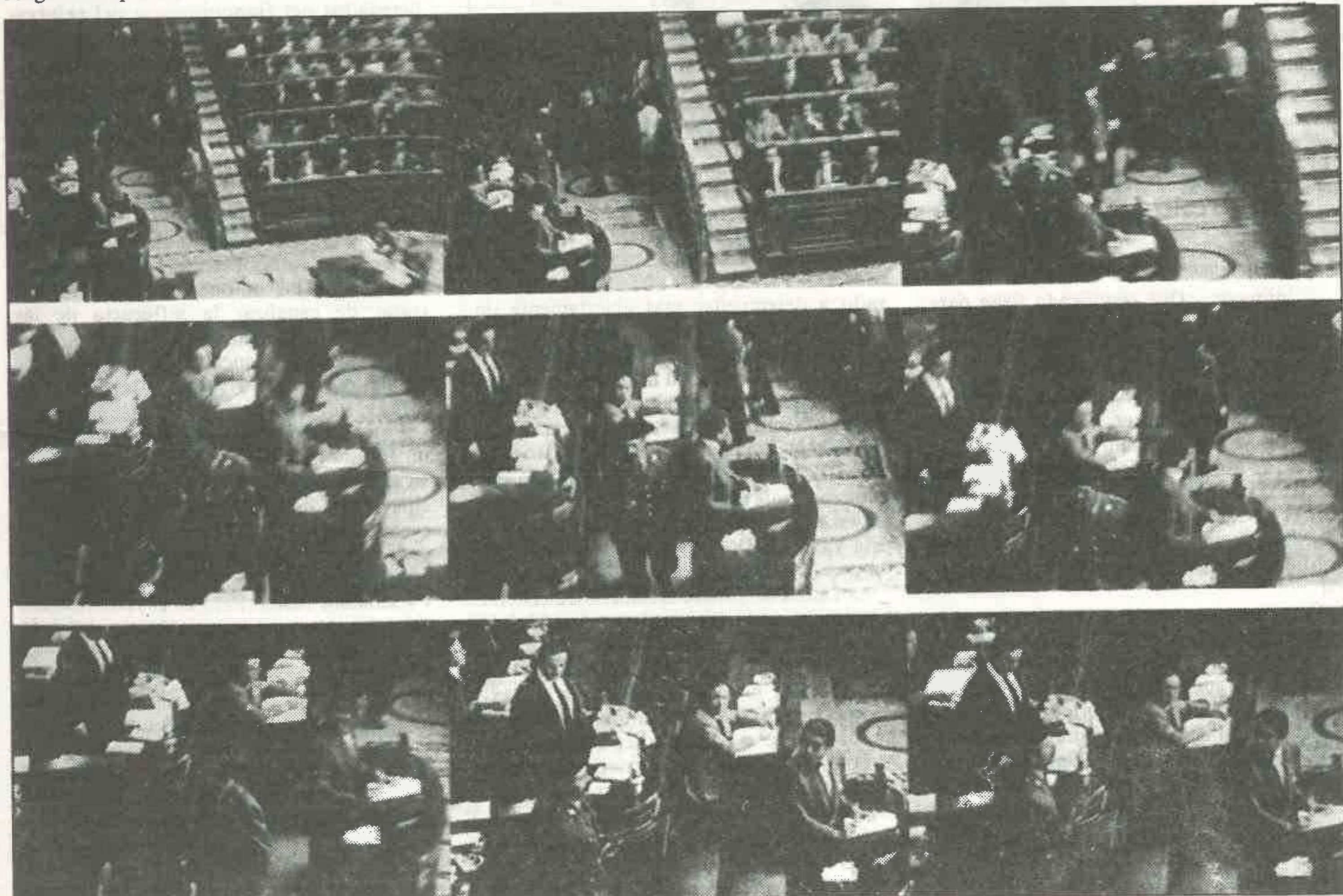
También cabe destacar que la prensa burguesa misma se escandalizó con los silencios de Calvo Sotelo a propósito de los proyectos de ley del divorcio y de la enseñanza. Y lo que está en juego detrás de esas leyes, más allá de la afirmación del orden moral, son los privilegios financieros de la Iglesia y de los tribunales eclesiásticos. Como explican las organizaciones feministas: "Si tienes un millón, te da el divorcio Tarancón" (arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal). Y buena parte de la enseñanza queda en manos de las instituciones religiosas.

El problema que se plantea es el de saber si este gobierno podrá aplicar su programa y lo que le va a costar desde el punto de vista de su base social. La burguesía sabe que el episodio del gobierno Calvo Sotelo puede ser corto. No desea elecciones anticipadas, pues teme el avance del abstencionismo, que alcanzó el 40% en las últimas elecciones, e incluso el 50% en el referéndum del pasado mes de diciembre en Galicia.

El resultado de la transición es que el régimen se ha consolidado en el terreno de las instituciones, pero no se ha reforzado desde el punto de su base social. Esto es lo que hace que se destaque con mayor relieve el papel del Rey en el sistema.

—¿Cómo han reaccionado los partidos obreros reformistas a esta crisis?

—La dirección del PSOE respondió con una nueva apertura hacia la derecha, tratando de presentarse como una solución de recambio, en forma de un gobierno con mayoría socialista. Es la política de un partido que está dispuesto a negociar tanto con la burguesía centralista como con las bur-



guesías nacionalistas. Está dispuesto a proseguir con la política de los pactos sociales, del bloqueo de salarios, de los compromisos miserables en torno al paro. Habla de reforzar el sector público pero sin plantear más nacionalizaciones que las de las compañías eléctricas.

Trata de envolver toda su mercancía con la ideología de la "política solidaria", que se reduce de hecho a avalar todas las explicaciones burguesas de la crisis.

En torno a la cuestión de las nacionalidades, adopta una política ultracentralista, como acaba de demostrar su movilización de bienvenida al Rey, en su viaje a Euskadi. En cuanto a los Estatutos de Autonomía, ha adoptado una postura aún más moderada que el PNV. Frente al nacionalismo radical, aparece como un partido de choque que apoya la ley antiterrorista y se opone a toda consigna de amnistía para los presos políticos.

Lo más importante es que trata de justificar esta política con una ideología obrerista y "españolista", pretendiendo defender los intereses de la clase obrera de todo el Estado español. Esta demagogia "antinacionalista" puede tener cierto impacto entre elementos de la clase obrera que proceden de las demás regiones del Estado español, "inmigrantes" en Catalunya o en Euskadi en la medida en que acusan al Estado "insolidario" de conceder privilegios a las nacionalidades ricas. Pero en realidad se trata, para el PSOE, de justificar una política de austeridad generalizada que desemboque en la práctica en un empobrecimiento aún mayor de los pobres.

Si defiende algunos derechos sociales (enseñanza pública, ley de divorcio), y se presenta como el partido de lucha contra la corrupción, el PSOE es abiertamente favorable a los atentados a los derechos democráticos, como mostró el apoyo que dio a la ley antiterrorista.

Finalmente, si bien no impulsa la integración en la OTAN, que chocaría con una feroz oposición entre los trabajadores, el PSOE se pronuncia por la renovación de los tratados militares con los Estados Unidos y el mantenimiento de las bases norteamericanas en España. Más en general, trata de afirmarse como un partido respetuoso de las instituciones monárquicas y de la jerarquía militar.

No puede decirse que esta política reformista desenfrenada haya suscitado diferenciaciones de masas en su seno. Pero se traduce en un distanciamiento mayor con respecto al PCE y a las CC.OO., y en una mayor división de la propia clase obrera. Es sobre todo contra esto que empiezan a aparacer islotes de resistencia en el seno de la UGT y del propio PSOE.

Así, en la UGT, la dirección de Madrid fue destituída únicamente porque había organizado una manifestación unitaria con CC.OO. Anteriormente, las direcciones de



Alava y de Pamplona también habían sido destituidas. Finalmente, en el PSOE aparece una Izquierda Socialista, que se define sobre todo por su resistencia a este proceso de sectarización y de marcha a la derecha del Partido. Pero este fenómeno aún es limitado.

En lo que se refiere al PCE, su dirección ha mostrado, por primera vez desde el fin de la dictadura, una actitud un poco más agresiva frente al nuevo gobierno. Ha anunciado que iba a combinar las actividades parlamentarias con las movilizaciones de masas. Pero la dirección del PCE reafirma, con nuevas fórmulas, su política de "concentración" democrática: propone un "gobierno de progreso", que equivale a un gobierno de coalición entre la UCD y el PSOE.

El programa que propone el PCE para tal gobierno es su programa tradicional. Más a la izquierda que el PSOE desde el punto de vista social, pero sin salirse del marco de una congestión de la crisis. Esto lo demuestra su "Plan de Solidaridad Nacional contra el paro".

A propósito de las nacionalidades, el PCE desarrolla la idea general de un "desarrollo democrático de la Constitución", pero sin poner en absoluto en tela de juicio el Estado centralista.

Sin embargo, se ha podido percibir un ligero giro táctico, con la reaparición en la propaganda del PCE en la teoría de la "democratización del aparato de Estado", e incluso con el replanteamiento implícito del apoyo que había dado a la ley antiterrorista. Pero mientras que el PSOE no está interesado en modo alguno en la unidad de acción con el PCE, este último tampoco está dispuesto a aliarse con los nacionalistas radicales y la extrema izquierda.

Por ejemplo, cuando importantes sectores del PCE participaron —sobre todo a través de las Asociaciones de Vecinos— en la marcha contra la OTAN, que reunió a más de 20.000 personas, a iniciativa de la extrema izquierda, el 25 de enero en Torrejón (Madrid), el PCE como tal se negó a participar en esta movilización.

La dirección del PCE se encuentra en una situación de equilibrio inestable. Santiago Carrillo trata de utilizar la crisis para llamar al Partido a cerrar filas ante la eventualidad de elecciones anticipadas. Los grandes partidos burgueses rechazan una alianza de la que fuera parte integrante el PCE, y empiezan incluso a endurecer su actitud hacia el PSOE, para tratar de marginarlo antes de las eventuales elecciones.

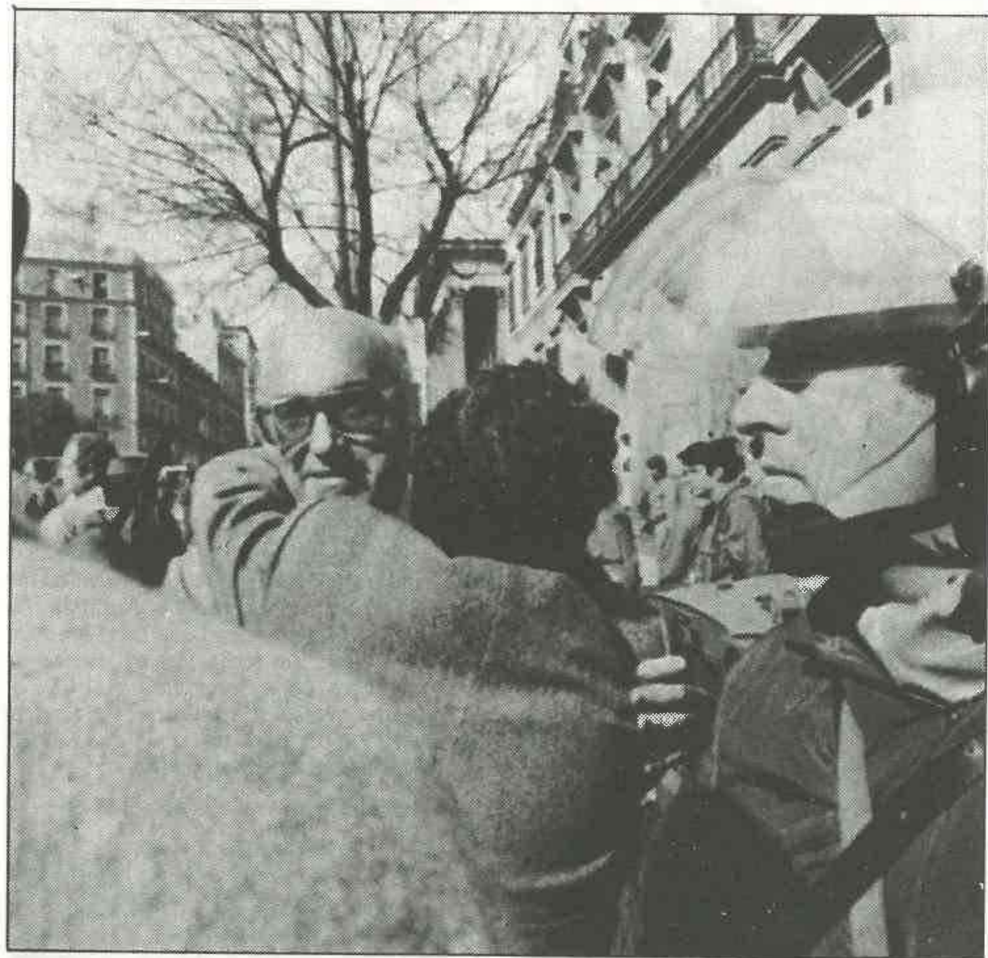
La declaración adoptada, a su vez, y antes de la dimisión de Suárez, "por el Comité Central del Partido Socialista Unificado de Catalunya" (PSUC), es importante en la medida en que silencia la idea de un "Gobierno de progreso" y avanza la perspectiva de un "catalanismo" popular que incluye a los comunistas, socialistas y pequeñas formaciones nacionalistas radicales, frente a la UCD y la CiU de Jordi Pujol.

Pero al mismo tiempo, el PSUC se enfrenta a la sectarización del PSC-PSOE. Este llega incluso a amenazar con romper los "pactos municipales de progreso", como ya se ha dado en el Ayuntamiento de Barcelona. Así, tiene que hacer frente a la misma contradicción que el PCE a escala de todo el Estado.

Asimismo, el PSUC se muestra más inclinado a denunciar la entrada en la OTAN o a reclamar la derogación de la ley antiterrorista. Pero se ha abstenido de participar en las manifestaciones de protesta organizadas en Barcelona contra el asesinato de José Arregui.

Más en general, el margen de maniobra de los comunistas está limitado por el proceso de las CC.OO. y la degradación de sus posiciones frente a la UGT. Si bien las CC.OO. aún mantienen alguna ventaja numérica, se han debilitado considerablemente.

En la nueva situación que se produce, hay que luchar por que pueda ejercerse una fuerte presión unitaria y defensiva, por parte de sectores significativos de la clase obrera, a favor de acuerdos entre sectores



del PSOE y sobre todo, del PCE, del nacionalismo radical y de la extrema izquierda: La Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Movimiento Comunista (MC).

—¿Más allá del reciente Congreso del PSUC, cuál es vuestra apreciación general sobre el desarrollo de la crisis en el PCE?

—La crisis del PCE se inscribe en el contexto de una profunda crisis del eurocomunismo, y no solamente en Catalunya.

En primer lugar, está la resistencia de importantes sectores de las CC.OO., que no quieren comprometerse, siguiendo las huellas de la UGT y del PSOE, en la política de gestión de la crisis. Estos sectores no ponen directamente en tela de juicio el principio mismo de los pactos sociales, tales como son el de la Moncloa. Pero sus dirigentes estiman que no existe relación de fuerzas suficiente como para obligar a la burguesía a llegar a acuerdos que comporten contrapartidas efectivas.

Han hecho la experiencia de los Pactos de a Moncloa, de sus resultados socialmente desastrosos, y sobre todo de sus efectos desmovilizadores. Así, la dirección local de las CC.OO. de Madrid defiende una posición que puede compararse con la de la CGT francesa o de la CGTP portuguesa, que consiste en proceder a movilizaciones limitadas para ejercer una presión controlada en las negociaciones.

Pero a diferencia de Francia, estas corrientes no desarrollan una orientación sectaria hacia la UGT, cuyo peso no puede subestimarse. Están también los efectos de las contradicciones que existen entre la política centralista aplicada por la dirección de Carrillo y la necesidad para el PCE de ganarse la audiencia de corrientes nacionalistas, sobre todo en Euskadi.

Allí, el PCE, que no tiene una influencia mayor que un grupo extraparlamentario, ha aparecido como ultracentralista y ha dejado así un amplio espacio político a su izquierda. Las tesis que acaba de adoptar el congreso del PCE de Euskadi intentan rectificar su posición sobre la cuestión nacional y operar un acercamiento con Euskadiko Eskerra, organización vinculada a ETA p-m, que combina las referencias al eurocomunismo y la defensa de la lucha armada.

El PCE de Euskadi también se ha pronunciado contra la ley antiterrorista, que había sido votada por el PCE en el Parlamento. Finalmente, y esto es lo más importante, propone transformar al PCE en un partido federal. Pero el camino para conciliar las pocas concesiones hechas al nacionalismo radical y la defensa de la línea general centralista del PCE, sigue siendo estrecho.

En Andalucía, que es la segunda concentración de fuerzas del PCE después de Catalunya, el conflicto no ha alcanzado aún las proporciones de Catalunya o de Euskadi. Pero existe un descontento importante debido al retraso del PCE en reconocer el hecho andaluz. También han aparecido tensiones, consecuencia de medidas disciplinarias adoptadas en Asturias, en Galicia, en León, hasta tal punto que Santiago Carrillo ha hablado de un peligro de "balcanización del PCE".

Esta dinámica centrífuga por nacionalidades es muy fuerte, máxime cuando resulta difícil detectar las líneas maestras de verdaderas corrientes o tendencias a nivel estatal. Existe más bien un abanico muy amplio de posiciones y sub-posiciones, que van de las posturas casi socialdemócratas de un Tamames a las de una pequeña fracción realmente prosoviética.

El tema central de estas batallas, es el balance de la "Transición", que se mezcla con un debate sobre la política internacional, ya que la política del PCE se caracteriza por una voluntad clara de integrarse en el "bloque occidental".

Las corrientes que critican la táctica de la "Transición" y de los pactos tienen al mismo tiempo una reacción sana de removilización en torno a temas antiimperialistas. Esto se ve en las polémicas en torno a Afganistán. En revancha, la dirección del PCE acusa a los sectores críticos —y sobre todo a los del PSUC— de "prosovietismo". Se trata de neutralizar en esta alianza a los sectores que podríamos llamar "eurocomunistas de izquierda", y de evitar que la renovación del aparato del partido que exigen no alcance las cúspides de la dirección.

La dirección del PCE sabe muy bien que no puede impedir que el debate salga a la luz pública. La mayoría del Congreso del PSUC impuso incluso que el debate nominal sobre las candidaturas y la elección tuvieran lugar, por vez primera, en sesión pública. Pero quiere evitar que los militantes puedan criticar la política del Partido a partir de sus posiciones en el movimiento de masas y los Ayuntamientos.

Así, lanza una ofensiva con miras a restablecer la disciplina de fracción en las CC.OO. y los Ayuntamientos. Existen ya numerosos casos de exclusión del Partido o de suspensión de los mandatos municipales. Un miembro del Comité Central, Paco García Salve ("cura Paco"), es objeto de una investigación por parte de la comisión de conflictos, porque ha criticado públicamente a Santiago Carrillo, y hay aún otros casos...

Finalmente, la cuestión de la participación o no del PSUC en el X° Congreso del PCE, el próximo mes de junio, sigue en suspenso. De momento, la dirección del PCE no se ha pronunciado. Por un lado lleva una batalla por un "Congreso extraordinario de rectificación" del PSUC, y por

otro trata de impedir que las resoluciones adoptadas por el PSUC en su Congreso sean puestas en práctica.

—¿Qué significado tienen los acontecimientos de Euskadi tras la ejecución del ingeniero Ryan y el asesinato bajo la tortura del militante nacionalista vasco José Arregui?

—El gobierno actual no puede proponer ninguna solución estable en el marco de un régimen que perpetúe la opresión histórica contra las nacionalidades.

El fenómeno ETA continúa expresando la radicalización de un sector significativo de la población vasca, particularmente en la juventud. Pese a la profunda división de las fuerzas políticas y sociales, la solidaridad de que goza esta corriente frente a la represión sigue siendo suficiente para impedir su aislamiento.

La situación, sin embargo, no corresponde en absoluto a la concepción que orienta a ETA. No se caracteriza, como sucedía bajo la dictadura, por el ascenso de un movimiento de liberación nacional, sino, por el contrario, por la acentuación de la división y por el hecho de que la clase obrera, como tal, no impone su hegemonía y su dirección en el terreno de la lucha por los derechos nacionales.

En efecto, no hay que olvidar que el PNV es electoralmente mayoritario, con una base popular importante, incluso obrera, y que el sindicato nacionalista que está vinculado a él, ELA-STV, ha superado, en las elecciones sindicales, a la UGT y a las CC.OO. en Vizcaya y en Guipúzcoa.

El sector más activo en la izquierda está representado por Herri Batasuna, corriente radical, pero profundamente sectaria con respecto al PSOE y al PCE. En cuanto al MC y a nosotros mismos, LKI, aparecemos como fuerzas que siguen siendo demasiado débiles como para poder ejercer una influencia real.

El problema que plantea la cuestión nacional vasca a escala de todo el Estado estriba en saber cómo combinar una recomposición de la unidad entre las organizaciones obreras y el desarrollo de un movimiento de solidaridad con Euskadi. Lo más grave en la política de los reformistas, que son los principales responsables de la situación actual, y de la de ETA, es que coinciden en profundizar la división de la clase obrera a escala de Estado y en el propio Euskadi.

Sin un movimiento de solidaridad, bajo la consigna del derecho a la autodeterminación, la cuestión no tiene solución.

Esto se ha verificado cuando hubo la huelga general tras la ejecución del ingeniero Ryan. Más allá de la campaña orquestada por la burguesía, han quedado patentes los efectos negativos de la política de ETA, que en esta ocasión ha cometido el más grave de sus errores políticos. La huelga y las manifestaciones expresaron un rechazo mayoritario del activismo militar de ETA. Lo nuevo es la participación significativa de la pequeña bueguesía en estas manifestaciones, lo que revela un cambio de actitud importante.

Pero como el centralismo y el mantenimiento del aparato represivo franquista son las bases de la existencia de ETA, una semana más tarde, tras el asesinato bajo la tortura de Arregui, la mayoría del pueblo vasco se manifestó de nuevo, y demostró, a pesar de todo, su determinación de defender a los militantes de ETA contra la represión.

Pensamos que el resultado de estas dos huelgas generales subraya a la vez la profunda división que existe en Euskadi y la posibilidad de un frente común contra el poder central. Estos acontecimientos abren un período de reflexión política en el seno de las dos principales componentes de la izquierda, Euskadiko Eskerra y Herri Batasuna.

Nosotros, la LCR-LKI, pensamos ganar una importante audiencia en el próximo período, pues tratamos de combatir la división y poner en primer plano la movilización de masas, porque criticamos la política de ETA al tiempo que luchamos contra la opresión nacional en Euskadi, junto a los sectores del pueblo vasco que se identifican con esa organización.

De ahí que nuestra posición en torno a las dos huelgas generales se ha considerado correcta en amplios sectores. En cuanto a la primera, hemos criticado radicalmente la acción indiscriminada de ETA, su comportamiento ultimatista y militarista, el hecho de que haya puesto como condición para liberar a Ryan la destrucción de la central nuclear de Lemóniz, en el preciso instante en que había una movilización de los trabajadores de la central para que se parara su construcción hasta la celebración de un referéndum. La acción de ETA facilitó los planes de la derecha y los intereses de los grupos favorables a la energía nuclear.



Pero también hemos dicho que la clase obrera no podía hacer frente común con la patronal y la burguesía contra ETA, y menos aún emplear, para ello, los métodos de lucha reservados al combate contra la burguesía y la patronal. Hemos dicho: "No a la huelga, sí a las asambleas". La huelga y las manifestaciones fueron masivas, pero logramos que se celebraran estas asambleas. En ellas se discutieron seriamente los problemas y en algunos casos convencimos a ciertos sectores, incluso de Euskadiko Eskerra, para que votaran contra la huelga.

En la huelga que siguió al asesinato de Arregui, llamamos a la movilización para denunciar el crimen de Estado. Es significativo que el PNV se haya visto obligado a unirse a las movilizaciones, para no aparecer como cómplice del Estado central.

—¿Cuáles son, en esta situación, y después de su VI Congreso, celebrado en enero, los ejes de intervención de la LCR?

—Insistimos en el hecho de que si existen instituciones parlamentarias, se apoyan en buena medida en el aparato de Estado heredado de la dictadura.

La crisis política se produce en un momento en que el movimiento obrero, pese a protagonizar importantes luchas parciales, se encuentra a la defensiva. La crisis de la dirección burguesa coincide con una desmovilización de la mayoría de la clase obrera, y una profunda división a nivel de los partidos (dondc el sectarismo del PSOE desempeña un papel decisivo) y de los sindicatos.

De ahí que avancemos la necesidad de "cambiar el rumbo", es decir, la necesidad **de la unidad para la lucha frente a la nueva ofensiva burguesa y para preparar una salida política que sólo puede ser la de un "gobierno de izquierdas sin ministros burgueses"**.

Lo importante es defender un programa que pueda hacer avanzar a esta unidad en la acción. Debe incluir, por supuesto, objetivos de lucha inmediatos contra las reestructuraciones, por la defensa del poder adquisitivo y sobre todo contra el paro, que es el problema número uno. En torno a esta cuestión lanzamos una campaña central con el tema de las 35 horas y de "trabajar menos para trabajar todos".

Este programa debe incluir la denuncia del régimen, la lucha por la derogación de la ley antiterrorista, por la depuración del aparato de Estado, por la autodeterminación de las nacionalidades, y por la Federación de Repúblicas. En este marco, la denuncia del papel del Rey y de la institución

monárquica debe ocupar un lugar muy importante.

Frente al nuevo gobierno, las batallas inmediatas en torno a la ley del divorcio o la ley de autonomía universitaria pueden volver a movilizar a importantes sectores del movimiento obrero, del movimiento feminista y de la juventud.

Finalmente, ya hemos insistido en la necesidad de una campaña permanente de solidaridad con Euskadi, contra la entrada en la OTAN y contra el mantenimiento de las bases militares norteamericanas en nuestro país.

Partiendo del punto de vista de que existen diferenciaciones potenciales en los partidos obreros reformistas, así como en las corrientes nacionalistas radicales, y que la batalla por la unidad es una de las claves de la situación, vamos a tratar de llevar una política unitaria con partidos como el MC, para tomar la iniciativa de la acción e impulsar la unidad, particularmente en el plano sindical.

Sólo de esta manera se podrán crear las condiciones para derrotar a la derecha.

—A este respecto, ¿en qué situación se encuentran actualmente las organizaciones de extrema izquierda?.

—La crisis de la estrategia de los reformistas, tanto la del PSOE como la del PCE, ante la crisis económica y la reestructuración de las corrientes nacionalistas radicales, pueden abrir una nueva etapa.

Las dos organizaciones que eran numéricamente las más importantes en estos últimos años, el PT y la ORT, que habían contado hasta con 15.000 militantes tras su fusión en junio de 1979, han conocido después un proceso de desintegración y descomposición aceleradas, que les ha llevado a la desaparición salvo en algunas zonas de Andalucía.

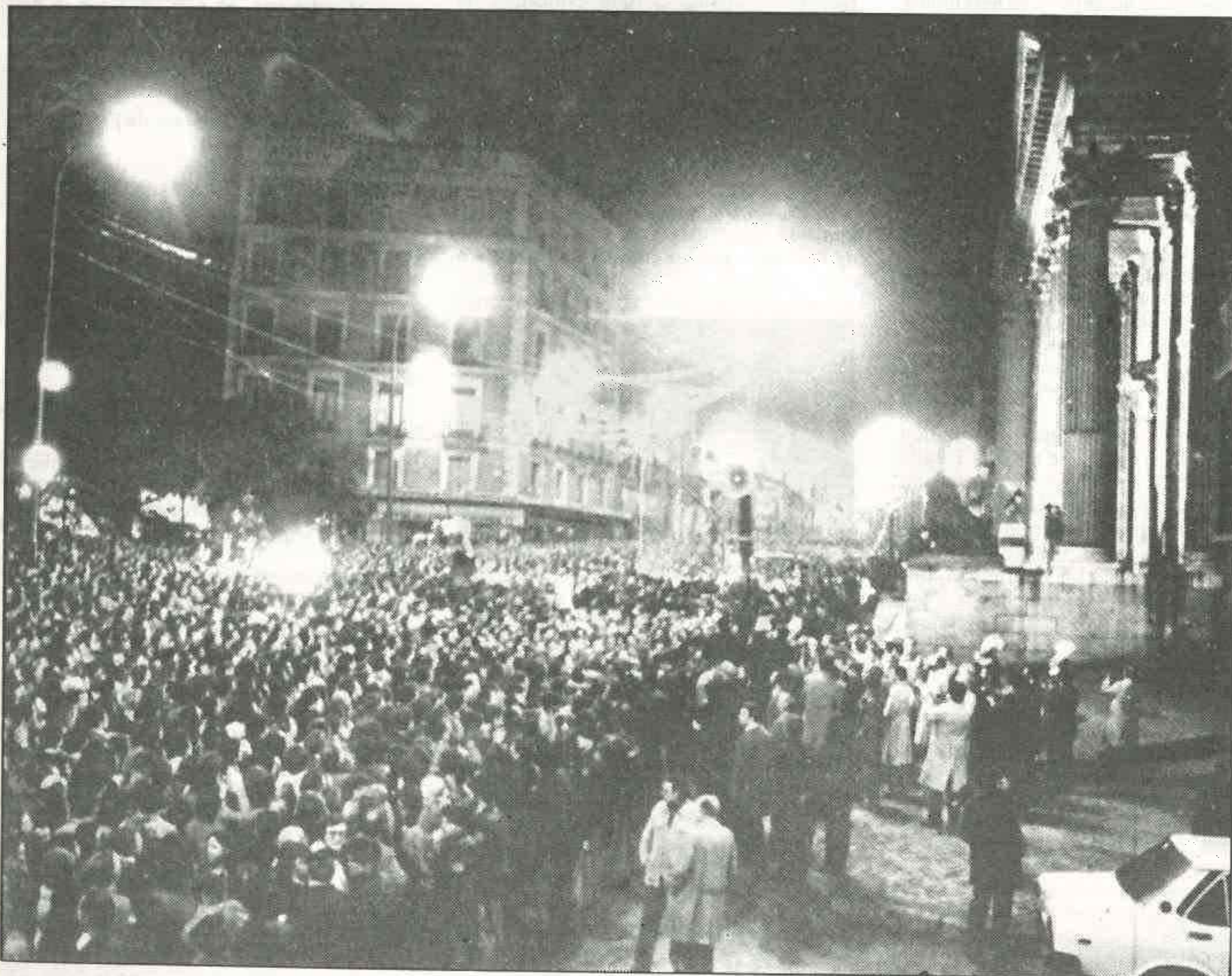
Su crisis sanciona su seguidismo con respecto al reformismo: en lugar de incidir en la crisis de éste, la han sufrido y se han visto arrastrados por ella, sin poder recoger los frutos electorales esperados.

Actualmente sólo existen dos organizaciones revolucionarias de importancia significativa a escala de Estado: la LCR y el MC.

Estos últimos años, el MC ha dado una evolución a la izquierda (oposición radical a los pactos sociales, a la Constitución, a los Estatutos de Autonomía). De origen maoísta, el MC ha roto con el maoísmo y se orienta empíricamente.

Pero ha escapado a la crisis de la extrema izquierda gracias a una flexibilidad táctica y a una capacidad de adaptación a las corrientes de radicalización más diversas, lo que va del seguidismo con respecto a la izquierda del PSUC en Catalunya hasta la adaptación a Herri Batasuna en Euskadi, silenciando incluso sus divergencias con ETA.

Consideramos positiva la disposición que manifiesta esta organización, últimamente, a llevar una política unitaria más abierta, particularmente con la LCR. Esta actividad unitaria ya ha dado resultados positivos en Madrid, en Valencia o en la preparación de la marcha contra la OTAN. Si se consolida, puede multiplicar la capacidad de iniciativa y ampliar la esfera de influencia de los revolucionarios. ■





9 de febrero:
HUELGA GENERAL CONTRA ETA
16 de febrero:
HUELGA GENERAL POR LA MUERTE DE UN MILITANTE DE ETA

José Vicente Ydoyaga (escrito días antes del golpe)

LA noche del 6 de febrero, ETA ejecutaba al ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, al que había secuestrado una semana antes exigiendo que en ese plazo se iniciara la demolición de dicha central. El lunes día 9 se producía una huelga casi general en Vizcaya, Guipúzcoa y Alava. Por la tarde miles de manifestantes recorrían las capitales de estas provincias, en protesta por la ejecución de Ryan y exigiendo "paz para Euskadi".

La tarde del día 13, moría, víctima de torturas, el militante de ETA José Arregui Izaguirre. El lunes día 16, la huelga era general en todo Euskadi, esta vez incluyendo a Navarra (1), y la tarde de ese día se producían manifestaciones también masivas en las cuatro capitales vascas.

Para este día hubo dos convocatorias diferentes y políticamente contrapuestas de huelga general. Una, la misma consigna que la de la semana precedente, "Por la paz", realizada por el Partido Nacionalista Vasco, Euskadiko Eskerra, PSOE y PCE. Otra, "Contra la tortura, por la amnistía para los presos políticos" realizada por las mismas fuerzas que se habían opuesto a la convocatoria del día 9: Herri Batasuna, y la izquierda revolucionaria, cuyas fuerzas más significativas son LKI (LCR) y EMK (MC) (2).

Las manifestaciones de la tarde en cada capital, llevaron también dos cortejos separados, siendo mucho más numerosos los de HB, LAIA y la izquierda revolucionaria.

Con frecuencia se utiliza la palabra "laberinto" para hablar de Euskadi. Pero el problema es la confusión política, como una terrible realidad dentro del movimiento obrero y popular de Euskadi, y una división fortísima, incluso un sentimiento de enfrentamiento mutuo entre dos sectores de la clase obrera.

Estos días, a raíz de la designación del nuevo Presidente del Gobierno español, se ha dicho que con la dimisión del presidente Suárez se ha dado expresión formal al fin de la transición política de la dictadura al régimen parlamentario español. Durante la transición, Euskadi ha representado la resistencia a la "reforma política", la voluntad de hacerla estallar y dar paso a la "ruptura democrática". En ese periodo la credibilidad del partido burgués en el Gobierno, la UCD, se ha desgastado hasta convertirse en un ridículo electoral en el País Vasco. Pero al mismo tiempo se han ido incubando las diferencias, enfrentamientos y rupturas



dentro del movimiento, hasta llegar a la situación manifestada con la muerte de Ryan; y esa situación puede suponer la dilapidación del potencial revolucionario de Euskadi.

Las raíces de la división

Las primeras elecciones generales en 1977 dieron al PSOE como partido mayoritario en Euskadi. Pero el PSOE se comprometió a fondo con la política de "preautonomías" del Gobierno de UCD. En concreto, dicha política significaba aplazar una solución política para el agudo problema de las nacionalidades, abriendo un complicado proceso jurídico-político que de hecho permitía al poder central mantener todo casi como estaba.

El problema nacional del País Vasco era demasiado profundo como para poder ser arrinconado de esta manera. El PNV encontró en esta situación el marco más idóneo para no verse comprometido en un proceso de Reforma Política, que se imponía con las calles y carreteras de Euskadi llenas de policías. El PNV pudo oponerse a la Constitución y aparecer, en general como oposición a la política de UCD en Euskadi.

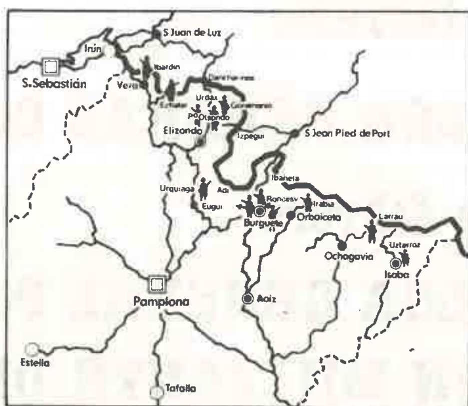
Paralelamente, la radicalización que la situación iba creando en sectores del movimiento obrero y de la juventud, daba a Herri Batasuna una base de masas, que no sólo recogía una posición independentista como alternativa al centralismo, sino también una componente de resistencia social abandonada por el PSOE y, también, por el PCE y los sindicatos. El resultado de este proceso ha sido el fracaso total de UCD y del PSOE y el crecimiento espectacular del PNV y HB, reflejado también en las posteriores confrontaciones electorales.

La dispersión orgánica de la clase obrera a que antes nos referíamos, se ha visto complementada en estas condiciones por fuertes tendencias centrífugas dentro del movimiento obrero; la realidad sindical es un reflejo significativo de ello (3).

La visita del Rey

La visita oficial de la Monarquía a Euskadi, el pasado 3 de febrero, ha permitido fijar en una clara fotografía las actividades y posiciones de los diversos partidos durante todo el proceso de transición.

Para los dirigentes del PNV esa visita mantenida, además, pese a la dimisión del presidente Suárez dos días antes, significaba el respaldo del Rey al marco del Estatuto vigente y a la mayoritaria gestión gubernamental nacionalista (4) dentro del mismo. En correspondencia, el apoyo a dicha visita le implicaba el reconocimiento de la institución suprema del Estado y, en cierta forma, el apoyo actual a la Constitución que en su día había rechazado. Pero hasta un



Esta es la distribución aproximada de las tropas del Ejército en la muga de Navarra. Como puede apreciarse, los puntos fundamentales de concentración de efectivos militares se hallan en las estribaciones del monte Gorramendi y en las cercanías de Burguete. (EGIN)

sector del PNV se mostró duramente contrario a tal visita. Por ello, los dirigentes de este partido combinaron la máxima cortesía oficial en el recibimiento, con una nula movilización de sus filas en la calle en apoyo a la visita.

UCD y los partidos de la derecha, incapaces de lograr ningún tipo de movilización pre-monárquica, se limitaron a tratar de congregar a sus filas en recibimientos de apoyo a Juan Carlos... con poca fortuna. Apenas 300 personas recibieron al Rey en su llegada y la máxima cota de "masas" apoyando al monarca se redujo a unas 3.000 personas en una plaza de Bilbao en la que el Rey saludó y habló al público.

El PSOE fue, sin duda, el mayor defensor de esta visita, hasta el punto de adoptar actitudes realmente histéricas por el escaso calor con el que Juan Carlos era recibido. El PSOE llamó públicamente e hizo una campaña junto con la derecha más recalcitrante para recibir al Rey. El PSOE acusó al PNV de no movilizar a favor de la Monarquía. El PSOE manifestó públicamente que era su empeño evitar que el Rey diera medidas de gracia para los precios políticos de ETA.

En la orilla opuesta, HB, LAIA, LKI, EMK y diversos organismos populares protagonizaban una campaña contra la visita oficial. El hecho más conocido —transmitido en directo por la televisión— fue el que se produjo en la localidad de Gernika, donde el rey pronunció un discurso ante los parlamentarios y cargos electos de otras instituciones vascas. Cuando Juan Carlos comenzó a hablar, los representantes de HB y LAIA presentes se pusieron en pie y comenzaron a cantar el "Eusko gudariak" (himno que se ha convertido en símbolo de la voluntad de soberanía nacional de Euskadi); todos ellos fueron violentamente arrojados de la sala de reunión.

Euskadi y la violencia

La pervivencia del aparato represivo franquista ha sido fuente permanente de conflictos en Euskadi. Sus actuaciones han causado numerosos muertos —sobre todo militantes de ETA— y han provocado huelgas generales y movilizaciones.

Esas respuestas masivas a la represión han contado siempre con el absentismo del PSOE, PCE, CCOO y UGT y a veces con su oposición abierta. Por el contrario, estos partidos y sindicatos han aparecido activos en otros terrenos como: la participación y apoyo a todas las disposiciones y leyes que dejaban sus puestos a las fuerzas represivas; la utilización de los debates parlamentarios (por ejemplo el que hubo a raíz del "voto de censura" a Suárez propuesto por el PSOE) para reclamar más fuerzas policiales en Euskadi;
el apoyo a Leyes como la "antiterrorista" que el Parlamento elevó a categoría de Ley Orgánica el pasado otoño y que permite, entre otras cosas, la prolongación de los detenidos durante 10 días en comisaría (es en aplicación de esta Ley como acaba de ser asesinado José Arregui Izaguirre);
la formación junto con UCD y otras fuerzas de manifestaciones y 'frentes anti-terroristas".

La culminación de todas estas actitudes la ofreció el PSOE en la sesión del Parlamento vasco del día 13 de febrero. El parlamento aprobó con los votos favorables del PNV, EE y PCE una moción solicitando al Parlamento central la revisión y posible derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Anti-terrorista); dicha solicitud venía avalada, principalmente, por las numerosas denuncias sobre torturas recibidas en los últimos meses. Pues bien, el PSOE tachó de "inconstitucional" dicha moción y votó contra ella. Media hora después de terminada la votación, el parlamento tuvo conocimiento de la muerte de José Arregui Izaguirre a causa de las torturas recibidas en comisaría. Las denuncias llegaron a ser realmente masivas acusando de "complicidad con la tortura y el crimen de Estado" al PSOE, al Partido de Felipe González. Las actitudes del PSOE en Euskadi, tendentes a dar "credibilidad" a su partido frente a la derecha, el ejército y la policía del resto del Estado han creado un enorme enfrentamiento en el movimiento obrero. Puede comprenderese que, las declaraciones del PSOE como "alternativa gubernamental" a la UCD no hayan despertado la más mínima ilusión, ni esperanza en la mayoría del pueblo vasco.

En el extremo opuesto del arco se encuentra ETA (militar) y los sectores de masas que le apoyan y con los que confluye políticamente, sobre todo Herri Batasuna. Los lectores de INPRECOR deben olvidarse de las Brigadas Rojas u organizaciones similares, al pensar en ETA (m). Esta organización armada constituye la dirección política reconocida como suya por un amplio sector del movimiento de masas, particularmente en algunas franjas obreras, juventud y pequeña burguesía. Puede decirse que la línea de ETA militar hegemoniza a Herri Bata-

suna y el KAS (5).

La corriente KAS-HB es con mucha diferencia la corriente de masas más influyente a la izquierda del PNV y la que ha galvanizado en estos años la más dura voluntad de resistencia contra la Reforma Política. Por eso, de su política concreta dependía que la radicalización que recogía pudiera arrastrar a más amplios sectores y convertirse en una barricada cada vez más fuerte contra el centralismo y la represión. Pero esto no ha ocurrido y para entenderlo debemos contemplar tres posiciones políticas características de esta corriente.

En primer lugar, su negativa a utilizar los instrumentos parlamentarios que los resultados electorales les habían dado en el parlamento central, el parlamento vasco y las Diputaciones provinciales. La tesis de que para avanzar en la lucha popular contra la Reforma no se podía estar en las instituciones parlamentarias, sino sólo en la calle, ha sido un auténtico fracaso. El EHBN ha sido un auténtico fracaso, ni siquiera a comenzado a construirse tres años después de su anuncio; ni va a ponerse en pie en lo inmediato, salvo que eso se haga como puro montaje de aparato, agrupando sólo a las fuerzas que ya están en KAS. Lo más grave es que tal actitud ha dejado las manos mucho más libres al PNV y que el amplio sector de masas seguidor de HB no ha tenido esos altavoces parlamentarios que le hubieran servido para enfrentarse mejor a las maniobras de represión y aislamiento tendidas desde la derecha, para aglutinar más adecuadamente y servir de apoyo a la lucha en la calle y, en fin, para poner más sistemáticamente "entre la espada y la pared" a los partidos parlamentarios de izquierda.

En segundo lugar, hay que señalar la combinación entre línea sectaria de trabajo de masas y débil organización del movimiento en el que influencia y esta debilidad para organizar y desarrollar el movimiento, guarda relación con una concepción según la cual, lo decisivo es la "delimitación" política de las organizaciones de masas, es decir; su adhesión al KAS.

En tercer lugar —y en buena parte causa de los anteriores— esta corriente ha dado primacía al apoyo de la lucha armada de ETA (m) como forma de acción política, por encima de cualquier otra cosa. Esa primacía de la actividad de ETA (m), esa dependencia de toda la actividad de masas de esta corriente del nacionalismo radical a las del grupo armado, al protagonismo de éste, se ha convertido en el verdadero cuello de botella para avanzar la organización de los sectores que influencia y agrupa. La lógica de la acción de masas de esta corriente y de sus organizaciones se ha visto permanentemente bloqueada por la lógica propia de ETA (m).

Es significativo que sólo dos días después del acto protagonizado por los cargos electos de HB ante el rey, ETA (m) ejecutara a J.M. Ryan. La polarización política creada por la presencia y actuación —por primera vez— de los cargo de HB en las instituciones parlamentarias, se fue inmediatamente al olvido.

Todo este conjunto de factores ha modificado profundamente la actitud política del pueblo vasco ante el tema de la violencia; ya no existe aquella clara actitud en la que el pueblo distinguía claramente en su actuación, sabía claramente que su actuación estaba dirigida contra el Estado centralista.

El potencial existente se ha ido dilapidando y ha ido dando paso a un hondo cansancio. Hay que añadir, además, que si en la primera fase de la transición política, la ausencia de instituciones autonómicas y la misma oposición del PNV hacían más cercana, más como parte de un conjunto de oposición popular, a la actividad de ETA (m) se estaba convirtiendo en un obstáculo para las conquistas nacionales por vía parlamentaria.

Con cuidado, tratando de no enfrentarse abiertamente, el PNV ha ido aprovechando la situación para animar un movimiento de masas por la paz y la oposición a ETA (m)... con la perspectiva de arrinconar a todos los sectores más combativos de Euskadi.

La ocasión utilizada por el PNV para organizar y movilizar ya abiertamente contra ETA (m) ha sido la ejecución de J.M. Ryan.

Las dos huelgas generales

Inmediatamente de que se diera la noticia del secuestro de Ryan, se formó una Comisión por su liberación. Una comisión que tomó los métodos de acción habituales de organizaciones revolucionarias: pintadas, carteles, búsqueda de pronunciamientos en sectores de la población, manifestaciones, etc., sin despreciar, por supuesto, una amplia utilización de los medios de comunicación. Sectores del movimiento obrero y de sus sindicatos, fundamentalmente el sector socialista, fue vanguardia en el activismo de este comité.

Ni la necesidad de capitalización política por HB de su respuesta al viaje del Rey, ni la campaña por la libertad de Ryan que había logrado ya arrastrar una manifestación de más de 10.000 personas en Bilbao, ni la utilización pronuclear que la compañía IBERDUERO estaba haciendo a costa del secuestro de Ryan, ni el hecho de que 200 técnicos de esta empresa se habían comprometido a impedir su puesta en marcha si no había previamente paralización de las obras y un referendum democrático... nada hizo cambiar la lógica de ETA (m) y Ryan fue ejecutado la noche del día 6.

La huelga general fue convocada por PNV, PSOE, PCE, EE, UCD y AP y los sindicatos ELA-STV, UGT y CCOO; el Gobierno Vasco decretó día de luto para el lunes 9. Y ese día la huelga fue, efectivamente, casi general en todas las provincias vascas excepto Navarra y se celebraron manifestaciones que congregaron a decenas de miles de personas. Pero tanta importancia como la participación mayoritaria de la clase obrera en la huelga, tiene la masiva incorporación a ella y a las manifestaciones de la pequeña burguesía. Este sector tiene en Euskadi una influencia mayoritaria del PNV, pero tiene también una notable influencia del nacionalismo radical. En zonas importantes de la provincia de Guipúzcoa el apoyo de la pequeña burguesía a HB ha tenido, tradicionalmente, un carácter bastante masivo.

A la convocatoria de la huelga y el éxito de la misma, siguió una impresionante campaña de manipulación y capitalización política por parte de la derecha —desde el PNV hasta el Gobierno central— y por parte de IBERDUERO autorepresentándose como la víctima del terrorismo, unido al mayor desconcierto y perplejidad en HB y otras fuerzas de la izquierda revolucionaria.

Sin afanes autoproclamativos de ningún tipo, puede decirse que sólo LKI y LAIA supieron entender y explicar desde la izquierda lo que estaba ocurriendo. De hecho LKI fue durante toda esta semana el único partido que desde las páginas de la prensa, sobre todo del diario EGIN, era capaz de ofrecer análisis y alternativas a la situación. HB ni siquiera llegó a hacer una declaración política ni un comunicado de prensa. El comunicado público del único partido político que como tal forma parte de HB, HASI, no pasaba de la denuncia a la manipulación de los medios de comunicación. Y esta situación puede explicarse, porque sólo podía analizarse la realidad y dar alternativas a ella desde una política como la de LKI situada en un plano opuesto a la lucha armada minoritaria y a la subordinación de la lucha de masas en ella.

LKI llamó abiertamente a no secundar la huelga general y explicó, junto con una dura crítica a ETA (m), cómo y porqué esta huelga sólo beneficiaba a la derecha. LKI combatió los argumentos que trataban de identificar la huelga con un avance en el peso de la clase obrera en la sociedad, con un avance del protagonismo obrero frente al de la lucha armada. LKI llamó a celebrar asambleas en las empresas y pueblos y a hacer públicas sus conclusiones, LKI publicó una declaración política (la única que existió en todo Euskadi), publicó numerosos murales en las ciudades y pueblos, etc. y hay que señalar que en numerosas asambleas el impacto de nuestros argumentos fue muy grande, que sectores por ejemplo de EE desobedecieron la consigna de huelga de su dirección y defendieron con nosotros la oposición a ella, que en empresas significativas la votación a favor de la huelga fue mayoría por mínima y, lo que es más importante, se logró que la asamblea y la reflexión en ella disminuyeran la crispación

y el enfrentamiento.

El envalentonamiento que la derecha obtuvo de la huelga tuvo —como es costumbre— su punto más extremo en el sector más reaccionario de la sociedad: la policía. El militante de ETA (m) José Arregui moría en Madrid el día 13, después de que —en aplicación de la Ley Antiterrorista— hubiera permanecido diez días en comisaría; el cadáver presentaba huellas evidentes de golpes, quemaduras y otros tipos de tortura.

PNV, PSOE, PCE, EE, ELA-STV, UGT y CCOO (esta vez sin el apoyo de la gubernamental UCD ni la derecha Alianza Popular) llamaron a la huelga para el lunes bajo el mismo signo que la semana precedente: "por la paz". La explicación dada por el llamamiento hacía juegos de balanza poniendo al mismo nivel una muerte y otra muerte. De la reunión en que decidieron hacer tal convocatoria fueron excluidas las demás fuerzas.

Por su parte HB, LKI, LAIA, EMK, LAB y otras fuerzas, llamaron también a la huelga general "contra la tortura y por la amnistía para los presos políticos".

El lunes día 16 volvieron a darse asambleas en numerosas empresas y la huelga fue completamente general incluyendo, esta vez sí, a Navarra.

Por la tarde se produjeron manifestaciones por separado entre los dos bloques de fuerzas. El compromiso —por el que LKI batalló duramente— de que no hubiera enfrentamientos, alivió la extraordinaria tensión existente. Las manifestaciones por la "paz" congregaron un número notablemente inferior de gente que las otras (de nuevo el PSOE se lucía no llevando casi afiliados a una manifestación por la muerte del militante de ETA cuando había puesto todas sus fuerzas la semana anterior).

El grito de "gora ETA militarra" (Viva ETA militar), se multiplicó en las voces de miles de manifestantes de HB y el KAS. Tras una semana de catacumbas, el apoyo de masas a ETA (m) volvía a aparecer deshaciendo los pronósticos de apresurados periodistas y líderes políticos que habían anunciado ya el fin de ETA (m), sin entender que ese apoyo de masas es un fenómeno político estructural que sólo desaparecerá o con una derrota brutal bajo la derecha del sector combativo del movimiento que lo asume o con un ascenso de la iniciativa política de la clase obrera abanderando las reivindicaciones nacionales.

Por su parte los dirigentes y la mayoría de militantes de HB se han negado a ver y reflexionar a fondo sobre la situación, tampoco han querido ver en la huelga del día 9 nada más que una anormalidad coyuntural. Pero los problemas están ahí, pese a unos y otros las tensiones y divisiones del movimiento obrero se han mostrado con toda la fuerza que tienen. Esa situación no va a cambiar rápidamente y hace sin duda más difícil la política de un partido revolucionario. Pero LKI ha demostrado las pasadas semanas una madurez política importante, ha demostrado no atemorizarse ante los acontecimientos ni hacer política por impresionismos.

El espacio para iniciativas políticas de un partido como LKI no es grande en esta situación. Pero su ligazón indudable con sectores de la vanguardia obrera, tanto con franjas influencias por PSOE, PCE, EE como por las influenciadas por HB, puede permitirle afrontar con esperanza la situación e incluso ampliar relativamente su propio espacio, como lo ha hecho la semana del 9 al 16.

El desarrollo de una campaña por la paralización y referendum posterior sobre Lemóniz y por la Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, son —junto a un refuerzo del trabajo sectorial y, sobre todo, obrero— los caminos para avanzar en las tareas y crear marcos de recomposición de la unidad del movimiento obrero.

Notas:

(1) Todo lo que ocurre en Navarra tiene especial significado político en Euskadi. El Gobierno central denegó en su día la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma vasca. Desde entonces existe una durísima batalla entre los sectores reaccionarios y caciquiles que, junto con el PSOE, defienden la segregación de Navarra y del resto de Euskadi y el resto de las fuerzas que se oponen a ello.

(2) El Partido Nacionalista Vasco (PNV) es la fuerza política hegemónica en Euskadi; es un partido burgués pero con una amplia base de apoyo interclasista, con organizaciones de masas estructuradas en la base, con una capacidad de convocatoria importante.

Euskadiko Eskerra nació como coalición electoral para las Elecciones Generales del 15 de Junio del 77, representando entonces la corriente nacionalista radical políticamente vinculada a ETA. Posteriormente ETA se dividió en dos ramas una "militar" y otra "político-militar" (ETA p-m). Esta escisión en el grupo armado tuvo repercusiones exteriores; tras un largo proceso de agrupamientos, etc., se formaría frente a EE, la coalición electoral Herri Batasuna (HB), la primera cercana políticamente a ETA (p-m), la segunda a ETA (m).

LAIA es una organización separada-excluida de HB, que desde hace tiempo lleva un proceso que, manteniendo las teorías nacionalistas se sitúa al mismo tiempo en línea de independencia de la clase obrera. De todos modos sus fuerzas numéricas y su influencia no son muy significativas.

EMK es una organización de izquierda revolucionaria que abandonó la ortodoxia maoista. Tiene influencia política real, aún sin comparación con la influencia de masas de HB.

LKI (LCR) —IVª Internacional— su influencia es similar a la de EMK. Nació de la fusión entre una rama surgida de ETA (ETA VIª) y la LCR; forma parte de la LCR, que es organización única a escala de todo el Estado español.

(3) El panorama sindical es complejo. La primera central es ELA-STV, influenciada mayoritariamente por el PNV, pero que cuenta en su interior a los militantes de HB después de que éstos rompieran con el sindicato LAB.

Después de ELA-STV se sitúan CCOO y UGT. LAB, sindicato encuadrado en el KAS, sólo ha tenido apoyo electoral marginal comparado con los tres grandes sindicatos, pero tiene notable influencia en franjas de activistas sindicales, sobre todo en Guipúzcoa.

(4) El 15 de Octubre de 1979 se celebró el referendum sobre el Estatuto de Autonomía en el que participó el 60% del electorado habiendo llamado HB y la izquierda revolucionaria a la abstención; (el Referendum sobre la Constitución tuvo un 51% de abstenciones y en aquella ocasión el PNV y EE también llamaron a la abstención). El 25 de Octubre se celebraron las elecciones al Parlamento Vasco. Desde entonces el Gobierno central de UCD se había dedicado a congelar el traspaso de competencias al Gobierno Vasco, lo que motivó ya el abandono del Parlamento Central por parte del PNV durante varios meses. Por fin, en los últimos meses se comenzaron a realizar traspasos de competencias hasta que el 27 de diciembre del pasado año se firma el "concierto económico entre el País Vasco y el Estado" que deja en manos de las instituciones vascas gran parte de la Hacienda. Eso ha cambiado la actitud del PNV que ha dicho que "ahora podemos gobernar" pero ha sido también contestado por sectores reaccionarios del aparato de Estado.

(5) HB es la coalición electoral y el KAS (Coordinadora Nacionalista Socialista) es la agrupación de los frentes de masas de esta corriente (el sindicato LAB, el movimiento vecinal ASK, el frente juvenil JARRAI...), el partido político HASI, la coalición HB y ETA (m). ■

La "democracia vigilada" y las tareas de los revolucionarios

Si bien el análisis que hicimos en el VIº Congreso sobre la especificidad del régimen nos ha servido para comprender el margen de autonomía que podía utilizar el sector reaccionario dominante en el aparato de Estado heredado del franquismo, a posteriori debemos constatar que esa autonomía ha sido mayor de lo que se podía prever.

1. ¿Por qué la intentona golpista?

La intentona golpista se ha producido con unos antecedentes inmediatos (dimisión de Suárez, muertes de Ryan y Arregui, derrota de Calvo Sotelo en la primera vuelta) que han profundizado los factores de crisis política y social: primeramente ese peso del sector reaccionario en el aparato de Estado ha sido utilizado a fondo para presentar un proyecto político propio (una vez más, gracias a la tolerancia mostrada a lo largo de la transición, como precio del consenso); en segundo lugar, la crisis de dirección política burguesa se ha agravado enormemente ante la incapacidad de UCD para ser representante político de la mayoría de la burguesía y dar pasos adelante en la solución de la crisis económica y la cuestión nacional, además de la dificultad para controlar el aparato de Estado; en tercer lugar, la desmovilización de los trabajadores, que ha llegado hasta tal punto que no creaba preocupación mayor en los golpistas sobre cuál sería la respuesta de masas frente a su proyecto. A esto habría que añadir la confianza en ganarse una base social de apoyo, limitada pero muy activa, y la esperanza de que la "era Reagan" creara al menos divisiones en el imperialismo sobre su apoyo o no a un golpe triunfante.

A partir de este contexto se produce una confluencia de sectores de la jerarquía militar de cara a aplicar el golpe aprovechando un "vacío de poder" para convencer al Rey de una solución extra-parlamentaria: ahí sí se puede decir que el ala Milans-Tejero trataba de imponer una alternativa de dictadura pura y simple, mientras que Armada pretendía capitalizarla en una línea de "golpe a la turca".

En todo caso, y más allá de las especulaciones, lo que es evidente es que el golpe ha sido frenado sobre la base de un pacto político que asume parte de los objetivos (o la orientación) de los golpistas sobre todo en lo referente a la restricción de las libertades; pacto en el que ha jugado un papel protagonista el Rey. Este, después de una pausa en la que valoró la relación de fuerzas, obró finalmente como intérprete de los intereses de la mayoría de la burguesía: tanto el capital financiero como el industrial no consideran necesario un golpe militar; tampoco la mayoría de la burguesía europea parece, hoy por hoy, favorable a esa opción en un país cuya estructura de clases y consecuencias en otros países europeos (Portugal!) son muy diferentes de Turquía, lo que no quiere decir que no estén por regímenes políticos fuertes, gobernados por una gran derecha.

La actividad aventurera de ETA ha incidido en esa coyuntura como un factor que ha servido de coartada para acelerar los propósitos de los golpistas, pero sería un error pensar que es la razón fundamental, como pretenden hacer creer el gobierno y los reformistas.

Pero lo más grave ha sido el hecho mismo de que el golpe haya sido frenado por un pacto hegemonizado por el Rey y no por la respuesta popular de masas. La actitud suicida de las direcciones de PSOE, PCE, CCOO y UGT (salvo excepciones en algunas nacionalidades y localidades) no llamando a la HG y confiando en las instituciones ha impedido una movilización generalizada. La debilidad de la izquierda revolucionaria y los efectos del retroceso del movimiento obrero explican el carácter localizado de las acciones de paro y protesta realizadas al día siguiente del golpe. Y hay que decir que esto ha sido particularmente trágico en el País Valencià por encontrarse precisamente en situación de estado de excepción.

Es verdad que las manifestaciones del día 27 fueron una demostración, aunque tardía, de la voluntad de lucha que había en millones de trabajadores contra el fascismo y la reacción; pero también lo es que en ellas se expresaron todas las ilusiones en las instituciones del Estado que aparecían como vencedoras de los golpistas.



2.
La situación actual y las perspectivas

El 23-F abre una nueva etapa en el Estado español, caracterizada por una crisis abierta del tipo de régimen consolidado a lo largo de la transición, y por el protagonismo creciente del Ejército y el Rey. El resultado político inmediato ha sido el de un corrimiento general de la situación más a la derecha.

En primer lugar, dentro del propio régimen y en la burguesía en general. En el VI° Congreso destacábamos el papel del Rey como árbitro y formalizador del compromiso entre el viejo aparato de Estado, por un lado, y la burguesía, la izquierda reformista y las nuevas instituciones democrático-burguesas, por otro. Ahora mismo, se puede decir que ese papel de árbitro es cuestionado por un sector del Ejército mientras que se ha visto reforzado en el otro campo. Esto es lo que está creando un desequilibrio interno y exigiendo una remodelación del régimen mediante nuevos compromisos entre esos sectores reaccionarios del Ejército y el resto.

Todo esto supone abrir paso a una "reforma de la reforma" o a lo que se está dando en llamar una "democracia vigilada", destinada a satisfacer una parte importante de los objetivos y a reconstruir la dirección política de la burguesía, tratando de disciplinar internamente a sus distintas fracciones. El "pacto de la Zarzuela" ha sido la expresión del proceso abierto hacia un nuevo compromiso que evite otro golpe.

En estas condiciones, la crisis económica y social actúa como un factor de agravamiento de las contradicciones interburguesas. Ls perspectivas no son nada halagüeñas: 1980 ha sido un año de recesión tan profundo como el bienio 74-75; en el 80 se han perdido 442.000 puestos de trabajo y el paro ha aumentado en 385.000; en el 81 se espera medio millón más de parados, lo que se traducirá en un riesgo de quiebra para muchos capitalistas y una tensión social más aguda. La inflación puede dispararse, máxime con un año agrícola muy malo, que obligará a la elevación de los precios de los alimentos. El déficit de la balanza de pagos puede elevarse por encima de los 6.000 millones de dólares... Estos son algunos de los datos que, unidos a la inestabilidad política, obligarán a una reorientación de la política de austeridad de la burguesía y a diferentes tácticas en relación a las opciones políticas que pueden aparecer en el futuro. El resultado inmediato, de todas maneras, es ya el de intentar acelerar los ritmos de integración a la CEE, lo cual no ha dado sin embargo frutos muy positivos más allá de promesas y de los préstamos logrados en la Banca Europea de Inversiones.

A la hora de las hipótesis sobre la evolución de la situación, es claro que hay dos fundamentales. Una, la que actualmente propugna la mayoría de la burguesía: que el gobierno de Calvo Sotelo abra el puente hacia una gran derecha centralista que frene la dinámica de autonomización de las FAS a cambio de satisfacer muchos de sus objetivos políticos; otra, la de los sectores golpistas de las FAS que, pese a no haber triunfado, se ven estimulados por las mismas concesiones del gobierno y por la tolerancia respecto a los cómplices del golpe frustrado y cuyo objetivo inmediato es el de ganar base social y atraer al menos a un sector del gran capital y del imperialismo.

No es probable un nuevo golpe a corto plazo. Antes de agotar las posibilidades del régimen actual, no parece que pudiera realizarse con una unidad suficiente en las filas del Ejército; aunque es evidente que factores como la actividad de ETA sí pueden actuar como pretexto para pasar a aplicarse en el próximo periodo.

Habría que hablar, de todas formas, de qué tipo de golpe sería más viable. El golpe "duro", a la boliviana, es decir, el que podría ser reeditado por sectores afines a Milans-Tejero, es el menos credible ante un sector, incluso el retardatario, de la burguesía, por el precio político y económico que supondría; pero el grado de autonomía de que siguen gozando quienes podrían protagonizarlo y sus posibilidades de ganar apoyo en capas de la pequeña burguesía fuera de las nacionalidades históricas, agitando temas como "unidad de la patria" y "contra el terrorismo", obligan a estar también alerta frente a ese peligro.

Por otra parte, estaría el golpe "blando", o "a la turca", el que se intentaría aplicar apoyándose incluso en las funciones que la Constitución otorga al Ejército y en la no oposición al mismo por parte del Rey. Es esta alternativa la que podría ganar audiencia en el futuro, en caso de que la solución a la crisis de dirección burguesa no avanzara. Un golpe semejante podría ganar el apoyo de un sector significativo del capital financiero y el industrial. Sería una fórmula de "gobierno de gestión" fuera del control parlamentario, adoptando medidas como intervención militar abierta en Euskadi, reforma de la Constitución, represión selectiva contra la izquierda y política de austeridad mayor. El problema, lógicamente, es que una cosa son las intenciones y otra la dinámica real que abriría: su transformación en dictadura no sería difícil, dado el peso que en el aparato de Estado tendría un ala "dura" y la resistencia que podrían oponer sectores del movimiento obrero y popular.

En resumen, no hay que descartar la hipótesis de nuevo golpe, pero lo más importante es situar nuestro análisis en còmo la burguesía va a jugar a fondo sobre su margen de maniobra para hacer por métodos que permitan un mínimo consenso social una parte creciente de las exigencias de la jerarquía militar. En un primer momento, esta tarea se plantea a través del gobierno Calvo Sotelo. En la medida que éste entrara en crisis, puede barajar otras cartas, como la de un gobierno con entrada o colaboración más directa de AP y PSOE; o, simplemente, la convocatoria de unas elecciones con garantías de victoria para la derecha centralista; o, en fin, la búsqueda de formas de participación más directa de la jerarquía militar en las decisiones del Ejecutivo...

En todo caso, frente al "alarmismo", creemos que lo fundamental es denunciar el proceso que se abre hacia la "democracia vigilada" y la diferencia menor que cada vez habrá entre ella y la amenaza real de otro golpe de Estado. La colaboración de la izquierda reformista en esos proyectos aparece así como una política suicida.

El gobierno Calvo Sotelo ha empezado ya a actuar en ese sentido: el proyecto de ley de defensa de la Constitución, el de "armonización de las autonomías", la anunciada reforma de la ley electoral, las medidas de excepción en Euskadi, son ya los ejemplos más sintomáticos de una política destinada a dar nuevos pasos atrás en el proceso autonómico, a restringir las libertades, a atacar a fondo a la izquierda nacionalista y revolucionaria y a disciplinar las filas de las fracciones vasca y catalana de la propia burguesía.

Al mismo tiempo, ese gobierno va a combinar esa política más agresiva con la "concertación" con PSOE-PCE y los sindicatos sobre el tema "autonómico" y el paro, principalmente. Pero será sobre este último tema donde sus posibilidades siguen siendo limitadas, a pesar de la voluntad conciliadora de los dirigentes de CCOO y UGT.

La presión hacia la derecha en la burguesía va a estimular a AP y al sector democristiano de UCD hacia una política de colaboración cada vez más estrecha, mientras que por otro lado creará nuevas contradicciones en PNV y CiU. En la medida que la base de masas de estos partidos procede de la satisfacción, aunque sea parcial y deformada, de las aspiraciones nacionales de capas de la pequeña burguesía e incluso de la clase obrera, van a verse obligados a un equilibrio cada vez más difícil que, en el caso de Euskadi, puede llevar en los próximos meses a tensiones internas muy fuertes. Es ahí donde al poder central va a ser más duro, consciente de que tiene que forzar, apoyándose además en el PSOE, a que el PNV entre en posición subordinada dentro de la recomposición de la dirección burguesa.

Ni que decir tiene que la extrema derecha va a iniciar una nueva escalada a la búsqueda de una mayor base social y en apoyo descarado a los "héroes del 23-F". El papel de sus organizaciones juveniles, de mujeres, de su prensa, y la agitación en el interior del Ejército, irá aumentando a medida que se acerquen los juicios a los golpistas, anunciados en principio para el próximo mes de junio.

Por último, no hay que olvidar que las elecciones gallegas siguen previstas para antes de septiembre y pueden ser un "test" de los resultados de la nueva situación en una nacionalidad que hasta ahora ha mantenido un elevado grado de abstención ante los procesos electorales.

3. La izquierda y el movimiento obrero y popular

La reacción del PSOE durante y después del 23-F ha sido la de ofrecerse lealmente a gestionar junto a UCD y el Rey la crisis del régimen. Dejando de lado las consecuencias dramáticas a las que les conducen sus ilusiones en ganar a sectores del Ejército para su proyecto de gobierno de coalición, su papel se está centrando en convencer a la burguesía europea para acelerar la entrada en la CEE.

La gran debilidad de este partido sigue siendo, sin embargo, su escasa base de apoyo organizada como fuerza política. Su política electoralista y parlamentarista le ha convertido en un equipo de notables más que en un organismo vivo semejante a lo que pueden ser la socialdemocracia alemana o el laborismo inglés. A superar este defecto va dirigida la preocupación actual de la Ejecutiva, pero es evidente que llega demasiado tarde para conseguirlo con éxito. Es en este tema de diferenciación donde sigue habiendo unidad dentro de la "Izquierda Socialista", pese a que conoce una práctica descomposición después de pasar a apoyar mayoritariamente la propuesta de un gobierno de coalición.

En el caso del PCE, no cabe duda que en un primer momento Carrillo se ha sentido reforzado en su política después del 23-F: del discurso anticomunista de Calvo-Sotelo antes de la investidura a su disposición a apoyarse en el PCE y en CCOO para "normalizar" al movimiento obrero, hay una diferencia importante; lógicamente, esta "concertación" va a durar poco tiempo, pero el suficiente para que Carrillo trate de demostrar su voluntad de corresponsabilizarse de la política que quieren aplicar el Rey y la UCD. Por eso, pretende un cierre de filas interno sobre esta política y, lo que es más grave, intenta hacerlo con métodos burocráticos más duros. Esto hace prever que, pese al contexto más desmovilizador en que nos encontramos, van a seguir actuando los factores de contradicción que existían antes del 23-F: la cuestión nacional (y la actitud ante temas como la ilegalización de HB o "Egin"), la democratización interna y la relación entre la política de pactos y la movilización de masas, crearán tensiones, incluso más graves, no sólo con el PSUC o con sectores críticos minoritarios en otras nacionalidades o regiones, sino también con alas de la burocracia.

En CCOO esta orientación del PCE se está manifestando de manera menos visible, pero puede provocar también diferenciaciones en función de cómo evolucionen las negociaciones con el gobierno y de las presiones de sectores de base para responder a cuestiones tan centrales como la de la lucha contra el paro.

En cuanto a los nacionalistas radicales, ya hemos valorado en Combate la crisis de estrategia que se ha abierto en su interior después del 23-F. La imposibilidad de definir una orientación en el marco limitado de cada nacionalidad ha llevado a una parte importante de esa corriente (sobre todo en Euskadi) a cometer errores sectarios e izquierdistas que pueden ver estrechado su marco de influencia a pesar de que la política centralista les siga dando base suficiente para desarrollarse.

Pero lo más importante es comprender la actitud de las distintas corrientes de izquierda en el marco de la situación actual del movimiento de masas. La indignación frente al intento golpista no se ha transformado en una movilización activa, que continúa siendo frenada por la política del "miedo" que practica la izquierda reformista.

La división y la desmoralización son hoy mayores, y el problema central está en ir creando confianza en el movimiento obrero en sus propias filas.

Pero no hay que olvidar que junto al giro a la derecha de una parte importante del movimiento coexisten una politización, una reflexión y una radicalización en las bases mismas de los grandes partidos y sindicatos, en torno a cómo hacer frente a la crisis económica y al chantaje golpista. Lo importante es valorar las posibilidades de recomposición de ese movimiento a partir de las batallas políticas y sociales parciales que pueden darse en los próximos meses y del reflejo defensivo y unitario que pueden crear en sectores crecientes de la clase obrera.

Ello no significa negar un dato fundamental: la falta de respuesta de masas el 23-F y después por parte de la clase obrera expresa un retroceso en su nivel de conciencia y una mayor pérdida de su protagonismo en el conjunto de la sociedad. Esta situación va a facilitar la ofensiva de la burguesía en todos los terrenos y la demagogia fascista entre capas importantes de la pequeña burguesía y en los parados.

La orientación de la LCR

Profundizar en el análisis del régimen, en las particularidades del Ejército, insistir en la combinación de las tareas de acción de masas con las de educación de masas, son tareas más necesarias que antes. Pero, sobre todo, la situación del movimiento y las amenazas golpistas exigen destacar las tareas elementales de organización de la resistencia y de defensa de las libertades, no subestimando ninguna batalla parcial; las dificultades de nuestra táctica de Frente Unico Obrero van a ser mayores, teniendo en cuenta los intentos de aislamiento de los revolucionarios por parte de las direcciones de PSOE-PCE y la crisis del nacionalismo radical; en fin, la concepción del partido de los revolucionarios debe traducirse en propuestas concretas en cada nacionalidad y región a colectivos revolucionarios, partiendo de la urgencia en dar pasos en su construcción y de la reactivación de un sector de la izquierda, evitando así que sea desperdiciado el potencial revolucionario que éste encierra y respondiendo a su preocupación por organizarse.

Nuestra actividad debe basarse en la Unidad y la Movilización contra la derecha y la reacción, buscando responder a las preocupaciones del movimiento: cómo evitar la desmoralización y la repetición del golpe, cómo defender las libertades y luchar contra la opresión nacional, cómo combatir el paro...

A la hora de la táctica, como decíamos antes, tenemos que buscar los medios para evitar caer en errores sectarios o en una intervención exterior al movimento de masas. Las situaciones y relaciones de fuerzas son diferentes en cada nacionalidad o región, por lo que no es posible dar una táctica homogénea. Nuestra capacidad de iniciativa y de propuestas como partido debe reforzarse, de cara a lograr alianzas con MC y sectores del nacionalismo radical, por un lado, y para apoyar el trabajo de corriente de las organizaciones de masas, por otro. Será ese doble tipo de trabajo el que nos ayudará a repercutir nuestra línea de FUO en el grueso del movimiento obrero.

La orientación de Unidad y Movilización debe servir para explicar mejor sobre qué debe basarse. Nosotros pretendemos un Frente Unico de sindicatos y partidos de izquierda para luchar contra el gobierno de la derecha y las amenazas golpistas. Ese frente puede estar abierto a la alianza táctica en torno a objetivos concretos con otras fuerzas no obreras; concretamente, en el momento actual, con fuerzas nacionalistas burguesas que coincidan en el rechazo de medidas de excepción para Euskadi o del nuevo "frenazo autonómico". Nuestra diferencia con los reformistas está en que nosotros la planteamos sobre la base de la unidad en la acción y sin ocultar los objetivos propios del movimiento obrero, y en que, además, aquéllos tratan de justificar las amenazas golpistas para apoyar al gobierno de la derecha y al régimen, que toleran y encubren a los sectores reaccionarios del aparato de Estado. En suma, unidad e independencia de clase del movimiento obrero siguen siendo los mejores instrumentos para crear contradicciones en la burguesía e impedir que se instaure un régimen de "democracia vigilada" que no sería más que la antesala de una nueva dictadura. ■

ARGENTINA

A. Heredia

El General Viola, nuevo dictador impuesto por la Dictadura

EN la antigua Roma, la dictadura se estableció como último recurso de las instituciones republicanas. En caso de peligro extremo, los patricios elegían democráticamente al dictador que debía salvar la República. La historia de las instituciones conoce gran variedad de formas de ejercicio del poder. Pero la dictadura argentina acaba de lograr sin duda una innovación en la materia, haciendo que la propia dictadura elija a un dictador para mantener la dictadura.

En un clima de gran expectativa, cuando circulaban las hipótesis más contradictorias, los comandantes en jefe del Ejército argentino anunciaron el parto de los montes: el teniente general Viola había sido elegido para sustituir, a partir del 29 de marzo de 1981, y hasta el año 1984, al teniente general Videla.

Esta curiosa forma de sucesión tiene cierta similitud con el referéndum de Pinochet o con el proyecto constitucional que sometió a voto la dictadura uruguaya. Pinochet pretende asegurar su permanencia en el poder hasta 1998. La dictadura uruguaya quiere constitucionalizar la elección de un candidato único a la presidencia de la República. La Junta Militar argentina elige al sucesor designado del dictador. ¿Acaso no anuncia todo esto un proceso de institucionalización de las dictaduras?.

Si el único objetivo de estas dictaduras consistía en oponerse al ascenso revolucionario obrero, y si su único fin era el de aplastarlo para devolver después las instituciones democráticas o republicanas a sus antiguos titulares, ¿por qué no lo hacen ahora, cuando todos coinciden en decir que la "subversión" ha sido destruida y que "se ha restablecido la paz y el orden"? ¿Por qué recurren, en cambio, a formas tan novedosas de consulta electoral?.

Para algunos, estas dictaduras han tenido que buscar los medios de mejorar su imagen bajo la presión de la Administración Carter y de su campaña por los "derechos humanos". Esta hipótesis plantea al menos dos objeciones: 1) idealiza la omnipotencia del imperialismo norteamericano y considera que estas dictaduras son simples marionetas del imperialismo; 2) no tiene en cuenta la reestructuración de las clases dominantes que se produjo en estos países, y que determinó la aparición de estas dictaduras.

Estos análisis llevan a pensar hoy que la derrota de Carter reforzará las dictaduras del Cono Sur y acentuará su orientación contrarrevolucionaria. Sin quitarle importancia política al triunfo electoral republicano en los Estados Unidos, sería peligroso sacar conclusiones mecanicistas para América Latina.

De entrada porque esto equivaldría prácticamente a absolver a la Administración Carter y a otorgarle un certificado de progresismo al Partido Demócrata. Pero cualquiera que sea el partido que esté en el poder en los Estados Unidos, deberá aplicar la política de defensa de los intereses imperialistas, de acuerdo con los medios que le permiten las bases materiales y la relación de fuerzas entre las clases, tanto a escala nacional como internacional.



Si la derrota de Carter tiene cierta importancia para la lucha de los pueblos latinoamericanos, esto no se debe tanto a sus diferencias con respecto a la política republicana, como al hecho de que muestra el grado de desorientación del proletariado norteamericano. Para la revolución latinoamericana, la elección de Reagan muestra únicamente todo el camino que queda por recorrer antes de que las masas latinoamericanas puedan contar con el proletariado norteamericano y éste se convierta en su principal e insustituible aliado.

Además, hay pruebas irrefutables que demuestran que estos regímenes dictatoriales, que sin duda están integrados en la defensa del sistema capitalista y sometidos a los intereses imperialistas, actúan, sin embargo, con una notable autonomía. Una autonomía que es superior a la de numerosos regímenes precedentes, que parecían apoyarse en una base social popular y en orientaciones nacionalistas.

La Junta argentina no sólo desafía el boicot de cereales a la URSS, decretado por la metrópolis imperialista, sino que incluso se vanagloria de haberlo hecho fracasar, a través de los editorialistas a su servicio, mientras que se embolsa los suculentos beneficios obtenidos con la venta de trigo a la Unión Soviética. Desde hace dos años, en el terreno de los intercambios comerciales internacionales, la URSS se ha convertido

en el principal cliente de Argentina. Además, la URSS apoya financiera y técnicamente la construcción de una de las instalaciones hidroeléctricas más importantes del país, y que deberá contribuir a la autosuficiencia energética de Argentina.

Pero no es solamente la dictadura argentina la que muestra esta autonomía. Según el diario *El Mercurio,* el ministro chileno de Agricultura acaba de firmar un acuerdo de cooperación científica y técnica con China Popular; el año pasado, los intercambios comerciales entre Chile y China aumentaron en un 200% en relación a 1977. ?

El bloqueo del Cono Sur

Esta "autonomía" de la dictadura argentina se ha manifestado también, con mucha claridad, en su intervención en el golpe de Estado militar en Bolivia, y en el apoyo financiero y militar que prestó, contrariamente a los planes de la administración Carter, a la dictadura boliviana de García Meza. Esto demuestra que las dictaduras no actúan ya como simples marionetas del imperialismo norteamericano, sino que defienden también sus propios intereses. Y estos intereses propios son los de la nueva oligarquía, asociada con las multinacionales, que trata de hacerse un sitio en el nuevo orden económico internacional.

Esta base material propia de la dictadura militar en Argentina determina, por su propia dinámica, la necesidad que tiene de extenderse y consolidarse desde el punto de vista económico, político y militar, en el Cono Sur de América Latina; y por tanto, de oponerse a la estrategia imperialista, máxime cuando ésta significa una regresión en comparación con el nivel alcanzado en la reestructuración y el desarrollo de sus intereses propios.

Si la Junta Militar de Videla se aproxima a Brasil, si firma pactos y acuerdos con la dictadura brasileña, si interviene en Bolivia para instaurar otra dictadura, no sólo lo hace sobre la base de una identidad ideológica con dichos gobiernos, sino porque esto corresponde a intereses complementarios.

El llamado "Pacto del Cono Sur" (que según el ministro boliviano del Petróleo ha sido firmado, y según el ministro de Defensa de Paraguay, Marcial Samaniego, es un pacto tácito, mientras que según el ministro uruguayo ya está aplicándose), no es el fruto de una capacidad de manobra diabólica de las dictaduras. Es la expresión concreta de los intereses de las clases dominantes. Y el Ejército está a su servicio para coordinar sus esfuerzos, afirmando cierta independencia en relación a la política imperialista, para situarse mejor en el nuevo orden económico mundial.

Este "Pacto del Cono Sur", que la dictadura de Videla niega haber concretado, es la expresión objetiva de la necesidad de estas burguesías de buscar una solución distinta a la integración económica en el Pacto Andino. Expresa igualmente la contradicción de sus intereses con los de las metrópolis imperialistas, o al menos con algunos sectores imperialistas. Este proceso explica la "autonomía" de la dictadura argentina frente a los planes imperialistas, y el carácter agresivo de su política.

Actualmente, la dictadura argentina se compromete a desempeñar un papel independiente como consejero y apoyo militar y técnico de la contrarrevolución en los países de América Central, hasta ahora sometidos al control exclusivo de la metrópolis norteamericana. Pero este "Pacto del Cono Sur" sufre en su seno todas las contradicciones que han impedido hasta ahora que los intentos de integración económica latinoamericana puedan materializarse. En el preciso instante en que las dictaduras dan pasos adelante en su alianza regional, el conflicto fronterizo en torno al canal de Beagle, que enfrenta a Argentina con Chile, alcanza casi el nivel del enfrentamiento abierto.

Del mismo modo que no se puede despreciar la identidad filosófica o ideológica entre ambos regímenes, tampoco hay que ignorar la gravedad del conflicto que los enfrenta. Lo que les une, o los separa, no es tanto la identidad filosófica o ideológica como la defensa de sus propios intereses bien concretos.

El canal de Beagle reviste un interés estratégico fundamental, pues se trata de la única vía de comunicación marítima entre Occidente y Oriente, en el caso de una eventual destrucción del Canal de Panamá o de la pérdida de su control por la metrópolis imperialista. A esto hay que añadir que el desarrollo de las técnicas de construcción naval han hecho que el canal de Panamá resulte inutilizable para los barcos modernos de alto tonelaje. Además de este interés geopolítico, está la cuestión del control de los yacimientos petrolíferos submarinos que están prospectándose, y para algunos en vías de explotación, sin contar con los objetivos de la soberanía sobre los territorios del Antártico.

La intervención de las dictaduras del Cono Sur en Bolivia, para impedir el restablecimiento de un gobierno parlamentario como el de Siles Suazo, también guarda un sentido político preciso: desalentar a los sectores políticos tradicionales de la clase dominante, que aspiran a restablecer formas institucionales parlamentarias que ya no responden a su política, mientras que éstas se orientan hacia una nueva forma de reestructuración del sistema.



Si entendemos que estas dictaduras son el producto del nivel alcanzado en la reestructuración de las clases dominantes, bajo el efecto del desarrollo de las nuevas formas de penetración imperialista, si comprendemos la profunda modificación que conlleva esto con los negocios y el desarrollo de las clases dominantes tradicionales, ya sea la oligarquía terrateniente o la burguesía industrial local, seremos más capaces de comprender la dinámica global de estas dictaduras y quitarle al fenómeno del Cono Sur todo carácter demonológico.

Esto nos permite afirmar al mismo tiempo que estas dictaduras, independientemente de su evolución ulterior, han cerrado el ciclo abierto en la historia de la lucha de clases después de la Segunda Guerra Mundial. Señalan el final del ciclo del nacionalismo populista, del ciclo del desarrollo de los movimientos de masas bajo direcciones burguesas o pequeñoburguesas que coexistían con las instituciones tradicionales del Estado. Estas dictaduras abren un nuevo ciclo de la historia de la lucha de clases en el Cono Sur, que exige que se ajuste la táctica y la estrategia revolucionaria a esta nueva realidad.

El significado de la elección de Viola

La dictadura argentina se vanagloria de haber liquidado la subversión. Cuenta en su activo con millares y millares de desaparecidos y de muertos, de centenares de miles de exiliados. La dictadura Argentina se vanagloria de haber materializado el "mila-

gro argentino".

En un país que en el momento del golpe de 1976 estaba al borde de la suspensión de pagos, dispone actualmente del equivalente de 10.000 millones de dólares en divisas. Se jacta de contar con reservas de gas, de petróleo, de uranio y de energía hidroeléctrica, sin hablar de la nuclear para satisfacer el abastecimiento energético del país. Se enorgullece de haber liquidado la industria no competitiva y de haber modernizado su aparato productivo. Hace alardes de haber disminuido el peso específico del proletariado, que ha pasado a representar, del 82% de la fuerza de trabajo, el 67%.

Pero por encima de todo, la dictadura se jacta de haber arrebatado al proletariado más poderoso de América Latina el 50% de sus salarios, es decir, que la dictadura ha arrancado a los asalariados cerca de 50.000 millones de dólares a favor de las clases poseedoras. Y la Junta se vanagloria de haber liquidado a la CGT, la poderosa organización sindical argentina, privándole de los enormes recursos de las obras sociales, como la seguridad social, administradas hasta entonces por la burocracia sindical.

Si estos son sus éxitos, ¿por qué cambiar a Videla? Es cierto que el Estatuto de la Junta Militar establece que el Presidente no puede ser reelegido. Pero en el pasado, la Junta ha hecho poco caso de las reglas jurídicas, por muy importantes que fueran. ¿Qué busca la Junta? ¿Se trata simplemente de un "relevo" de hombres sin ningún otro significado político? ¿O acaso la elección de Viola constituye el primer paso hacia una nueva institucionalización? Si este es el caso, ¿qué institucionalización? Trataremos de aclarar esta cuestión.

La Junta se encuentra confrontada con una fuerte oposición. Contrariamente al triunfalismo revolucionario, no se puede decir que son los trabajadores, ni la clase obrera, quienes amenazan a la Junta. No cabe duda que hay conflictos obreros y huelgas parciales. Aparecen nuevos niveles de organización de una resistencia sorda, tanto en las fábricas como en los barrios. Pero no son los obreros los que la encabezan o que toman la iniciativa de la resistencia contra la Junta.

Paradoja de la historia, son las mismas fuerzas sociales y políticas que ayer apoyaron a aplaudieron a la Junta, las que ahora la ponen en entredicho. Tampoco es la pobre burguesía industrial nacional, representada ayer por la CGE (Confederación General Económica), la que encabeza esta resistencia. Hoy en día es nada menos que la gran burguesía tradicional de la Unión Industrial Argentina, de las organizaciones de la oligarquía terrateniente y de los armadores pesqueros.

¿Por qué? ¿Acaso la dictadura no ha materializado el "milagro argentino"? Sucede que la economía tiene sus leyes. La oligarquía terrateniente y la burguesía industrial han coincidido en prestar todo su apoyo a la Junta para desmantelar a una vanguardia obrera amenazadora y, por qué no, desmantelar los sectores retardatarios de la burguesía que vivían de las subvenciones estatales. Todos coincidieron en robarles a los trabajadores 50.000 millones de dólares de sus salarios.

Lo que los diferencia ahora, lo que los enfrenta, es sobre todo el problema de saber quién va a hacer fructificar estos 50.000 millones de dólares, o cómo van a emplearse, y a quién beneficia la política de la Junta para insertar el país en el nuevo orden económico mundial.

En efecto, la designación de Viola constituye una medida transitoria en la nueva estructuración institucional del país. El desarrollo económico impone una nueva forma más directa de intervención en los asuntos del Estado por parte de los sectores dominantes que se reparten la renta. La burguesía industrial se opone a la política económica de la Junta.

El dirigente de esta burguesía, Oxenford, declaró lo siguiente, con motivo de la celebración del *"Día de la Industria"*, en septiembre de 1980, criticando públicamente y en presencia de Videla, la política económica de la Junta: *"Desde septiembre de 1978 a julio de 1980, el peso se ha devaluado con respecto al dólar, en un 87%, los precios al por mayor han aumentado en un 212% y el índice del coste de la vida en un 256%. El consumo global de los ultimos cinco años ha disminuido en un 7%, incluyendo el 11% de descenso del consumo privado y el 35% de aumento del consumo del sector público".*

Los dirigentes de la industria denuncian el descenso constante de la utilización de las capacidades productivas industriales y el cierre de importantes empresas, como la fábrica de máquinas de coser Necchi Argentina o la fábrica de tractores Deutz.

La disminución del número de obreros industriales, si se compara los nueve primeros meses de 1979 en relación a 1976, es del 19%, y alcanza el 21,6% si se lo compara con el año 1975. En las grandes empresas industriales, esta disminución de la mano de obra industrial alcanza el 16,2%. Pese al cierre de fábricas y a la importante disminución de los efectivos industriales, el paro afecta solamente al 2% de la población activa, aunque se estima que el 25% de ésta se las arregla con sus propios medios, trabajando "clandestinamente" o "por cuenta propia", y en la que los antiguos proletarios marginados de la actividad industrial constituyen una franja social desproletarizada.

De acuerdo con el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras en 1960 la participación de Argentina en la producción industrial latinoamericana alcanzaba el 25,1%, descendió al 22,1% en 1970 y a tan sólo el 16,4% en 1979. En 1980, el Producto Interior Bruto (PIB) creció en un 0,2%, mientras que la tasa de crecimiento industrial disminuía en un 2,3%, y la de la pesca y la agricultura, en un 7,5%.

De 2.000 empresas de piezas de recambio para automóviles (desarrolladas con el gran *boom* de los años sesenta y la penetración de las multinacionales del automóvil), 400 han cerrado sus puertas entre 1976 y 1980. Las que permanecen trabajan al 50% ó 30% de su capacidad, según Ernesto Pedrero, Presidente de la Cámara Argentina de componentes del automóvil.

Esta situación se ve agravada por la política de sobrevaloración del peso con respecto al dólar, que impide que la industria nacional sea competitiva frente a las importaciones. Esta política de sobrevaloración del peso, sin embargo, no ha conseguido combatir la inflación. Si la Junta ha logrado reducir la inflación anual del 800%, en el momento del golpe de Estado de 1976, a 159,5% en 1979, no ha alcanzado el objetivo de contenerla dentro de los límites de un número de dos cifras, y Argentina sigue siendo el país de América Latina que tiene la inflación más alta.

Evidentemente no son todos los industriales los que se oponen o se resisten a la política de la Junta. Todos los que trabajan en la especulación financiera o en la actividad basada en la importación, la apoyan. Algunas cámaras industriales, como las azucareras del Norte o las acerías dominadas por el grupo Acondar, no se asocian a estas críticas.

Los sectores vinculados a la agricultura y la ganadería tampoco están satisfechos con esta política. Por ejemplo, la COMINAGRO (Confederación Intercooperativa Agrícola) declara que la sobrevaloración del peso ha hecho disminuir las superficies sembradas al nivel de 1970-71. En relación a los costes, el productor agrícola obtiene solamente el 54% para el trigo, el 38% para el maíz y el 36% para el sorgo, y la parte del PIB correspondiente a la producción agraria, en el segundo trimestre de 1980, descendió en un 9,8%, mientras que la producción industrial bajaba en un 6,9%.

Tal situación en la agricultura no sólo ha provocado críticas o protestas verbales contra la Junta, sino que, por ejemplo, en el Valle de Uco, en Mendoza, los productores agrícolas organizaron jornadas de protesta, y se ha llamado la "huelga de Uco" a un movimiento social de la burguesía regional que ha sacudido a la burguesía nacional.

De ahí que Balbín, dirigente del "Radicalismo del pueblo", que es un partido burgués, haya declarado que si no se producía un cambio en la orientación económica, lo que ha sucedido en Uco no sería mas que el primer paso hacia un movimiento nacional.

Respondiendo a intereses muy concretos, los del mundo de los negocios, y al mismo tiempo que declara su firme adhesión a la filosofía de la Junta, en su cruzada contra la "subversión apátrida" y por "la paz en el

orden", la burguesía toma la iniciativa de la oposición política a la Junta. Oposición tanto más abierta y provocadora, cuanto que aprovecha la desarticulación del movimiento obrero y la destrucción de su vanguardia.

Lo que no quiere decir que algunos sectores de la burguesía no verían con malos ojos, o incluso favorecerían, ciertas formas de recomposición de las estructuras sindicales, para apoyarse en ellas con miras a organizar una alternativa política a la Junta. Estos sectores tradicionales de las clases dominantes no ven con buenos ojos a esta nueva capa aliada con los militares que se enriquece haciéndose con el control de los sectores clave de la economía, y esto a expensas de sus propios dividendos.



Las mismas fuerzas que ayer se oponían a las estatalizaciones y a la protección estatal para incrementar sus beneficios, son las que hoy se declaran a favor de una polítcia proteccionista para defender el mercado interno, porque ven que sus intereses se ven menoscabados por el nuevo sector financiero que sueña con hacer de Buenos Aires el nuevo Beirut americano, a espaldas de ciertos sectores industriales y agrarios.

El diálogo político

Viola sucede a Videla, pero no se puede decir que *tanto monta, monta tanto.* Viola expresa una necesidad distinta. ¿Cuál?

Para algunos se trata de la apertura democrática de la Junta, la transición hacia un poder civil, hacia formas parlamentarias. Sin embargo, la Junta no lo ha declarado explícitamente. El diálogo entablado no trata de la manera de traspasar el poder militar a los civiles, sino más bien de cómo asociar a los civiles a los planes de los militares. Hasta hoy han participado 39 organizaciones en el diálogo, pero hasta el momento no han sido invitados ni los dirigentes peronistas ni los de los sindicatos.

Lo que no quiere decir que los militares no los vayan a convocar un día, pero lo harán cuando tengan la estructura política que permita controlarlos. Todos los partidos burgueses se hacen ilusiones en torno al diálogo y a la elección de Viola, expresando claramente la intención de presionar política y socialmente para obtener el restablecimiento del sistema parlamentario.

Así, por ejemplo, Eloy Camus, presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista (peronista), ha declarado: *"Esta tregua en la actividad política* —reconocimiento explícito del hecho de que el peronismo ha concluido una tregua con la Junta— *se termina. El país espera de nosotros una orientación y propuestas".*

Balbín, dirigente de "Radicalismo del pueblo", segundo partido burgués de Argentina, declaraba que había dado muestras de mucha paciencia, pero que ésta tenía sus límites, y denunciaba en su discurso, titulado *"El camino del fracaso"*, los intentos del Ministerio del Interior de crear una fuerza política, llegando incluso a decir que *"las fuerzas políticas creadas en los gabinetes oficiales no han tenido éxito jamás, con la excepción,* añadió, *de las creadas por Perón, pero este éxito se debió al hecho de que fue el propio Perón el dirigente que creó el partido...".*

Sin embargo, la política del gobierno es muy clara y no da lugar a ninguna duda en cuanto a los objetivos de la Junta. Cuando se le pide al ministro del Interior, el General

Harguindeguy, si Viola será el último presidente militar "elegido democráticamente por la Junta de tres comandantes", responde que personalmente cree que será difícil que se establezca un gobierno civil en el país en 1984. Y repite la sempiterna frase, conforme a la cual *"la Junta no tiene plazo sino objetivos"*, para concluir más concretamente: *"En la hipótesis de que se alcancen los objetivos en tres años, cosa que personalmente me parece altamente improbable, podríamos decir que sería el último gobierno militar, pero si no se alcanza el objetivo, entonces no será el último"*.

Pero ¿acaso no era el objetivo terminar con "la subversión apátrida"? Parece que no. ¿Cuál es entonces el objetivo?

El ministro del Interior responde: *"La formación de grandes partidos políticos que sirvan para la concienciación del país, la transformación económica que exigirá largos años para un proceso profundo de cambio, y la solución de otros problemas, la educación, las universidades etc. Lo que nos falta es un gran partido del centro. Si no hay acuerdo con los civiles, se mantendrá el proceso"*. Con la elección de Viola *"la filosofía del actual proceso no cambiará"*.

De acuerdo con estas declaraciones, el objetivo de la Junta consiste en operar una transformación económica que exigirá años para un profundo proceso de cambio, es decir, la reestructuración de la clase dominante en el marco del nuevo orden económico mundial, y la organización de su expresión política a través de su propio partido. Flugomi, dirigente conservador, declaraba, después de una entrevista con el ministro, que *"es necesario establecer un sistema político que permita la rotación pacífica del poder entre partidos políticos poco numerosos pero fuertes"* (el sueño del bipartidismo a la americana).

El comandante en jefe del ejército, Galtieri, declaraba que *"las urnas estaban bien guardadas y no pensamos recurrir a ellas"*.

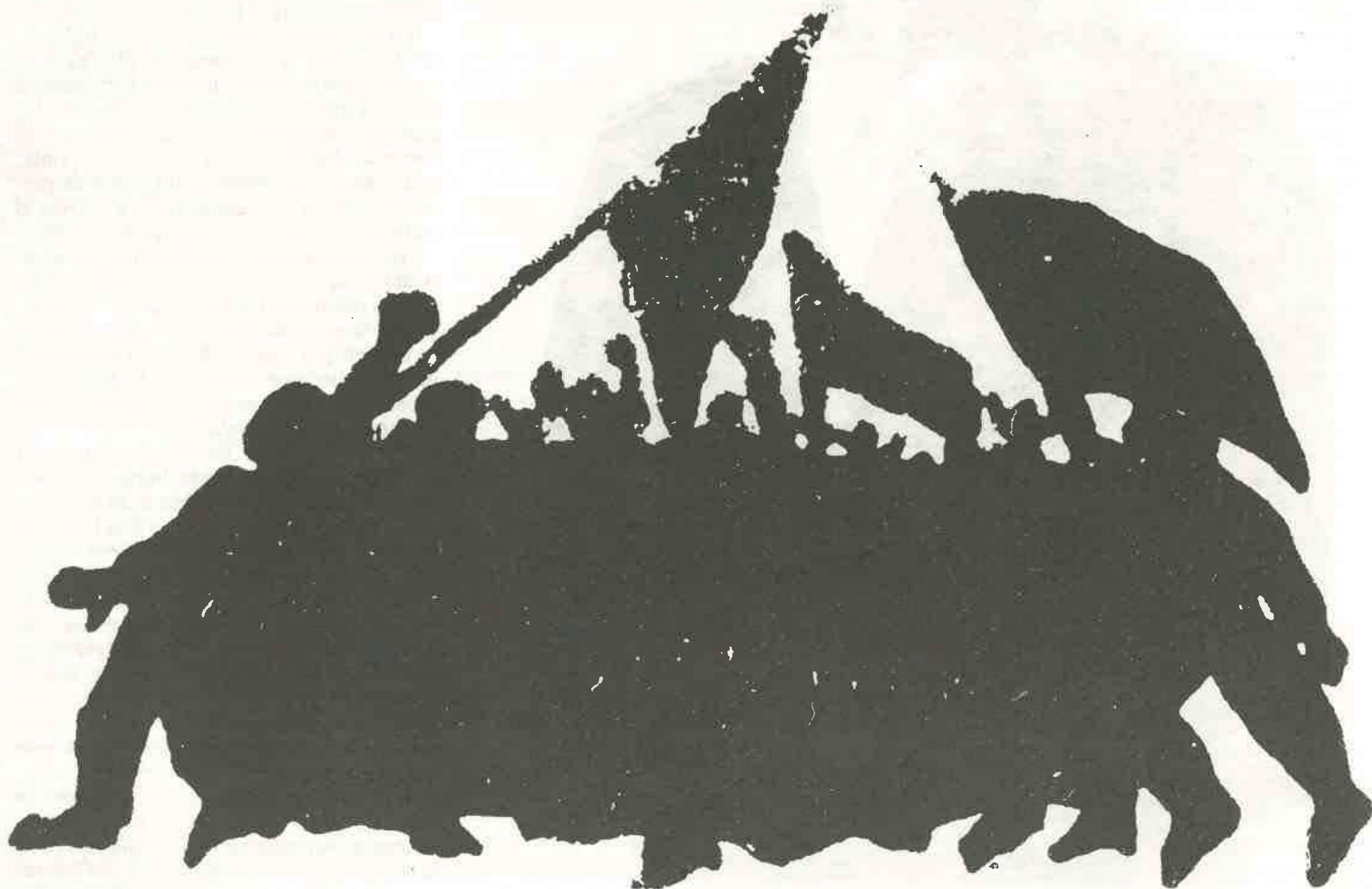
El general San Juan, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo lo siguiente ante la propuesta de excluir al peronismo del diálogo: *"Las mayorías no son omniscientes, se equivocan como cada quisque, y no es seguro que el pueblo siempre tenga razón"*.

Criticando el sistema educativo, declaró: *"El grave problema que existe es que los pequeños burgueses se proletarizan cuando llegan a un mercado de trabajo que no está en condiciones de absorberlos con sus diplomas. Por eso es necesario el numerus clausus en la Universidad"*.

He aquí los límites del diálogo abierto por el gobierno, y los límites de la apertura que se propone la Junta. Pero lo cierto es que una cosa es lo que se propone la Junta, y otra muy distinta lo que puede hacer. Pero lo cierto es también que la oposición a la Junta Militar, que ha hecho disminuir, según el propio ministro del Interior, al 51% el apoyo social de la Junta (nunca se precisa el método empleado para medir este apoyo), viene determinado por la actividad de los sectores burgueses de los círculos económicos organizados políticamente, y no por la movilización de masas.

Este tipo de oposición determina en sí mismo sus límites. Como oponentes burgueses (incluso los que critican más acerbamente), continúan justificando el apoyo prestado a la Junta en 1976, condenando la "subversión" y aplaudiendo la "política de orden y de paz social de la Junta". Algunos de ellos, como Arturo Frondizi (dirigente del movimiento "desarrollista", MID), dice muy claramente que no hay urgencia en convocar nuevas elecciones, e incluso que esto sería imprudente. La dirección peronista oficial —algunos peronistas, como Matera, han aceptado el diálogo— ha declarado que no participaría en el diálogo con el gobierno mientras permanezca presa Isabel Perón.

Y esta sorda oposición no sólo se expresa



en el territorio nacional, sino que se está convirtiendo ahora en norma que los dirigentes burgueses de oposición hagan frecuentes viajes al extranjero, particularmente a las capitales europeas, para buscar el apoyo de sectores políticos, en particular de la socialdemocracia europea, para sus planes. Esta remodelación de fuerzas en el territorio nacional y su expresión política en el exterior no deja de influir en las organizaciones de exiliados políticos. Más de una vez, estos últimos acomodan su lucha y su denuncia de la Junta a los planes y a la política de la dirección burguesa.

Pero los dirigentes burgueses no han sido los únicos en preocuparse por hacer giras diplomáticas en el exterior. La burocracia sindical no le va a la zaga. Así, Lorenzo Miguel, de la Federación del Metal, dirigente de 62 organizaciones, ha ido a ver al Papa, para pedirle, en su propio nombre y en el del movimiento obrero argentino, que intervenga cerca de la Junta, no, como cabría pensar, para que cese la represión, para conocer la suerte de los desaparecidos, la libertad de los presos, etc., sino para... ¡que sea puesa en libertad Isabel Perón!

El papel de la Iglesia y el premio Nobel

Pero las organizaciones patronales y los partidos políticos burgueses no son los únicos que se han movilizado a favor del diálogo; también está la Iglesia. Son muchos los arzobispos y obispos que han denunciado la violación de los derechos humanos por la Junta, y sobre todo el sistema de secuestros, desapariciones y torturas.

Al mostrar una particular sensibilidad por estos problemas, y en ausencia de partidos políticos organizados, de sindicatos legales y de toda vida política autorizada, la Iglesia cumple la función de sustituto organizativo y vehículo privilegiado de las protestas. Desde hace cierto tiempo se puede notar la afluencia masiva y popular a las manifestaciones o procesiones organizadas por la Iglesia.

Así, en la procesión de Luján (peregrinación tradicional donde los peregrinos recorren los 25 km. que separan Buenos Aires de Luján), una enorme muchedumbre acompañó a la procesión. En cabeza, con grandes pancartas, estaban las "locas de la Plaza de Mayo" (madres, esposas, hijas, hermanas o compañeras de desaparecidos, que se reúnen todos los jueves en la Plaza de Mayo frente al palacio del gobierno, para exigir noticias de los desaparecidos). En el transcurso de la misa denunciaron el hecho de que tan sólo en la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) y en sus suburbios de Berisso (industria frigorífica, carne congelada) y Ensenada (refino de petróleo), el número de desaparecidos haya rebasado los 4.000.

Este proceso de repliegue a la Iglesia no implica un retorno a la religión por parte de las masas explotadas, sino más bien la utilización del único medio de expresión legal a su alcance. Pero esto no dejará de tener sus consecuencias tanto en la cohesión interna de la Iglesia, como en el papel que podrá jugar ésta para contener la conciencia popular en el marco del régimen.

El papel político de la Iglesia es conocido de todos, pero hoy en día puede constituir un punto de apoyo para la organización de ese gran partido del centro con que sueña la Junta, englobando a un ala de la democracia cristiana y un sector del peronismo. La Iglesia está dispuesta a desempeñar un papel muy importante en la institucionalización de la dictadura.

La adjudicación del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, conocido por su pertenencia católica, tiene el sentido de presionar a la Junta para que asocie a los civiles a sus planes, y para influir en la lucha interna de las distintas corrientes de las fuerzas armadas. Asimismo, este premio reconforta a la Iglesia en su papel de instrumento de defensa de los derechos humanos.

De esta manera, los que querían expresar la condena general de la Junta reclamando el Nobel para las madres de la Plaza de Mayo, están satisfechos, y al mismo tiempo se colocan las corrientes católicas a la cabeza de los defensores de los derechos humanos y de "la paz social". Las declaraciones del premio Nobel se inscriben en esta lógica. Es una contribución, una nueva aportación a la perspectiva de organización del "Partido del orden y de la paz".

La reconstrucción de la CGT y las perspectivas del movimiento obrero

Hasta ahora hemos abordado los planes de la Junta, su significado, la evolución de la situación económica, el diálogo. Pero la viabilidad de los planes de la burguesía depende de la capacidad de reorganización de la vanguardia obrera, de la reconquista de los sindicatos y su organización independiente del Estado y de los partidos burgueses.

Desde la derrota de 1976, la clase obrera ha tenido que batirse en retirada. Ha visto diezmada su vanguardia, desarticuladas sus organizaciones de clase, ha perdido sus conquistas más fundamentales. Esta dictadura existe desde hace casi ya 5 años, y la clase obrera ha podido comprobar, con formas parciales y descentralizadas, que se mantiene su capacidad virtual de combate. Pero es cierto que durante este periodo la clase obrera no ha logrado reponerse de la derrota que ha sufrido; no ha logrado recuperar sus organizaciones de masas, crear una nueva vanguardia o hacer surgir una nueva dirección alternativa.

Este proceso de reorganización de la clase obrera no se resolverá con el voluntarismo político, exigirá un trabajo largo y paciente en el seno de la clase, y sobre todo la demostración sistemática, en las luchas, aún parciales, que existe una nueva vanguardia que se afirma y se muestra capaz de desarrollar las grandes experiencias de masas que siguen inscritas en la conciencia social de los trabajadores. Hará falta sobre todo que sea capaz de ofrecer a las masas una alternativa política independiente y creíble, frente a los planes de la burguesía, para hacer frente a la crisis.

Ante la amplitud y la complejidad de esta tarea, la clase obrera no aparece aún como protagonista frente a los planes de la burguesía y de la Junta. Al contrario, es la burguesía la que ha tomado la iniciativa de discutir los planes de la Junta, y su margen de maniobra en este debate se debe, entre otras cosas, a que cuenta con que la clase obrera no intervendrá y no puede intervenir.

¿Quiere decir esto que el movimiento obrero está desarticulado y que no tiene fuerza alguna? No, la clase obrera existe y manifiesta su presencia en mil y una pequeñas acciones reivindicativas, que constituyen por sí mismas límites objetivos a los planes de la Junta y de la oposición burguesa. Pero actualmente no constituye un peligro ni una alternat..a inmediata.

La reorganización del aparato productivo emprendida por la Junta ha significado, además de la represión, una desarticulación de los centros neurálgicos tradicionales de concentración obrera, un desplazamiento, incluso geográfico, de importantes sectores de la clase, la negación de las convenios colectivos, una diferenciación de las capas proletarias con condiciones de vida muy diversas, una descualificación de los obreros profesionales y nuevos tipos de categorías. Significa también una ampliación del abanico de salarios y su gran disparidad, según los puestos y el tipo de trabajo.

Todo esto dificulta la formulación de respuestas homogéneas a los problemas generales. Por otro lado, la concentración en los ramos industriales dinámicos, vinculados al capital financiero internacional (petroquímica, acerías...) y el desmantelamiento progresivo de las industrias de consumo, ligadas al mercado interior, así como el desarrollo de la tecnología empleada, han provocado una desproletarización de las capas obreras tradicionales, es decir, una pérdida de peso y una disminución en la concentración tradicional de la clase obrera (que ha pasado del 82 al 67% de la población activa asalariada).

A falta de perspectivas políticas desde el fracaso del peronismo, y en ausencia de otra alternativa, debido a la represión y al curso objetivo del proceso económico, la clase obrera no ha podido defender las conquistas de su organización sindical centralizada a escala nacional. La Junta ha

logrado asestar un golpe muy duro a la centralización sindical, prohibiendo la existencia de la CGT como confederación sindical de "tercer grado" (es decir, como confederación general a escala nacional), y sobre todo; arrebatando a los sindicatos y a su antigua burocracia la administración de las obras sociales (Seguridad Social).

Dicho esto, hay que precisar que los sindicatos existeny funcionan, y que no todos han sufrido la "intervención" del Estado. La nueva ley sobre las asociaciones sindicales, promulgada por la Junta, ha impuesto a los sindicatos el requisito de acreditar su jurisdicción (los sectores de actividad sindical que representan), y que sometan sus estatutos a un modelo redactado por la Junta. De acuerdo con estas disposiciones, 400 sindicatos, sobre un total de más de 2.000, han logrado recuperar su personalidad jurídica.

Recientemente, los sindicatos provinciales, que son casi un centenar, reunidos en confederaciones locales, han exigido a la vieja dirección sindical, dividida en tres ramos, que se unifique y reconstruya la CGT. La burocracia central tuvo que ceder a esta presión, terminando por reconstruir la CGT, unificando los grupos llamados "Comisión Nacional de Trabajo", "Grupo de los 25" y "Grupo de los 20". Cada uno de estos agrupamientos correspondía a las tendencias de la vieja burocracia sindical y a corrientes surgidas de la crisis del peronismo y del movimiento obrero en general.

El gobierno acaba de declarar, de acuerdo con la ley de asociación sindical que acaba de promulgar, que a la nueva CGT se le reconocería su personalidad jurídica (como asociación), pero no su personalidad sindical. Esta distinción tiene mucha importancia, pues significa que no se le reconoce a la nueva central su representatividad a nivel nacional, pero de todos modos la promesa de reconocerle la personalidad jurídica constituye ya una gran concesión por parte de la Junta.

Pero hay que señalar todos los límites de esta concesión de la Junta. No se trata de un retroceso frente a una ofensiva de los trabajadores, sino de la necesidad de un desarticular totalmente a la vieja burocracia sindical, que hasta ahora se ha mostrado tan útil para mantener a los trabajadores dentro de los límites del régimen.

En determinados aspectos, y para abrir el "diálogo", la Junta necesita un interlocutor cualificado que represente al sector determinante de la sociedad. La puesta en libertad del burócrata sindical Lorenzo Miguel, que actúa de hecho como el dirigente de este grupo, responde a dicha necesidad de la Junta. Son muy conscientes de que si bien hay que cortarle las alas a la burocracia, ésta les resulta muy útil.

Ya ha ocurrido que algunos sectores capitalistas que querían debilitar a las grandes centrales sindicales, creando sindicatos amarillos, facilitaron así, en la práctica, el surgimiento y el desarrollo de direcciones clasistas que pudieron aprovechar el debilitamiento de la burocracia para asumir la dirección de importantes sectores de la clase. Esto es lo que sucedió, entre otras cosas, en Córdoba, con la SITRAC-SITRAM.

Frondizi, expresidente de la República y uno de los más lucidos dirigentes de la burguesía, ha explicado en un documento presentado a la Junta: *"En el fondo, el cambio de política supone la normalización y la liberalización de la actividad sindical de los obreros y de los patronos. En el caso de la organización sindical, es necesario restablecer el principio de la unidad del movimiento obrero como condición previa para un desarrollo racional de las relaciones laborales, y como condición previa para la unidad nacional".*

Y para más claridad, precisó: *"Lo que se produjo recientemente en Polonia es muy instructivo: un gobierno como el de ese país, que se caracteriza por una fuerte concentración del poder, ha asumido la reivindicación de los obreros y ha permitido que se organicen y unifiquen a su voluntad. En Argentina, si queremos construir una sociedad justa y en constante progreso, no podemos imponer el tipo de coacción que ha abandonado Polonia".*

O si se queire, el capitalismo necesita, para su desarrollo, contar con una burocracia representativa para dialogar con ella. En el clima de represión y de desarticulación de la vanguardia obrera, la burocracia intentará aparecer como representante de los trabajadores. Pero la reconstrucción de la CGT representará un elemento de referencia para la centralización nacional de la energía de los trabajadores. La necesidad para el capitalismo de "abrir el diálogo" y permitirle a su interlocutor —la burocracia— que se reorganice, favorece el proceso de reorganización de la vanguardia.

En la lucha por la reconquista de los sindicatos y la conquista de los derechos democráticos y sindicales perdidos, los trabajadores podrán avanzar en el desarrollo de las estructuras de autoorganización que permitirán el surgimiento de una nueva vanguardia y de una dirección alternativa independiente.

En sus proyectos, la burguesía cuenta con la burocracia para someter a los trabajadores. Los trabajadores, por su parte, deben aprovechar esta necesidad de la burguesía para afirmar su organización independiente. ■

en el POUP

Se organiza la oposición

Pierre Caen

LA atención de la clase obrera polaca se centra principalmente, en los últimos tiempos, en una "zona" de la sociedad polaca que parecía haber quedado relegada a un segundo plano desde los acontecimientos del verano pasado: el POUP, el Partido comunista polaco.

La moratoria de 90 días sin huelgas, solicitada por el nuevo primer ministro, el general Jaruszelski, y las promesas que hizo han hecho disminuir un poco la tensión acumulada durante las últimas semanas en torno a la movilización por la legislación de "Solidaridad rural" y las huelgas estudiantiles.

Cada día resulta un poco más evidente que los acontecimientos en el seno del POUP constituyen un aspecto de máxima importancia para los próximos meses. A justo título se ve en la crisis del POUP, y esto más allá de las propias filas del partido, en Solidaridad y en la clase obrera, una etapa importante para toda la evolución de la situación polaca.

Toda entrevista con los responsables de Solidaridad, independientemente de sus propias posiciones políticas, muestra que se sienten concernidos por este problema, porque *"lo que sucede en el partido no se limita únicamente al partido"*, como nos declaró el vicepresidente del MKZ de Wroclaw, que añadió: *"Todo retroceso sufrido por la base radical del partido puede provocar un contraataque de la dirección, lo que puede ser peligroso para el partido y para nosotros"*.

La naciente efervescencia en el partido es el resultado de la onda expansiva propagada por las huelgas del pasado verano, y la actividad desarrollada estos seis meses pasados por Solidaridad. El hecho de que entre 1 y 1,5 millones de miembros del POUP sean también miembros de Solidarnosc, a la larga no podía dejar de tener consecuencias.

Las reivindicaciones expresadas en las empresas, por parte de Solidarnosc, han penetrado en el Partido. Se traducen así en la exigencia, muy popular en la base del POUP, de celebrar elecciones democráticas para el próximo Congreso, con la condena formal del "papel dirigente", tal como se practica administrativamente desde hace tres decenios por el POUP, y en la voluntad de transformar al PC en un auténtico "partido de vanguardia", que se esfuerce por convencer, con el debate político e ideológico, sobre la corrección de sus propuestas, en lugar de recurrir a la represión. Estas exigencias se combinan con una reflexión política que lleva a estos sectores de oposición o críticos en la base, a redactar "programas alternativos".

El edificio del Partido se resquebraja, y las grietas son visibles para toda la clase obrera polaca. Esto lo demuestra la siguiente reflexión del vicepresidente del MKZ de Wroclaw: *"Al exterior se percibe que el Partido no es una organización homogénea, que de hecho está el Partido y el aparato del Partido"*.

Este sentimiento de que el enfrentamiento no se sitúa entre el partido y Solidarnosc, sino entre Solidarnosc, los trabajadores polacos, miembros del Partido por un lado, y el aparato del Partido por otro, se extiende cada vez más ampliamente. Empieza a ser uno de los elementos fundamentales de una conciencia colectiva forjada por seis meses de lucha contra las cumbres de un partido que se identifica con las del aparato de Estado. Este es también el desmentido formal del esquema simplista planteado por los medios de comunicación de masas controlados por la burguesía, y retomado para sus propios fines por los órganos de la burocracia soviética y de ciertos partidos occidentales.

Todas las informaciones procedentes de distintas regiones del país revelan que existe un enfoque análogo por parte de estos elementos críticos y radicales: la discusión y la elaboración, por sectores de la base, de plataformas o proyectos del programa para el Congreso del Partido. Esta contestación en el seno del Partido adopta también, casi siempre, la forma de creación de estructuras "horizontales", que rompen con el funcionamiento compartimentado verticalmente y centralizado burocráticamente, que le permite al aparato ejercer su control exclusivo sobre la información, los debates y la actividad de la base del Partido.

Pese a las amenazas y las primeras medidas represivas adoptadas por el aparato (expulsión del primer secretario del Comité del POUP de la fábrica "Towimor", de Torun), estas comisiones horizontales continúan funcionando en varias ciudades, como en Radom, Poznan, Wroclaw, Cracovia, Lodz, Gdansk y, por supuesto, Torun. La evolución de los debates, al igual que la importancia de estas "comisiones horizontales", siguen procesos muy diferenciados. Sin embargo, todas tienen algo en común: la insistencia en la necesidad de cambiar el papel del Partido en la sociedad, la insistencia en los cambios fundamentales que hay que introducir en el funcionamiento del Partido, la insistencia en la "democracia socialista" y la "autogestión obrera" que hay que instaurar en la sociedad.

Para transformar el POUP, estos militantes de oposición o críticos reclaman una serie de cambios de los Estatutos, entre otras cosas la libertad de poder plantear posiciones opuestas a las de la dirección, contando para ello con una "codificación", es decir, una legalización de las "discusiones horizontales" entre miembros del Partido, y el abandono de las acusaciones de "fraccionalismo" que surgen cuando se expresa un punto de vista divergente.

Para realizar este cambio, quieren poner al aparato del Partido al servicio de éste. Esto pasa por la reducción del número de funcionarios, y sólo nombrando para estos cargos de "permanentes" a militantes que hayan trabajado por lo menos cinco años; reduciendo los mandatos a tres años prorrogables una vez; derogando el sistema de cooptación; reforzando el peso de los delegados de fábrica en los comités de *voivodia*, reservados hoy a los funcionarios del Partido; exigiendo la independencia de la Comisión de Control con respecto al Buró político; y exigiendo que los responsables a todos los niveles sean elegidos por sufragio directo.

Numerosos elementos críticos del POUP exigen, en diversos proyectos de programa, la instauración de una auténtica autogestión obrera, cuyas estructuras a nivel de empresa tendrían por misión participar en la elaboración del plan, controlar su realización y discutir sobre las inversiones.

Todos los proyectos conocidos actualmente insisten en la necesidad de aplicar una auténtica "justicia social", y cuestionan los "privilegios del cargo", insisten en la necesidad de separar al Partido del Estado, y de elegir a los diputados a la Dieta sobre la base de un amplio debate democrático. Sin embargo, las concepciones relativas a la "democracia socialista", a escala de la sociedad en su conjunto, son ambiguas y desiguales según las ciudades, o incluso entre diversas organizaciones comunistas de una misma ciudad. Esto va desde la descripción muy vaga de una democracia parlamentaria, hasta las concepciones basadas en la coordinación a escala regional y nacional de consejos obreros que deben regirse por las mismas reglas democráticas que las instauradas en el interior de Solidarnosc.

Esta desigualdad en la evolución de los

debates y de la reflexión se encuentra también en el desarrollo desigual de la oposición en el seno del Partido, al igual que en el tipo de vínculos entre estas oposiciones y Solidarnosc. Parece que a nivel nacional existen aún zonas de "calma" en el partido: particularmente en Varsovia y en Silesia.

Algunos miembros de oposición explican estos desfases por el hecho de que los mineros silesianos, que saben que son los "pulmones" de la economía y de la sociedad, y que sacan de ello unas ventajas sustanciales, siguen observando una disciplina superior a la de otras regiones con respecto al aparato del Partido. En Varsovia, es la enorme proporción de funcionarios del aparato central y del Estado, en las organizaciones del POUP, lo que explica la tibieza de su reacción.

En efecto, hasta el momento, los oponentes del POUP se enfrentan a todas las ruedas del aparato. Así, como pasó en Solidarnosc, la oposición se ha constituído primero en las grandes empresas y en los grandes centros industriales. Las direcciones burocráticas continúan manteniendo más fácilmente su control en las pequeñas ciudades. A escala de una misma *voivodía*, aprovechan además este desfase para tratar de conservar una mayoría que no da cuenta de la realidad de la relación de fuerzas en la base del Partido en los grandes centros industriales.



Los intentos de romper este aislamiento son diversos. En Wroclaw, la organización del POUP en la Universidad ha tomado la iniciativa de redactar un proyecto de progama. Ha elegido a nuevos responsables para la "renovación". Se dispone a crear "comisiones horizontales", para debatir con las organizaciones del Partido en las empresas, sobre los cambios que hay que operar en el Partido.

En Poznan ha tomado la iniciativa la organización del POUP de la Universidad. Rápidamente se le han unido las estructuras del POUP en las grandes empresas, particularmente Zagielski, aquella gran empresa que fue uno de los centros de los combates de 1956. En los coloquios organizados en noviembre y diciembre germinó la idea de que era posible redactar un programa. La mayoría aplastante de miembros del Partido de la ciudad estaba de acuerdo con el tipo de propuestas indicadas más arriba.

Decidieron entonces ampliar la comisión de preparación del Congreso, compuesta al principio de 40 miembros designados por el aparato, a 300 miembros elegidos. Y el proyecto de programa lo han hecho adoptar por esta comisión, que han logrado copar.

Tanto en Poznan, igual que en Wroclaw, la exigencia de elecciones democráticas para el Congreso encuentra una fuerte resistencia por parte del aparato. Los oponentes de la base tratan de darle la vuelta, recurriendo a ciertos artículos de los Estatutos, como el que les permite exigir elecciones a partir del momento en que lo reclame el 30% de los miembros del partido.

En Torun se ha procedido de modo distinto. A caballo de las huelgas de agosto, y después de la construcción de Solidarnosc, algunos militantes comunistas de la fábrica "Towimar" eligieron a los dirigentes de las huelgas para la dirección de la organización del POUP en la empresa. Entonces se pusieron en contacto con otras organizaciones del partido, para elaborar un programa que "surja realmente de la base". Esta coordinación horizontal reúne hoy en día a 32 organizaciones del Partido, que representan a varios millares de miembros en una ciudad de 230.000 habitantes.

El enfrentamiento con el aparato fue inmediato: Iwanow, primer secretario del POUP en "Towimar", fue expulsado del POUP... e inmediatamente reelegido por la organización del Partido en la fábrica.

Frágil a primera vista, la oposición de los comunistas de Torun dispone de importantes bazas. A diferencia de muchos elementos radicales del Partido, no son simplemente miembros de Solidarnosc, sino que han tomado la iniciativa de su creación. Esto no sólo les permite gozar de crédito y de una inmensa popularidad, sino que les ha llevado a formular en sus proyectos de programa una respuesta global, capaz de movilizar e interesar a todos los trabajadores: la gestión de la sociedad por consejos de trabajadores.

Esta inmersión en el movimiento de la clase obrera les lleva también a buscar una vinculación con los sectores más avanzados de Solidarnosc: *"Solidarnosc es nuestra garantía y nos defenderá"*, dicen. La última baza de los comunistas de Torun: su cohesión. Repiten en el interior del Partido la experiencia que han asimilado en Solidarnosc. Atomizados, sufrirán la suerte que les reserva la burocracia; organizados, se sienten como una fuerza colectiva, llevada por el movimiento de la clase obrera entera.

Este es el sentido de las reuniones "horizontales", de los encuentros organizados con los oponentes de otras ciudades. Este sentimiento de fuerza colectiva y los primeros enfrentamientos con la burocracia, les permite percibir ya que la lucha contra el aparato del Partido será una tarea a largo plazo. Una de las primeras batallas será la convocatoria y la celebración del Congreso. Según ellos deberá permitir agrupar a los oponentes contra lo que llaman *"el grupo más antisocialista que existe en Polonia, el Buró Político"*.

Pero actualmente, el primer problema de los oponentes consiste en difundir sus opiniones ampliamente, a escala nacional, para que puedan prevalecer. Esta batalla se concreta en la exigencia de elecciones libres para el Congreso. Una lucha que podría adquirir la forma de una petición masiva de los miembros del Partido en las próximas semanas.

Para esta batalla, pero sobre todo en la perspectiva de la preparación de los enfrentamientos decisivos que tendrán lugar con la burocracia del POUP, la cuestión de la vinculación que pueda establecerse entre los elementos radicales y de oposición, en el seno del Partido, por un lado, y los elementos más avanzados de Solidarnosc, por otro, aparece ya como una baza vital a los ojos de los comunistas de oposición. ■